

Dossier de jurisprudencia sobre la posesión notoria como acción autónoma

Francisco Estrada Vásquez

«muchas son las personas de Santiago que tienen puestas mesadas más o menos considerables (...) a mujeres pobres; i si todas estas quisiesen convertir (...) los beneficios que reciben en otras tantas armas para asaltar un estado social, i enrolarse en la familia de sus bienhechores, usurpándoles su fortuna cuando muerto (...), adiós benevolencia.»¹

Como es sabido, una de las reformas más trascendentales que contiene el Código Civil de Bello fue la abolición de la investigación sobre paternidad, siguiendo en esto, según arguye en el conocido Mensaje, las ideas de García Goyena. Como señala Milanich, “al dejar fuera de la ley los juicios presentados por hijos ilegítimos y sus madres contra padres putativos, el Código revolucionó las dinámicas de filiación de género, generación y clase.”² El alegato del epígrafe fue incluso repetido años después en otro juicio similar. La consecuencia de un régimen de clausura del debate filiativo fue una alta tasa de ilegitimidad. Para los años de promulgación del Código Civil, casi el 23% de los hijos nacían fuera del matrimonio. “Hacia 1870 la proporción había aumentado a más de un 25% y en 1900 superaba el 34%, aunque la estadística censal capta sólo parte de la historia. En San Felipe, más del 50% de los testadores a mediados del siglo dejaban donaciones para hijos o nietos ilegítimos, o eran ellos mismos ilegítimos y no hay razones para suponer que esta comunidad fuera particularmente inclinada a la ilegitimidad.”³ Salazar estima que en el período 1850-1930, de cada 100 niños que nacieron en Chile 37,4 fueron “huachos”.⁴

Fue necesario un largo y conflictivo viaje para lograr la amplia y libre investigación de la paternidad. La ley N° 19.585 produjo una reforma trascendental que no es posible minimizar y sentó las bases del desarrollo de los últimos 25 años del derecho de familia chileno.

¹ ZAPATA, Martín, *Alegación en derecho ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones en favor de los herederos del finado D. Santiago Yngram contra la filiación natural que se atribuye al menor D. Jorje Laureaud*, Santiago, Imprenta de Julio Belin i Ca., 1850, p. 72.

² MILANICH, Nara, “El perfil local del patriarcado legal transnacional: el Código Civil chileno en una perspectiva comparativa”, en F. Purcell y A. Riquelme (Eds.). *Ampliando miradas Chile y su historia en un tiempo global*, Santiago, Ril editores e Instituto de Historia UC, 2009, p. 97.

³ *Ibid.*, p. 116.

⁴ SALAZAR VERGARA, Gabriel. “Reflexiones históricas en torno a las reseñas de Alfredo Jocelyn-Holt y Rolf Lüders.” *Estudios Públicos*, N° 123, 2011, p. 284.

El cambio ha alcanzado desde los fundamentos, principios, reconfiguración del marco normativo a todos los aspectos de las instituciones, aunque mucho del andamiaje y categorización del antiguo sistema aún pervive generando no pocas dificultades interpretativas. En filiación eso es particularmente observable donde el conjunto de acciones no se ajusta al nuevo edificio de garantías y derechos.

Las modificaciones, por cierto, no han sido sólo legislativas, sino que la jurisprudencia ha contribuido a que el derecho de familia se ajuste a las necesidades de las familias chilenas actuales. Los tribunales, en los distintos niveles, han ido construyendo, lenta pero decididamente, lecturas desde el nuevo *corpus juris* del derecho de familia.

Es así como, desde hace 6 años, la Corte Suprema ha enriquecido la comprensión de la antigua figura de la posesión notoria para alinearla con el derecho a la identidad y el interés superior del hijo, reconociéndole un carácter, novedoso pero ajustado a derecho, de acción autónoma.

Conforme indica la profesora Gómez de la Torre, “en la posesión notoria resulta evidente que el foco está puesto en la valoración de los lazos psicológicos, emocionales y afectivos que se crean entre el pretendido progenitor o progenitora y el hijo o hija, observando que el telón de fondo es el principio central de primacía de la verdad formal de la posesión notoria por sobre la verdad biológica.”⁵ Y es que la posesión notoria “obedece a la máxima ‘padres/madres son los que crían’”.⁶

En ello ha coincidido con las recientes reformas legales que permiten afirmar que, en la actualidad, “el Derecho chileno reconoce el derecho a la vida familiar teniendo en cuenta no un único y excluyente tipo de conformación familiar”.⁷

Esta forma de comprender la posesión notoria hace emerger -junto a la adopción por integración y a las declaraciones judiciales innovativas⁸- a la crianza como una singular fuente de la filiación.

En la argumentación de la Corte me parece que cabe relevar la forma en que desarrolla el derecho a la identidad, el que “no se limita a considerar el aspecto físico o biológico de la persona, pues comprende el bagaje espiritual, intelectual, político, profesional, etc., a través del cual se proyecta socialmente al exteriorizar de alguna manera los aspectos propios de la personalidad; y que la identidad personal encuentra su fundamento axiológico en la dignidad del ser humano, que es un derecho personalísimo merecedor, por sí, de tutela jurídica, y autónomo.”⁹

También merece ponerse atención a la construcción del principio de veracidad que alzaprima sobre

⁵ GÓMEZ DE LA TORRE, Maricruz, “La posesión notoria del estado civil de hijo/a como acción autónoma”, en Barrientos, F. Directora, *Estudios de derecho de familia. VII Actas de las séptimas jornadas nacionales, Facultad de derecho Universidad Alberto Hurtado*. Thomson Reuters, 2023, p. 420.

⁶ HERNÁNDEZ PAULSEN, Gabriel y LATHROP GÓMEZ, Fabiola, *Derecho de familias*, Santiago, Tirant lo Blanch Chile, 2022, p. 240.

⁷ ALVAREZ ESCUDERO, Rommy y LATHROP GÓMEZ, Fabiola, “Derecho a las vidas familiares y adopción por integración en Chile: una mirada desde la socioafectividad”, *Oñati International Institute for the Sociology of Law*, 2024: OSLS First Online, p. 7.

⁸ Comarentalidad: 2° Juzgado de Familia de Santiago, RIT C-10028-2019, de 8 de junio 2020, y Juzgado de Familia de Punta Arenas, RIT C-745-2020, de 7 de diciembre de 2021.

Pluriparentalidad: Juzgado de Familia de Osorno, 26 de agosto de 2024, RIT C 421-2021 y Juzgado de Familia de San Antonio, 25 de agosto de 2025, RIT C 187-2024.

⁹ Corte Suprema, 26 de agosto de 2019, rol N° 18707-2018, consid. 4°.

el biológico:

“Que la reforma introducida por la Ley N° 19.585 hace primar la verdad real o biológica por sobre la formal, por lo tanto, es presidido por el denominado principio de veracidad cuyo criterio rector es el derecho a la identidad; se sustenta en la noción de la libre investigación de la paternidad o maternidad y en la de acceso de toda persona a una investigación judicial con una amplia admisibilidad probatoria.”¹⁰

En todo caso, como apunta el voto de minoría del fallo de 2020, lo que hace la Corte es continuar con la función original de la posesión notoria.

si se examina con detención el antiguo artículo 271 del Código Civil, se verá que se otorgaba la calidad de "hijo natural", N° 1) a quienes el padre o madre hubiere reconocido como suyo; N° 2) al que hubiera obtenido reconocimiento por sentencia judicial, supeditado a la existencia de un instrumento público en que constara una "confesión manifiesta" de maternidad o paternidad; "N° 3) a los que hubieren poseído notoriamente a lo menos durante diez años consecutivos, la calidad de hijo respecto de una determinada persona"; y N° 4) aquellos reconocidos por el supuesto padre, que citado a presencia judicial, confesare bajo juramento la paternidad.¹¹

El derogado artículo 271 del Código Civil, sin lugar a dudas, permitía que la posesión notoria pudiera constituir una fuente de determinación de filiación.¹² Lo hacía en un sistema filiativo distinto, al servicio de la filiación natural.

De este conjunto de sentencias parece clara una línea que viene a consolidar un derecho de las familias, en la precisa manera en que lo proponen Hernández y Lathrop¹³, es decir, un derecho que se ajuste a la diversidad de las formas familiares y no al revés.

Llama negativamente la atención en el conjunto de los fallos compilados, la nula o escasa construcción argumentativa de la determinación del interés superior del niño, lo que se torna en una falta aun más seria en las sentencias posteriores al 15 de marzo de 2022, fecha de publicación de la ley N° 21.430. Aun cuando justamente fue la ley N° 19.585 la primera en incorporar al ordenamiento jurídico interno a este principio, entonces sólo perteneciente al derecho internacional de los derechos humanos (en los arts. 3, 9, 18, 21 y 37 c) de la Convención sobre derechos del niño y 16 de la CEDAW), pareciera que en la perspectiva de nuestro máximo tribunal no fuera necesario, en asuntos de filiación, determinar el interés superior del niño.¹⁴ Este es un error serio que puede hacer incurrir

¹⁰ Corte Suprema, 26 de agosto de 2019, rol N° 18707-2018, consid. 5°.

¹¹ Corte Suprema, 7 de agosto de 2020, rol N° 2696-2020.

¹² GÓMEZ DE LA TORRE, ob. cit. (n. 5), p. 427.

¹³ HERNÁNDEZ PAULSEN y LATHROP GÓMEZ, ob. cit. (n. 6), pp. 22-25.

¹⁴ Justamente la Corte Suprema patrocinó la construcción de una herramienta metodológica para este trabajo en CILLERO BRUÑOL, Miguel, VALENZUELA RIVERA, Ester, LARRAÍN HEIREMANN, Soledad, LATHROP GÓMEZ, Fabiola, ESTRADA VÁSQUEZ, Francisco, QUESILLE VERA, Anuar, y GONZÁLEZ JANSANA, Juan Pablo (2022). *Guía para la Evaluación y Determinación del Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes en casos de medidas de protección especialmente vinculadas al cuidado alternativo*. CIDENI para Unicef. <https://uni.cf/3zbKybe>

a la Corte en responsabilidad internacional. Debe recordarse que en los dos dictámenes¹⁵ en que el Comité de derechos del niño ha formulado reproche al Estado de Chile en virtud del Tercer protocolo facultativo, uno de aquellos reproches ha sido justamente la inadecuada consideración de este principio.

Incluí en el compilado un fallo que niega lugar a la acción porque es del mismo período y permite visualizar la evolución de la línea.

Las sentencias van citándose consecutivamente y aprovechando párrafos enteros de anteriores fallos. Esto, que en un escrito académico puede considerarse un error en este caso constituye una técnica argumentativa que facilita la comprensión de la interpretación y honra la igualdad ante la ley.

Adicionalmente la Corte cita dos fallos de otros tribunales:

Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de abril de 2012 (Caso Fornerón e hija vs. Argentina)

Tribunal Constitucional, sentencias de 13 de mayo de 2008 y 29 de septiembre de 2009, dictadas en antecedentes roles 834 07 y 1340 09, respectivamente).

Lo que sí resulta problemático es la inconsistencia. Este fenómeno ha sido anotado de un modo exacerbado en casos de derecho administrativo,¹⁶ y aparece acá cuando el fallo que se aparta, desconoce los anteriores fallos y no los cita. Eso no es aceptable.¹⁷ Por supuesto que puede marcar una distancia y disentir y configurar una argumentación propia y distinta. No es eso lo que se reprocha. Lo objetable es que se desentienda de los anteriores fallos y los desconozca. Existe entre nosotros una tradicional insuficiente capacidad de discusión entre los fallos y entre los ministros del mismo fallo. No es bien visto. Pero la argumentación jurídica exige la confrontación de tesis. Las Cortes Supremas de EE.UU., de México o de Colombia publican fallos en que un juez o ministro discute la argumentación de sus pares, a veces incluso con intensidad. Eso no ocurre entre nosotros donde es el lector quien debe hacer debatir las distintas líneas argumentales.

Por otro lado, el máximo tribunal se ha preocupado de apoyar su exégesis en la literatura actualizada, lo que es digno de aplauso, sobre todo ya que en muchos fallos las Cortes de Apelaciones no ofrecen el mismo manejo de la bibliografía actualizada del derecho de familia contemporáneo. El conjunto de autores citados, tal cual se presentan en las sentencias, es:

Troncoso L., Hernán, Derecho de Familia, Actualizado con la Ley 19.585, Concepción: Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de Derecho Privado, Año 2000, Págs. 219 220

Del Arco Torres, Miguel Ángel, Diccionario Básico Jurídico, 7a edición, Año 2009, Granada: Comares, Pág. 255

¹⁵ COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, *Informe de la investigación relacionada en Chile en virtud del artículo 13 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones*, 2018; y COMITÉ DE DERECHOS DEL NIÑO, *Views adopted by the Committee under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, concerning communication No. 121/2020*.

¹⁶ VERGARA BLANCO, Alejandro, “El derecho administrativo ante la jurisprudencia de la Corte Suprema: Líneas y vacilaciones”, *Revista de Derecho Administrativo Económico*, N° 28, 2019.

¹⁷ Corte Suprema, 7 de agosto de 2020, rol N° 2696-2020, consid. 7.

-
- Famá, María Victoria, La filiación, régimen constitucional, civil y procesal, 2º Edición, Editorial Abeledo Perrot, Págs. 20-21
- Fernández Sessarego, C., Derecho a la identidad personal, Buenos Aires, Editorial Astrea, Año 1992, Págs. 113 y 114
- Gómez de la Torre V., Maricruz, El sistema filiativo chileno, 1º Edición, Año 2007, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 88
- René Abeliuk M., La filiación y sus efectos, 1º Edición, Año 2003, Editorial Jurídica de Chile, Págs. 157 y 172
- Dias, M., “Filiación socioafectiva: nuevo paradigma de los vínculos parentales”, UCES, Nº 13, 2009, p. 85
- Álvarez Escudero, R., “La socio-afectividad como sustrato de relaciones parentales sin base biológica. Panorama en el ámbito jurídico iberoamericano”, en Sole, J. (coord.), Persona, Familia y Género, Atelier, Barcelona, 2022, p. 163
- Verdugo Toro, Javiera, “Aplicación judicial de la posesión notoria del estado civil de hijo como forma de determinar la filiación: cuatro ideas”, en Estudios de Derecho Civil XI, Thomson Reuters, año 2016, págs. 254-255
- Ramos Pazos, René, en Derecho de Familia, Tomo II, Editorial Jurídica, año XX, p. 399, citando al profesor Rossel

Con todo, parece oportuno que los tribunales enfrenten las preguntas que plantea la profesora Gómez al cierre de su artículo en que plantea diversas dificultades que genera la nueva perspectiva.¹⁸

Santiago, noviembre de 2025

✍

¹⁸ GÓMEZ DE LA TORRE, ob. cit. (n. 5), pp. 428-429.

LISTA DE SENTENCIAS:¹⁹

1. Corte Suprema, 26 de agosto de 2019, rol N° 18707-2018.	p. 7
2. Corte Suprema, 14 de julio de 2020, Rol N° 12.792-2019.	p. 16
3. Corte Suprema, 20 de agosto de 2020, rol N° 16.219-2019.	p. 24
4. Corte Suprema, 5 de abril de 2021, rol N° 18.213-2019.	p. 31
5. Corte Suprema, 23 de enero de 2025, rol N° 153.485-2024.	p. 37
6. Corte Suprema, 17 de febrero de 2025, rol N° 234.885-2023.	p. 41
7. Corte Suprema, 26 de marzo de 2025, rol N° 6.530-2024.	p. 51
8. Corte Suprema, 1 de septiembre de 2025, rol N° 60884 2024	p. 60

EN CONTRA:

Corte Suprema, 7 de agosto de 2020, rol N° 2696-2020.	p. 68
---	-------

¹⁹ Sólo los fallos con menores de edad se han anonimizado.

1. Corte Suprema, 26 de agosto de 2019, rol N° 18707-2018.

Sentencia de casación

Santiago, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve.

Vistos:

En autos número de RIT C 714 2017, seguidos ante el Juzgado de Letras de Familia de Alto Hospicio, por sentencia de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se desestimó la demanda de impugnación de maternidad y de paternidad, como la de reclamación de filiación; que fue confirmada por una sala de la Corte de Apelaciones de Iquique, por sentencia de cinco de julio del mismo año.

En contra de la referida decisión el demandante dedujo recurso de casación en el fondo, denunciando la infracción de las normas que indica, y solicita que se lo acoja y se la anule, acto seguido y sin nueva vista, se dicte la de reemplazo que describe.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

1° Que el recurrente, en primer lugar, expresa que la demanda de impugnación de filiación que dedujo en contra de doña Elia Gloria Caro Navarrete y de don César Humberto Cortés Alarcón, y de reclamación de filiación que formuló en contra de don Jorge Mauricio Araya Carvajal y de doña Eugenia del Pilar Campos Alarcón, la sustentó en que nació el 1 de septiembre de 1992 y fue inscrito el 29 de octubre del mismo año en la circunscripción de Chillán, bajo el N° 2.975 del Registro Civil e Identificación, siendo reconocido por los dos primeros mencionados, no obstante que no suscribieron el acta de nacimiento, a quienes no reconoce como padres; pues recién nacido fue entregado por la señora Caro Navarrete a CONIN, por problemas de desnutrición, y en ese contexto la señora Campo Alarcón y su abuela paterna, al ser consultada por Carabineros de Chile de la comuna de Trehuaco, tramitaron una causa en el Juzgado de Letras de Quirihue para asumir su crianza, lo que tardó como tres meses, y desde ese momento pasó a integrar la vida de ella, hasta la actualidad, sin tener contacto alguno con la primera. Añade que cuando tenía 7 años de edad, su madre conoció a don Jorge Mauricio Araya Carvajal, su actual marido pues se casaron el 24 de noviembre de 2006, a quien reconoce como padre, y ellos, a su vez, como hijo frente a familiares, vecinos y amistades, por lo tanto, asumieron el rol de madre y de padre, por sobre sus progenitores biológicos, preocupándose de su educación, desarrollo, bienestar, cuidado y protección, siendo conocido bajo los apellidos "Araya Campos", durante dieciocho años, ya que tiene 25 años de edad, por lo tanto, existe una posesión notoria de hijo respecto de aquellos.

Luego, hace referencia a las diferentes actuaciones procesales de la causa y a las probanzas rendidas al tenor de los hechos materia de prueba, sosteniendo que se acreditaron, formando convicción en la judicatura acerca de que existe filiación determinada del demandante y posesión notoria del estado civil de hijo, respecto de los demandados de impugnación y de reclamación, respectivamente.

En segundo lugar, señala que la sentencia impugnada desestimó la demanda por no cumplirse los presupuestos legales de las acciones deducidas, toda vez que la filiación coincide con una realidad

biológica no cuestionada, lo que genera agravio, toda vez que se determinó que concurre la posesión notoria del estado civil de hijo respecto de los demandados de reconocimiento, lo que cuestiona la realidad biológica (impugnando la filiación) y, en dicha virtud, como lo ha establecido la Corte Suprema, se puede dar por determinada una filiación estableciendo una excepción en la búsqueda de la verdad, haciendo primar la posesión notoria de estado civil.

Sostiene que el centro de debate fue la existencia de la posesión notoria del estado civil de hijo, no controvertido, y es un medio prueba que el juez de familia puede tener en consideración para dar por acreditada la filiación que se impugna o reclama, atendido los términos de los artículos 200 y 201 del Código Civil, siendo el criterio que adoptó la Corte Suprema en sentencia dictada en causa número de rol 8953 12, transcribiendo lo pertinente; que en cuanto se sostiene que el concepto de filiación está fundado "en el vínculo de sangre", indica que la Ley N° 19.620 ha permitido que pueda serlo por adopción, y aun existiendo, y siendo controvertido o presentándose contradicción, la situación de hecho prefiere a las pruebas periciales biológicas, pues la adopción tiene por objeto velar por el interés superior del adoptado, y amparar su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, cuando no pueda ser proporcionado por su familia de origen, lo que ocurrió en el presente caso; que, además, como no se presenta la inconveniencia a que refiere el inciso segundo del artículo 201 del código citado, se optó por acreditar debidamente la posesión notoria; que, en cuanto se expresa que no se dan los supuestos del artículo 217 del Código Civil, toda vez que el abandono de un menor, si bien es una conducta reprochable con consecuencias civiles y penales, no puede ser el fundamento para entablar la acción de impugnación, afirma que se olvida que se tuvo por debidamente acreditada la posesión notoria de la calidad de hijo, situación de hecho distinta de lo biológico, que va más allá de un falso parto o de la suplantación del pretendido hijo al verdadero y, en todo caso, nada se dice respecto de la impugnación de la paternidad que reclama; que no se ha intentado alterar normas de orden público, pues se dedujo una acción de impugnación y otra de reclamación de filiación, siendo válidamente notificados los demandados; que la Ley N° 19.585, descansa, entre otros, en el derecho a la identidad, esto es, en el que tiene toda persona a conocer sus orígenes, que también es recogido en el catálogo de derechos fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño y en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y del análisis de los artículos 200 y 201 del estatuto civil se puede afirmar que se prefiere la verdad social, y al declarar que la acción de impugnación caduca en los plazos que establecen, es evidente que la intención o espíritu de la ley es hacer primar la estabilidad del estado filiativo adquirido. En efecto, el artículo 200 sostiene que la posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona servirá también para que el juez tenga por suficientemente acreditada la filiación, siempre que haya durado a lo menos cinco años continuos y se puede por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignas que la establezcan de un modo irrefragable, lapso cumplido. Por su parte, el artículo 195 prescribe que la ley posibilita la investigación de la paternidad o maternidad en la forma y con los medios previstos en la ley, que tanto la filiación matrimonial como la no matrimonial puede ser determinada por sentencia firme en juicio de filiación, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 185 inciso final y 186, lo cual implica la investigación de paternidad, la que puede establecerse mediante toda clase de

pruebas en la forma y con los medios indicados en los artículos 195 y siguientes, y el artículo 200 establece como medio de prueba para acreditar la filiación, la posesión notoria de la calidad de hijo respecto de una persona, en las condiciones que señala. Asimismo, el artículo 216 dispone que se podrá impugnar la paternidad determinada por reconocimiento por toda persona que pruebe un interés actual en ello, en el plazo de un año desde que tuvo ese interés y pudo hacer valer ese derecho, y el artículo 208 que si estuviese determinada la filiación de una persona y quisiera reclamarse otra distinta, deberán ejercerse simultáneamente las acciones de impugnación de la filiación existente y de reclamación de la nueva, en cuyo caso, no rigen para la primera los plazos legales.

En tercer lugar, afirma que la sentencia que refuta infringió lo que disponen los artículos 200, 201 y 208 del Código Civil, al considerar que no es suficiente el hecho de tener por acreditada la posesión notoria de la calidad de hijo para tener por determinada la filiación que se reclama, dado que la que tiene coincide con una realidad biológica no cuestionada, lo que genera agravio, toda vez que se probó su concurrencia, lo que cuestiona de plano la realidad biológica (impugnando la filiación) y en dicha virtud, como lo ha establecido la Corte Suprema, se puede determinar una filiación estableciendo una excepción en la búsqueda de la verdad, haciendo primar la posesión notoria de estado civil si es contradictoria con la realidad biológica, facultándolo para decidir lo contrario en aras de respetar el interés superior del niño, si existe para éste grave inconveniente.

Entonces, la infracción al artículo 200 se configura al desestimarse las demandas, por considerar que no se cumplen los presupuestos legales, ya que la judicatura está legalmente facultada para tener por acreditada la que reclama, pues se probó la existencia de la posesión notoria del estado civil de hijo. Agrega que el artículo 201 autoriza preferirla si está debidamente acreditada, a las pruebas periciales de carácter biológico si hay contradicción entre unas y otras, pero, si hay graves razones que demuestren la inconveniencia para aplicarla, prevalecen dichas pruebas; contexto que permite concluir que su errónea interpretación dice relación con el valor probatorio que le entrega a la posesión notoria debidamente acreditada, ya que utiliza la palabra "prefiere", y, en el presente caso, no hay pruebas biológicas que autoricen preferirlas en desmedro de la posesión notoria del estado civil de hijo.

También que al considerarse que la pretensión excede el sentido y alcance de las acciones de impugnación y de reclamación de paternidad y maternidad, se conculcó lo que dispone el artículo 208, ya que establece que si estuviese determinada la filiación de una persona y quiere reclamarse otra, deben ejercerse simultáneamente las acciones de impugnación de la filiación existente y de reclamación de la nueva, por lo tanto, no se incurrió en ningún exceso, y atendida su edad, la opción utilizada es la viable para que se la determine y se reconozca su derecho a la identidad.

Concluye señalando cómo los errores de derecho que denuncia influyeron sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia impugnada, y solicita que se la anule y se acoja la demanda y se declare que se deja sin efecto la filiación respecto de la señora Caro Navarrete y del señor Cortes Alarcón, y se la tenga por reconocida respecto de la señora Campos Alarcón y del señor Araya Carvajal, ordenando oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación a fin de que rectifique la inscripción de nacimiento.

2° Que la sentencia impugnada tuvo por establecido que el demandante, de 26 años de edad,

tiene filiación determinada, siendo sus progenitores legales doña Elia Gloria Caro Navarrete y don Cesar Humberto Cortes Alarcón, la que no fue desacreditada por pruebas biológicas; y que, a su respecto, existe posesión notoria de estado civil de hijo en relación al matrimonio conformado por don Jorge Mauricio Araya Carvajal y doña Eugenia del Pilar Campos Alarcón.

A continuación, señala que el artículo 217 del Código Civil establece que se puede impugnar la maternidad alegando falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero, y que la filiación es la relación de descendencia entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra, de modo que su fundamento es el vínculo de sangre existente entre el progenitor y el hijo, proveniente de las relaciones sexuales, lícitas o ilícitas, por lo tanto, no se dan los supuestos de dicha norma y que sirve de sustento a la acción de impugnación de maternidad, puesto que el abandono de un menor, por más que resulte ser una conducta reprochable y que, por cierto, puede conllevar una serie de efectos civiles, incluso penales, no genera el desecho por el demandante; y que las acciones de filiación conllevan la modificación de un estado civil, en concreto el de hijo, y en tal sentido son normas de orden público indisponibles por la voluntad de las partes o por el tribunal, por lo que no es posible que con la mera manifestación de voluntad del demandante y de los demandados de reclamación de filiación, alterar uno que está legalmente determinado, sin perjuicio de otras acciones que puedan resultar procedentes.

Tratándose de la institución de la posesión notoria del estado civil, alude a lo manifestado por esta Corte en autos número de rol 15.210, con fecha 4 de noviembre de 2015, en el sentido que no corresponde a una acción autónoma de reclamación de filiación, sino estrictamente a un medio probatorio cuya procedencia se sujeta a las exigencias que el legislador impuso en relación a su objeto, esto es, establecer una determinada filiación respecto de quien reclama el reconocimiento del vínculo sanguíneo de la paternidad; y que otra cosa es que se reconozca la posibilidad de que desacreditado por medio de un examen pericial biológico el vínculo sanguíneo, una determinada situación social, como lo es la posesión notoria del estado de hijo, pueda hacer al juez preferirla por sobre la evidencia científica, pero sólo procede al ejercerse el derecho de la investigación de la paternidad, en cuanto se indaga una verdad desconocida, oculta, dudosa, por lo que no parece plausible ni procedente su ejercicio en el caso, pues los que tienen el vínculo biológico son a quienes la ley reconoce el carácter de padre y madre, entonces, en estricto rigor, no hay uno de filiación dudoso que deba ser investigado.

Concluye que no se cumplen los presupuestos legales de las acciones deducidas, y que la pretensión que las sustenta excede el sentido y alcance de ambas, desde que la filiación de don Jesús Humberto Cortés Caro coincide con una realidad biológica no cuestionada.

3° Que la filiación, según la doctrina sobre la materia, "es el vínculo jurídico existente entre el padre o la madre y el hijo; se refiere tanto a la relación de paternidad o maternidad, respectivamente, " y se la caracteriza como un "fenómeno jurídico que se fundamenta en el hecho fisiológico de la procreación, con la salvedad de la filiación adoptiva creada por el legislador y artificial, en el sentido que no supone un vínculo de sangre " (Troncoso L., Hernán, Derecho de Familia, Actualizado con la Ley 19.585, Concepción: Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de Derecho Privado, Año 2000, Págs. 219 220). También, que es la "Relación, con alcance jurídico, entre padres e hijos. Como hecho natural, se da siempre pues constituye una

consecuencia de la procreación. Como hecho jurídico, estado de filiación, es decir, situación jurídica constatada, es la posición que una persona ocupa dentro de una familia en su calidad de hijo " (Del Arco Torres, Miguel Ángel, Diccionario Básico Jurídico, 7a edición, Año 2009, Granada: Comares, Pág. 255).

Pues bien, la relación o estado que origina se conecta o influye en otros efectos jurídicos, v. gr., algunos atributos de la personalidad (estado civil, nombre, nacionalidad y domicilio del hijo), y se encuentra reglada en el Libro I del Código Civil, artículos 179 a 273, que conforma el estatuto filiativo, que se basa en los siguientes principios: la igualdad de todos los hijos, su interés superior y el derecho a la identidad.

4° Que, en lo que concierne al referido derecho, la doctrina señala que no se limita a considerar el aspecto físico o biológico de la persona, pues comprende el bagaje espiritual, intelectual, político, profesional, etc., a través del cual se proyecta socialmente al exteriorizar de alguna manera los aspectos propios de la personalidad; y que la identidad personal encuentra su fundamento axiológico en la dignidad del ser humano, que es un derecho personalísimo merecedor, por sí, de tutela jurídica, y autónomo.

El doctrinario Eduardo Zanoní, por su parte, señala que la noción jurídica de identidad no es unívoca, admitiendo, por lo menos, tres acepciones: a) la identidad personal en referencia a la realidad biológica, relativa al derecho a conocer el origen biológico y, consiguientemente, a obtener el emplazamiento en el estado de familia que de acuerdo con tal origen le corresponda; aspecto que abarca: la identidad genética, que se refiere al patrimonio genético heredado de los progenitores biológicos, o sea, el genoma, y la identidad filiatoria, que resulta del emplazamiento de una persona en un determinado estado de familia, en relación a quienes aparecen jurídicamente como sus padres, la que está habitualmente en concordancia con la identidad genética, pero puede no estarlo; b) la identidad personal en referencia a los caracteres físicos de la persona, relacionada con los rasgos externos que la identifican e individualizan; y c) la identidad personal en referencia a la realidad existencial de la persona, entendida como la realización del proyecto existencial propio. (Famá, María Victoria, La filiación, régimen constitucional, civil y procesal, 2° Edición, Editorial Abeledo Perrot, Págs. 20-21).

Asimismo, se ha sostenido que es "...el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social..." (sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de abril de 2012), y "que es el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad, por lo que es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro; por lo tanto, se despliega en el tiempo y se forja en el pasado desde el instante mismo de la concepción donde están las raíces y los condicionamientos pero traspasando el presente existencial, se proyecta al futuro" (Fernández Sessarego, C., Derecho a la identidad personal, Buenos Aires, Editorial Astrea, Año 1992, Págs. 113 y 114).

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha relacionado el derecho a la identidad con la dignidad humana, noción esta última que considera como la "piedra angular de todo el edificio de los derechos fundamentales", concluyendo que no obstante que la Carta Fundamental carece de una referencia o reconocimiento expreso de la identidad como prerrogativa humana básica, ello no obstaculiza su protección constitucional, debido justamente a la estrecha vinculación entre ambos conceptos. Del mismo modo, que goza de un estatuto similar al derecho a la nacionalidad del que no puede carecer una persona y que se justifica incluir el derecho a la identidad personal entre aquellos esenciales a la naturaleza humana a que alude al artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental. (sentencias de 13 de mayo de 2008 y 29 de septiembre de 2009, dictadas en antecedentes roles 834 07 y 1340 09, respectivamente).

Con todo, se debe tener presente que el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce como elementos de la identidad a la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, y en el artículo 8 impone a los Estados Partes el compromiso de respetar el derecho del niño a preservar su identidad; que el artículo 19 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce a toda persona el derecho a la nacionalidad, y el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a todo ser humano, en todas partes, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Dicho contexto autoriza colegir que, si bien la normativa interna no eleva a la categoría de fundamental el derecho a la identidad, en la medida que el artículo 1 de la Constitución Política de la República establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y el de identidad es uno personalísimo, inherente a toda persona, independiente de su edad, sexo o condición social, por lo tanto, está íntimamente vinculado a la dignidad humana, debe ser considerado entre aquellos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana a que se refiere el inciso 2° del artículo 5 de la misma, que, conforme a su tenor, se erigen como límite al ejercicio de la soberanía, imponiendo a los órganos del Estado respetarlos y promoverlos.

5° Que la reforma introducida por la Ley N° 19.585 hace primar la verdad real o biológica por sobre la formal, por lo tanto, es presidido por el denominado principio de veracidad cuyo criterio rector es el derecho a la identidad; se sustenta en la noción de la libre investigación de la paternidad o maternidad y en la de acceso de toda persona a una investigación judicial con una amplia admisibilidad probatoria; y consagra la imprescriptibilidad e irrenunciabilidad de la acción de reclamación de filiación. Sin embargo, en lo que concierne a la primacía que consagra, contempla excepciones, en lo que interesa, la institución de la posesión notoria del estado civil de hijo, que, debidamente acreditada, prefiere a las pruebas periciales de carácter biológico.

6° Que dicha institución está definida en el inciso 2° del artículo 200 del Código Civil, en los siguientes términos: "Consiste en que su padre, madre o ambos le hayan tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos; y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como tal" Conforme lo disponen los incisos primero y segundo del mismo, se compone de tres elementos: el nombre, el trato y la fama, que deben haberse configurado, a lo menos, durante cinco años continuos; y debe ser acreditada mediante un conjunto de testimonios y antecedentes o

circunstancias fidedignas que la establezcan en forma irrefragable; hecho, sirve a la judicatura para tener por suficientemente acreditada la filiación, que podría catalogarse como una de tipo social, cuyo fundamento, según se advierte, está dado por los lazos de afecto, dado que "ejercer de padre, querer serlo y haberlo sido por más de 5 años puede ser más relevante que la verdad genética. Además, el padre social ha desarrollado lazos afectivos con el menor, que le dan a éste estabilidad psicológica". (Gómez de la Torre V., Maricruz, El sistema filiativo chileno, 1º Edición, Año 2007, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 88) Considerando los términos de la mencionada norma y los de los artículos 201 y 309 del Código Civil, tanto la doctrina como la jurisprudencia afirma que la posesión notoria del estado civil conforma una prueba que permite establecer la filiación. Sin embargo, las probanzas que debe rendir el litigante que la invoca deben estar dirigidas a acreditar los elementos que la componen, esto es, sus circunstancias fácticas, a saber, nombre, trato y fama; y demostradas, la consecuencia jurídica ineludible es que se está en presencia de dicha institución.

7º Que la acción de reclamación de la filiación se puede definir como "aquella en cuya virtud quien no tiene determinada su filiación, demanda que sea declarada judicialmente", esto es, se solicita que se declare que es hijo de su padre o madre, o viceversa, y la de impugnación del vínculo filiativo como "aquella que persigue dejar sin efecto la filiación que ha quedado determinada respecto del padre, madre o hijo" (René Abeliuk M., La filiación y sus efectos, 1º Edición, Año 2003, Editorial Jurídica de Chile, Págs. 157 y 172); y se caracterizan porque no son cedibles ni pueden ser objeto de conciliación o transacción, ni someterse a compromiso, siendo la primera imprescriptible e irrenunciable, la segunda solo irrenunciable; y están regladas en los artículos 204 a 221 del Código Civil, en cuanto precisan quienes pueden deducirlas y contra quienes y, según sea el caso, cómo y en la oportunidad en que deben ser interpuestas. Pero, tratándose del hijo como legitimado activo, según se advierte de la lectura de dichas disposiciones, no indican cuál o cuáles deben ser sus fundamentos, por lo tanto, no se divisa razón por la que solo podrían basarse en la realidad biológica y no en la social, esto es, en la posesión notoria del estado civil de hijo, tampoco en que ésta únicamente se puede invocar como excepción para enervar una acción de impugnación de la filiación, más aun considerando lo ya señalado a propósito del derecho a la identidad, que constituye uno de los fundamentos del estatuto filiativo.

Con todo, corresponde tener presente que esta Corte ha señalado que "...De este modo, se hacen evidentes las infracciones de ley alegadas..., pues... los sentenciadores desestimaron la posibilidad de reclamar la maternidad invocando la posesión notoria, en circunstancias que esta es plenamente compatible con la interposición de una acción de reclamación de la filiación, la que resulta suficiente para justificar el hecho de la maternidad si se cumple con los requisitos constitutivos consagrados en el artículo 200 del Código Civil, lo que ocurrió, pues, como se advierte de la lectura de la sentencia de primera instancia, se comprobó la filiación del actor mediante la configuración de un medio probatorio expresamente reconocido y permitido por el legislador, el cual, tiene un especial valor, suficiente para acreditar el hecho de la maternidad, máxime si en autos no se produjo prueba biológica que pueda enfrentarse a la posesión notoria de la calidad de hijo, teniendo en consideración que el actor no figura con filiación determinada... ", y que ".de aceptarse dicho razonamiento, no podría prosperar ninguna demanda de reclamación de filiación no matrimonial sustentada en la posesión

notoria de la calidad de hijo, consecuencia del todo ajena al espíritu del legislador al establecer el actual estatuto de filiación, en particular, del derecho a la identidad tantas veces referido, reconocido en la normativa nacional e internacional... "(sentencia de 5 de enero de 2017 dictada en los autos número de rol 59.106 2016)

8° Que, en esas condiciones, se debe colegir que la sentencia impugnada conculcó lo que disponen los artículos 200, 201 y 208 del Código Civil, con influencia substancial en su parte dispositiva, porque condujo a que se desestimaran las demandas interpuestas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por el demandante en contra de la sentencia de cinco de julio de dos mil dieciocho, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Iquique, y anulándosela se la reemplaza por la que, acto continuo y sin nueva vista, se dicta a continuación.

Acordada con el voto en contra del ministro Blanco, quien, si bien comparte lo reflexionado en los motivos 3° y 4°, fue de opinión de rechazar el recurso, teniendo en consideración que el propósito de la acción de reclamación de filiación es la declaración de existencia de un determinado vínculo filiativo, y de la de impugnación que la que ostenta no es real. Sin embargo, como la filiación legal del demandante respecto de quienes lo reconocieron no ha sido controvertida por pruebas de tipo biológicas, por lo tanto, está legalmente determinada y vigente, se debe colegir que lo pretendido excede los márgenes y contenidos de las referidas acciones, pues, como se dijo, están previstas para casos en que no existe coincidencia entre la filiación legal y la real. Además, en lo que concierne a la institución de la posesión notoria del estado civil de hijo, estima que no tiene cabida en el presente caso, pues, según se señaló, la filiación del demandante está legalmente determinada; y porque, conforme al inciso primero del artículo 201 del Código Civil, si está debidamente acreditada, se la puede preferir ante las pruebas periciales de carácter biológico en caso que haya contradicción entre unas y otras; supuesto fáctico que no se tuvo por acreditado; en razón de lo anterior, concluye que la sentencia impugnada no incurrió en las vulneraciones sustantivas que se denuncian en el recurso.

Regístrese.

Redactó la ministra Gloria Ana Chevesich R.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., y la Abogada Integrante señora Leonor Etcheberry C. Rol N° 18707 2018.

Sentencia de reemplazo

Santiago, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

De la sentencia apelada se reproducen solo sus motivos primero a quinto, previa sustitución, en

este último, del primer acápite de su letra b), por el siguiente: "El demandante fue tratado como hijo por el matrimonio conformado por doña Eugenia del Pilar Campos Alarcón y don Jorge Mauricio Araya Carvajal, a partir de la fecha en que contrajeron vínculo matrimonial, esto es, desde el 24 de noviembre de 2006". Asimismo, se reproduce de la sentencia de casación los raciocinios signados con los números 3° a 7°, y se tiene, en su lugar, y además presente:

Que, de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 200 del Código Civil, los elementos de la posesión notoria del estado civil de hijo son: nombre, trato y fama, por lo tanto, quien la invoca debe acreditar que ha sido conocido como hijo, proveyéndose a su educación y establecimiento, presentado como tal ante amigos y deudos, y que el vecindario lo ha reputado y conocido como tal tratado; y como concurren en la especie, tratándose de don Jesús Humberto Cortés Caro, respecto de don Jorge Mauricio Araya Carvajal y de doña Eugenia del Pilar Campos Alarcón, corresponde acoger la demanda de impugnación de filiación que se dedujo en contra de don César Humberto Cortés Alarcón y de doña Elia Gloria Caro Navarrete y la de reclamación interpuesta en contra de los primeros nombrados.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 67 de la Ley N° 19.968 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado de Familia de Alto Hospicio, y se declara que se acogen las demandas interpuestas, con ello, que don Jesús Humberto Cortés Caro es hijo de don Jorge Mauricio Araya Carvajal y de doña Eugenia del Pilar Campos Alarcón, y no de don César Humberto Cortés Alarcón y de doña Elia Gloria Caro Navarrete, debiendo practicarse la inscripción y subinscripciones pertinentes al margen de la partida de nacimiento del señor Cortés Caro.

Acordada con el voto en contra del ministro Blanco, quien fue de opinión de no dictar sentencia de reemplazo, atendida la postura que asumió en la de casación.

Regístrese y devuélvanse.

Redactó la ministra Gloria Ana Chevesich R.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., y la Abogada Integrante señora Leonor Etcheberry C. Rol N° 18707 2018.

2. Corte Suprema, 14 de julio de 2020, Rol N° 12.792-2019

Sentencia de casación

Santiago, catorce de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

En autos Rol C 3058 2018 sobre impugnación y reclamación de paternidad seguidos ante el Juzgado de Familia de Antofagasta, don Walter Rogelio Sagredo Maríquez interpuso demanda de posesión notoria en contra de don Alexander Wladimir Francois Escobary y de Judith Silvana Hunt Carvajal, solicitando que se declare que Jossete Francois Hunt no es hija de don Alexander Francois Escobar, y que tiene la calidad de hija suya.

Contestando la demanda, tanto el padre biológico como la madre se allanaron a ella. La adolescente cumplió la mayoría de edad durante el transcurso del procedimiento, ratificando lo obrado por su madre.

Por sentencia de fecha 21 de diciembre de 2018, el tribunal de primera instancia rechazó la demanda, sin condena en costas, al estimar que el demandante carecía de legitimación activa de conformidad al artículo 317 del Código Civil, debiendo haber interpuesto una acción de repudiación (sic) para obtener los fines que se buscaba. Se agregó que, sin perjuicio que en los hechos haya una relación de padre e hija entre Jossette y Walter, legalmente las acciones de filiación tienen por objeto la búsqueda de la verdad biológica y no identidad afectiva, y bajo este respecto la ley contempla otras acciones como la adopción o repudio.

Apelada por la demandante, una sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, por sentencia Rol 10 2019 de 12 de abril de 2019, la confirmó. En contra de esta última decisión la parte demandante interpuso recurso de casación en el fondo.

Considerando:

Primero: Que el recurrente denuncia la errada aplicación de lo dispuesto en los artículos 22, 200, 201, 205, 208 y 317 del Código Civil, en relación a lo señalado en los artículos 16 y 32 de la Ley 19.968.

Señala que dichas normas de forma alguna restringen la institución de la posesión notoria a un medio de prueba, ni restan legitimidad al que se ha reconocido, por sí y por terceros, como verdadero padre.

Agrega que, en los considerandos Quinto y Séptimo del fallo de primera instancia, confirmado por la Corte de Apelaciones, se estableció que se habían acreditado los presupuestos y elementos de la posesión notoria, a pesar de lo cual se utilizaron fundamentos que infringen las disposiciones que rigen la materia, al restringir el sentido y alcance que tienen en nuestra legislación, considerando, además, los valores que actualmente se protegen, como el concepto de familia y el interés superior del niño.

Más adelante, señala que la sola lectura de los artículos 200 y 201 del Código Civil permiten concluir que la posesión notoria debidamente acreditada entrega la calidad de padre, madre e hijo,

legitimando la intervención de cualquiera de ellos en un proceso sobre impugnación y reclamación de estado; disposiciones que bajo ningún motivo excluirían la paternidad sobre la base de los razonamientos aplicados en la sentencia, y mucho menos lo restringirían al factor biológico.

Indica que la aplicación del artículo 317 para establecer la falta de legitimidad es contraria a la normativa que regula esta materia, habiéndose realizado una aplicación restrictiva de ese precepto. Continúa exponiendo que una interpretación armónica de los referidos artículos 200, 201, 205 y 208 permite sostener que el vínculo biológico no es el factor determinante para accionar en la forma que se hizo, sino que lo sería tener la calidad de padre, madre o hijo, que entrega la posesión notoria.

Añade que el sentido natural de las palabras utilizadas por el legislador llevaría a la misma conclusión, comprendiendo la posesión notoria no solo como el elemento que entrega legitimidad, sino también como el que permite accionar de impugnación y reclamación. También sostiene que los artículos 200 y 201 del Código Civil permiten afirmar que el legislador prefiere la verdad social y, por consiguiente, no resulta efectivo que el factor biológico sea concluyente para la determinación de la paternidad o la legitimidad para accionar, siempre que se hayan comprobado los presupuestos previstos en el artículo 200 del Código Civil.

Respecto a la forma en que se habrían producido las infracciones, indica, en relación a los artículos 200, 201, 205 y 208 del Código Civil, que se habría realizado una aplicación restrictiva no amparada en el sentido que su lectura entrega, coartando las acciones deducidas y su procedencia al elemento biológico, que no ha sido determinante para el legislador.

En lo tocante a la infracción al artículo 22, explica que el fallo recurrido no hace una interpretación armoniosa de las disposiciones legales, sino que impone una de forma aislada (artículo 317 del Código Civil), sin considerar el resto citadas, su sentido y alcance.

Respecto al artículo 16 de la Ley 19.968, indica que vela por el interés superior del niño, niña o adolescente. En dicho contexto, la aplicación restrictiva realizada infraccionaría el principio protector que contiene. Finalmente, sobre el artículo 32 de la Ley 19.968, manifiesta que la aplicación restrictiva del derecho aplicable, eludiendo elementos de interpretación elementales, la infracciona.

Respecto a la forma en que los errores denunciados habrían influido en lo dispositivo del fallo, indica que de haber existido una correcta aplicación de las disposiciones legales que se acusan infringidas, en relación a los hechos acreditados, no se habría rechazado la acción de impugnación, determinándose que don Walter Sagredo Manríquez se encontraba legitimado para accionar.

Segundo: Que, son hechos acreditados por el tribunal de primera instancia, no modificados por la Corte de Apelaciones, los siguientes:

1. Jossette Kamly Francois Hunt nació el 26 de noviembre de 2000, y sus padres legales son Alexander Wladimir Francois Escobar y Judith Hunt Carvajal.

2. Walter Sagredo Manríquez inició relación de convivencia con doña Judith Hunt Carvajal cuando Jossette era menor de edad, en el año 2004, y desde dicha fecha a la actualidad la ha tratado y reconocido como hija.

3. Se acreditaron los elementos de la posesión notoria de la calidad de padre de Walter Sagredo Manríquez en relación a Jossette Francois Hunt.

Tercero: Que para los efectos que siguen se tomará como base el fallo de la Corte Suprema rol

18.707 18, de 26 de agosto de 2019.

La filiación, según la doctrina sobre la materia, "es el vínculo jurídico existente entre el padre o la madre y el hijo; se refiere tanto a la relación de paternidad o maternidad, respectivamente, " y se la caracteriza como un "fenómeno jurídico que se fundamenta en el hecho fisiológico de la procreación, con la salvedad de la filiación adoptiva creada por el legislador y artificial, en el sentido que no supone un vínculo de sangre " (Troncoso L., Hernán, Derecho de Familia, Actualizado con la Ley 19.585, Concepción: Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de Derecho Privado, Año 2000, Págs. 219220). También, que es la "Relación, con el alcance jurídico, entre padres e hijos. Como hecho natural, se da siempre pues constituye una consecuencia de la procreación. Como hecho jurídico, estado de filiación, es decir, situación jurídica constatada, es la posición que una persona ocupa dentro de una familia en su calidad de hijo". (Del Arco Torres, Miguel Ángel, Diccionario Básico Jurídico, 7ª edición, Año 2009, Granada: Comares, Pág. 255), lo anterior establece que la filiación ya ha dejado de ser considerada como una relación de sangre entre el padre, la madre y los hijos, sino más bien una situación jurídica, relacionada con el lugar que ocupa una persona en una familia.

Pues bien, la relación o estado que origina se conecta o influye en otros efectos jurídicos, v. gr., algunos atributos de la personalidad (estado civil, nombre, nacionalidad y domicilio del hijo), y se encuentra reglada en el Libro I del Código Civil, artículos 179 a 273, que conforma el estatuto de filiación, que se basa en los siguientes principios: la igualdad de todos los hijos, su interés superior y el derecho a la identidad.

Cuarto: Que, en lo que concierne al derecho a la identidad, la doctrina señala que no se limita a considerar el aspecto físico o biológico de la persona, pues comprende el bagaje espiritual, intelectual, político, profesional, etc., a través del cual se proyecta socialmente al exteriorizar de alguna manera los aspectos propios de la personalidad; y que la identidad personal encuentra su fundamento axiológico en la dignidad del ser humano, que es un derecho personalísimo merecedor, por sí, de tutela jurídica, y autónomo.

En este sentido, Eduardo Zanoní señala que la noción jurídica de identidad no es unívoca, admitiendo, por lo menos, tres acepciones: a) la identidad personal en referencia a la realidad biológica, relativa al derecho a conocer el origen biológico y, consiguientemente, a obtener el emplazamiento en el estado de familia que de acuerdo con tal origen le corresponda; aspecto que abarca: la identidad genética, que se refiere al patrimonio genético heredado de los progenitores biológicos, o sea, el genoma, y la identidad filiatoria, que resulta del emplazamiento de una persona en un determinado estado de familia, en relación a quienes aparecen jurídicamente como sus padres, la que está habitualmente en concordancia con la identidad genética, pero puede no estarlo; b) la identidad personal en referencia a los caracteres físicos de la persona, relacionada con los rasgos externos que la identifican e individualizan; y c) la identidad personal en referencia a la realidad existencial de la persona, entendida como la realización del proyecto existencial propio. (Famá, María Victoria, La filiación, régimen constitucional, civil y procesal, 2º Edición, Editorial Abeledo Perrot, Págs. 20 21).

Asimismo, se ha sostenido que es "...el conjunto de atributos y características que permiten la

individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social..." (sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de abril de 2012), y "que es el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad, por lo que es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro; por lo tanto, se despliega en el tiempo y se forja en el pasado desde el instante mismo de la concepción donde están las raíces y los condicionamientos pero traspasando el presente existencial, se proyecta al futuro". (Fernández Sessarego, C., Derecho a la identidad personal, Buenos Aires, Editorial Astrea, Año 1992, Págs. 113 y 114).

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha relacionado el derecho a la identidad con la dignidad humana, noción esta última que considera como la "piedra angular de todo el edificio de los derechos fundamentales", concluyendo que no obstante que la Carta Fundamental carece de una referencia o reconocimiento expreso de la identidad como prerrogativa humana básica, ello no obstaculiza su protección constitucional, debido justamente a la estrecha vinculación entre ambos conceptos. Del mismo modo, que goza de un estatuto similar al derecho de la nacionalidad del que no puede carecer una persona y que se justifica incluir el derecho a la identidad personal entre aquellos esenciales a la naturaleza humana a que alude al artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental. (sentencias de 13 de mayo de 2008 y 29 de septiembre de 2009, dictadas en antecedentes roles 834 07 y 1340 09, respectivamente).

Con todo, se debe tener presente que el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce como elementos de la identidad a la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, y en el artículo 8 impone a los Estados Partes el compromiso de respetar el derecho del niño a preservar su identidad; que el artículo 19 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce a toda persona el derecho a la nacionalidad, y el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a todo ser humano, en todas partes, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Dicho contexto autoriza colegir que, si bien la normativa interna no eleva a la categoría de fundamental el derecho a la identidad, en la medida que el artículo 1 de la Constitución Política de la República establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y el de identidad es uno personalísimo, inherente a toda persona, independiente de su edad, sexo o condición social, por lo tanto, está íntimamente vinculado a la dignidad humana, debe ser considerado entre aquellos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana a que se refiere el inciso 2° del artículo 5 de la misma, que, conforme a su tenor, se erigen como límite al ejercicio de la soberanía, imponiendo a los órganos del Estado respetarlos y promoverlos;

Quinto: Que la reforma introducida por la Ley N° 19.585 hacer primar la verdad real o biológica por sobre la formal, por lo tanto, es presidido por el denominado principio de veracidad cuyo criterio rector es el derecho a la identidad; se sustenta en la noción de la libre investigación de la paternidad o maternidad y en la de acceso de toda persona a una investigación judicial con una amplia

admisibilidad probatoria; y consagra la imprescriptibilidad e irrenunciabilidad de la acción de reclamación de filiación. Sin embargo, en lo que concierne a la primacía que consagra, contempla excepciones, en lo que interesa, la institución de la posesión notoria del estado civil de hijo, que, debidamente acreditada, prefiere a las pruebas periciales de carácter biológico, de acuerdo lo señala el artículo 201 del Código Civil.

Sexto: Que dicha institución está definida en el inciso 2° del artículo 200 del Código Civil, en los siguientes términos: "Consiste en que su padre, madre o ambos le hayan tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos; y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como tal". Conforme lo disponen los incisos primero y segundo del mismo, se compone de tres elementos: el nombre, el trato y la fama, que deben haberse configurado, a lo menos, durante cinco años continuos; y debe ser acreditada mediante un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignas que la establezcan en forma irrefragable; hecho que sirve a la judicatura para tener por suficientemente acreditada la filiación, que podría catalogarse como una de tipo social, cuyo fundamento, según se advierte, está dado por los lazos de afecto, dado que "ejercer de padre, querer serlo y haberlo sido por más de 5 años puede ser más relevante que la verdad genética. Además, el padre social ha desarrollado lazos afectivos con el menor, que le dan a éste estabilidad psicológica". (Gómez de la Torre V., Maricruz, El sistema filiativo chileno, 1° Edición, Año 2007, Editorial Jurídica de Chile, pág. 88)

Considerando los términos de la mencionada norma y los de los artículos 201 y 309 del Código Civil, tanto la doctrina como la jurisprudencia afirman que la posesión notoria del estado civil conforma una prueba que permite establecer la filiación. Sin embargo, las probanzas que debe rendir el litigante que la invoca deben estar dirigidas a acreditar los elementos que la componen, esto es, sus circunstancias fácticas, a saber, nombre, trato y fama; y demostradas, la consecuencia jurídica ineludible es que se está en presencia de dicha institución;

Séptimo: Que la acción de reclamación de la filiación se puede definir como "aquella en cuya virtud quien no tiene determinada su filiación, demanda que sea declarada judicialmente", esto es, se solicita que se declare que es hijo de su padre o madre, o viceversa, y la de impugnación del vínculo de filiación como "aquella que persigue dejar sin efecto la filiación que ha quedado determinada respecto del padre, madre o hijo" (René Abeliuk M., La filiación y sus efectos, 1° Edición, Año 2003, Editorial Jurídica de Chile, Págs. 157 y 172); y se caracterizan porque no son cedibles ni pueden ser objeto de conciliación o transacción, ni someterse a compromiso, siendo la primera imprescriptible e irrenunciable, la segunda solo irrenunciable; y están regladas en los artículos 204 a 221 del Código Civil, en cuanto precisan quienes pueden deducirlas y contra quienes y, según sea el caso, cómo y en la oportunidad en que deben ser interpuestas. Pero, tratándose del hijo como legitimado activo, según se advierte de la lectura de dichas disposiciones, no indican cuál o cuáles deben ser sus fundamentos, por lo tanto, no se divisa razón por la que solo podrían basarse en la realidad biológica y no en la social, esto es, en la posesión notoria del estado civil de hijo, tampoco en que ésta únicamente se puede invocar como excepción para enervar una acción de impugnación de la filiación, más aun considerando lo ya expuesto a propósito del derecho a la identidad, que constituye uno de los

fundamentos del estatuto de filiación.

Con todo, corresponde tener presente que esta Corte ha señalado que "...De este modo, se hacen evidentes las infracciones de ley alegadas..., pues...los sentenciadores desestimaron la posibilidad de reclamar la maternidad invocando la posesión notoria, en circunstancias que esta es plenamente compatible con la interposición de una acción de reclamación de la filiación, la que resulta suficiente para justificar el hecho de la maternidad si se cumple con los requisitos constitutivos consagrados en el artículo 200 del Código Civil, lo que ocurrió, pues, como se advierte de la lectura de la sentencia de primera instancia, se comprobó la filiación del actor mediante la configuración de un medio probatorio expresamente reconocido y permitido por el legislador, el cual, tiene un especial valor, suficiente para acreditar el hecho de la maternidad, máxime si en autos no se produjo prueba biológica que pueda enfrentarse a la posesión notoria de la calidad de hijo, teniendo en consideración que el actor no figura con filiación determinada... ", y que "...de aceptarse dicho razonamiento, no podría prosperar ninguna demanda de reclamación de filiación no matrimonial sustentada en la posesión notoria de la calidad de hijo, consecuencia del todo ajena al espíritu del legislador al establecer el actual estatuto de filiación en particular, del derecho a la identidad tanta veces referido, reconocido en la normativa nacional e internacional... " (sentencia de 5 de enero de 2017 dictada en los autos número de rol 59.106 2016)Octavo: Que, en esas condiciones, se debe colegir que la sentencia impugnada conculcó lo que disponen los artículos 200, 201 y 208 del Código Civil, con influencia substancial en su parte, dispositiva porque condujo a que se desestimara la demanda interpuesta, entendiendo que las normas que rigen la filiación sólo deben conducir a la realidad biológica de los involucrados, dejando de lado la realidad social que le concede a un hijo tal como lo establece la definición de filiación, una posición dentro de una familia, que le permite asimismo determinar su identidad y proteger su dignidad como lo reconoce el Tribunal Constitucional chileno.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por el demandante en contra de la sentencia de 12 de abril de 2019, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y anulándosela se la reemplaza por la que, acto continuo y sin nueva vista, se dicta a continuación.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Blanco y de la Ministra Sra. Repetto, quienes fueron de la opinión de rechazar el recurso interpuesto al estimar que, al encontrarse determinada legalmente la paternidad de la menor de autos, la demanda conjunta de impugnación y reclamación de paternidad es improcedente conforme a lo dispuesto en los artículos 195 y siguientes del Código Civil, por cuanto el marco legal establecido por el legislador para dichas acciones tiene como principio rector la búsqueda y establecimiento de la verdad biológica por sobre consideraciones de orden familiar o social.

La conclusión anterior se ve reafirmada por el hecho de contemplarse la institución de la posesión notoria como un medio de prueba y no como una acción especial, según se desprende de la interpretación armónica del artículo 200 del Código Civil ubicado en el párrafo de las Reglas

Generales del Título VIII que regula las acciones de filiación con los artículos 201 e inciso segundo del artículo 309 del mismo cuerpo legal.

De esta manera, las cuestiones señaladas determinan que el demandante carezca de legitimación activa para accionar en el presente juicio, en conformidad con el artículo 216 inciso final del Código Civil, lo que conduce al rechazo del recurso.

Redactó el abogado integrante Sr. Iñigo de la Maza Gazmuri.

Regístrese. Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., María Angélica Cecilia Repetto G., y los abogados integrantes señores Antonio Barra R., e Iñigo De la Maza G.

Sentencia de reemplazo

Santiago, catorce de julio de dos mil veinte. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

De la sentencia apelada se reproducen solo sus motivos primero a quinto. Asimismo, se reproduce de la sentencia de casación los raciocinios signados con los números 3° a 7°, y se tiene, en su lugar, y además presente:

1° Que, de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 200 del Código Civil, los elementos de la posesión notoria del estado civil de hijo son: nombre, trato y fama, por lo tanto, quien la invoca debe acreditar que ha sido conocido como hijo, o como padre o madre proveyéndole a su educación y establecimiento, presentado como tal ante amigos y deudos, y que el vecindario lo ha reputado y conocido como tal.

En el caso de autos, se acreditó que don Walter Rogelio Sagredo Manríquez tiene la posesión notoria de la calidad de padre de Josette Francois Hunt, y ésta, a su vez, de hija del demandante, lo anterior se desprende del set de fotografías incorporado, además de la existencia del certificado médico en el cual se indica que Josette es atendida desde los 7 años de edad y siempre ha sido acompañada por don Walter Sagredo y doña Judith Hunt. Asimismo, se acompañó también el informe escolar que relata que don Walter es el apoderado y ha estado presente en todas las actividades de Josette. A mayor abundamiento se puede agregar la declaración de testigos que indican que desde el año 2004 don Walter ha tratado y reconocido a Josette como su hija dentro del grupo familiar, frente a amigos, nana, médicos y el establecimiento educacional. Además, la madre reconoce que desde 2004 a la fecha don Walter ha tratado como hija a Josette. Y finalmente es necesario destacar que Josette al cumplir la mayoría de edad compareció en autos ratificando todo lo obrado por su madre, lo cual deja en claro que de haber sido mayor de edad al momento del inicio del juicio, ella habría accionado.

2° Que, de esta manera concurren en la especie los elementos de la posesión notoria, trato, nombre y fama, tratándose de Josette Francois Hunt, respecto de don Walter Rogelio Sagredo Maríquez, correspondiendo acoger la demanda de impugnación y reclamación de paternidad deducida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 67 de la Ley N° 19.968 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara que se revoca la sentencia apelada, y que se acoge la demanda interpuesta, con ello, se declara que Jossette Francois Hunt es hija de don Walter Rogelio Sagredo Maríquez, y no de don Alexander Wladimir Francois Escobary, debiendo practicarse la inscripción y subinscripciones pertinentes al margen de la partida de nacimiento de la adolescente.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Blanco y de la Ministra Sra. Repetto, quienes estuvieron por no dictar sentencia de reemplazo, en atención a lo expresado en la disidencia del fallo de casación que antecede.

Regístrese y devuélvanse.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., María Angélica Cecilia Repetto G., y los abogados integrantes señores Antonio Barra R., e Iñigo De la Maza G.

3. Corte Suprema, 20 de agosto de 2020, rol N° 16.219-2019.

Sentencia de casación

Santiago, veinte de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

En estos autos RIT C 2642 2018 del Juzgado de Familia de Rancagua sobre impugnación y reclamación de filiación de paternidad, doña María Roxana M. C., en representación de su hijo de iniciales A.F.Z.M. demanda de impugnación de paternidad en contra de don Felipe Ignacio Z. M., y conjuntamente en contra de don César Erwinson A. B. como demandado de reclamación. Por sentencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se rechazó tales pretensiones, al decidirse que "para dejar sin efecto una filiación natural coincidente con la (filiación) legal, este procedimiento no es el idóneo (...) por ser un hecho asentado que el niño posee filiación paterna determinada, coincidente además con el hecho de su concepción natural, de modo tal que su identidad y estado civil se encuentran en armonía con su verdad biológica". Ello sin perjuicio agrega la sentencia del grado de la acción relativa a la adopción, disponible al efecto.

Apelada por la actora, una sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por fallo de trece de mayo de dos mil diecinueve, la confirmó.

En contra de esta última decisión, la demandante dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en su libelo de invalidación esencial la recurrente reclama que el fallo infringe lo previsto en los artículos 200 y 201 del Código Civil.

Al efecto expresa que el dictamen del grado, confirmado por la sentencia impugnada, no obstante haber establecido como hecho de la causa la existencia de la posesión notoria de hijo del menor Alonso F. respecto del demandado de reclamación don César Erwinson A. B., y debiendo haber acogido por ende las demandas de impugnación y de reclamación de paternidad, las rechaza en todas sus partes, restringiendo injustificadamente el sentido y alcance del mandato contenido en la primera de las normas conculcadas, reforzado por la disposición de la segunda.

SEGUNDO: Que para la mejor comprensión del asunto sub lite, es menester reseñar los antecedentes de mayor relevancia que surgen del proceso:

A) En su libelo ante el Juzgado de Familia de Rancagua, doña María Roxana M. C., en representación de su hijo A.F.Z.M. nacido el dos de abril de dos mil ocho, deduce demanda de impugnación de paternidad en contra de don Felipe Ignacio Z. M. y, conjuntamente, presenta demanda de reclamación de paternidad en contra de don César Erwinson A. B.

B) Fundamenta tales pretensiones, primero, en el hecho de que el menor nació cuando ella y el demandado de impugnación señor Z. M. eran estudiantes de enseñanza media, asumiendo ella con el respaldo de sus padres el cien por ciento de los cuidados y la dedicación a la crianza del infante, no obstante haber continuado sus estudios preuniversitarios y luego superiores. Agrega que durante tres años, el demandado de impugnación de paternidad, aunque mantuvo contactos esporádicos con ella,

jamás se preocupó de sus obligaciones económicas y emocionales como padre del niño, no obstante ser reiteradamente requerido para ello, amén de que en el curso de sus primeros meses de vida, se presentaba en estado de ebriedad pretendiendo verlo y retirarlo del domicilio de la madre, incurriendo en acciones de violencia verbal y física en contra de ésta.

C) Seguidamente, señala que habiendo perdido todo contacto con el demandado señor Z., en el mes de enero del año dos mil once, cuando el niño ya tenía casi tres años de edad, ella logró ubicarlo para pedirle que no siguiera ignorando a su hijo, recibiendo una dura y descomedida respuesta para que "dejara de molestarlo" y que se olvidara de una vez por todas de él, porque no tenía ya ningún interés ni sentimiento alguno para con el niño. Y agrega que desde esa fecha no supo nunca más del señor Z., como tampoco de su familia.

D) Indica que a pocos meses de perder todo contacto con el demandado señor Z., conoció al otro demandado, don César Erwinson A. B., comenzando una relación sentimental y de convivencia con éste, quien pasó a relacionarse con el niño en forma muy cercana, amorosa, respetuosa y fluida, en términos de que cuando el niño cumplía los cuatro años de edad, ya empezó a reconocerlo como parte importante en su vida, y en forma espontánea a llamarlo "papá", decidiendo ambos adultos no decirle nada al respecto para que todo fuera fluyendo de manera natural. Agrega que con el paso de los años, hasta el presente, ese reconocimiento se ha hecho cada vez más grande, de manera mutua entre el demandado señor A. y el menor, actuando aquél siempre como su padre, apoyándolo en su desarrollo físico, emocional y educacional como su apoderado, asumiendo además sus gastos de vida, compartiendo las entreteniciones de fútbol y juegos de video, llevándolo al colegio y preocupándose "de cada detalle y necesidad que tenga relación con el niño".

E) Precisa que el menor, a su vez, reconoce al demandado señor Acevedo como su padre, expresando que para él no existe otro progenitor que no sea este demandado y, habiendo transcurrido más de seis años, perdura este lazo afectivo entre ambos, y al menor le provoca mucha incomodidad no tener el apellido del señor Acevedo, en términos que en sus pruebas y controles escolares sólo estampa sus nombres de pila, sin querer colocar el apellido que consta en su partida de nacimiento. Sobre toda esta base fáctica descrita, sostiene la actora que concurren los requisitos o presupuestos de nombre, trato y fama que configuran la posesión notoria de la filiación paterna que se reclama.

F) A la audiencia preparatoria del juicio asistieron todas las partes, suspendiéndose a petición del demandado de impugnación de paternidad para concurrir a posteriori con asesoría de abogado, sin que compareciera en la de su continuación. Y en la audiencia de juicio sólo se mantuvo ausente el demandado Zúñiga y, por haber comparecido sin letrado asesor el otro demandado, el tribunal tuvo por contestadas las dos demandas en rebeldía.

G) En el auto respectivo, el tribunal fijó solo dos puntos de prueba: referente a la impugnación, efectividad de que el menor A.F.Z.M. es hijo del demandado don César Erwinson A. B.; y en lo concerniente a la reclamación, efectividad de que el mismo demandado sea el padre del menor Alonso F.

H) Se rindió prueba documental, de declaración de parte, y testimonial de dos deponentes muy cercanos al menor.

TERCERO: Que son hechos de la causa establecidos los cuatro primeros en el considerando

quinto de la sentencia del grado, y el último en su considerando octavo los siguientes:

A) El niño A. F. Z. M., nacido el dos de abril de dos mil ocho según consta del certificado de nacimiento acompañado por la actora a los autos, es hijo de ésta y del demandado de impugnación de paternidad don Felipe Ignacio Z. M.

B) En el año dos mil once la actora, que tenía a su cargo y cuidado al niño a la sazón de tres años de edad, comenzó una relación de pareja y convivencia con el demandado de reclamación de paternidad don César Erwinson A. B.

C) El año dos mil doce, cuando contaba con cuatro años de vida, el niño "comienza a reconocer y llamar a don César como su padre, reconocimiento que es mutuo, porque don César también reconoce a Alonso como su hijo, circunstancia que se ha ido desarrollando continuamente hasta la fecha de este fallo", es decir, hasta el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.

D) Dicho tratamiento de padre e hijo es de conocimiento y aceptación de la familia de don César y del establecimiento educacional al que asiste, incorporando la primera al niño como parte integrante de aquella y participando el demandado de reclamación activamente en el proceso de enseñanza del niño.

E) En el juicio de autos no se ha discutido que al demandado de impugnación corresponde la paternidad biológica del niño, sino que, dado el estado de abandono en que ha dejado a su hijo, ha sido el mismo niño el que ha buscado un sustituto, aceptando el demandado de reclamación esta circunstancia hasta transformarse, desde el afecto, en padre de crianza del niño de autos.

CUARTO: Que el concepto de filiación es entendido por la doctrina como el vínculo jurídico existente entre el padre o la madre y el hijo, y por ello referido tanto a la relación de paternidad y a la de maternidad, caracterizado como fenómeno jurídico que se fundamenta en el hecho fisiológico de la procreación, con la salvedad de la filiación adoptiva creada por el legislador, ésta última artificial en cuanto no supone vínculo de sangre (Troncoso L. Hernán, Derecho de Familia Actualizado con la ley 19.585. EN: Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de Derecho Privado Año 2000 pág. 219 220), lo que ocurre asimismo en el caso de la posesión notoria del estado de filiación. Así, el denominado estado de filiación, como hecho o situación jurídica constatada, se entiende como la "posición que una persona ocupa dentro de una familia en calidad de hijo" (Del Arco Torres Miguel Ángel, Diccionario Básico Jurídico, Granada 2009). Dicha situación o estado se encuentra regulado en el estatuto de filiación de los artículos 179 a 273 del Código Civil, cimentado en los principios de igualdad de todos los hijos, primacía del interés superior de éstos y su derecho a la propia identidad, entendido este último como derecho personalísimo e irrenunciable. Así pues, puede decirse que la filiación se entiende ahora más que como una relación de sangre como una situación jurídica relacionada con el lugar que ocupa una persona en una familia.

QUINTO: Que como esta Corte ya ha establecido reiteradamente (CS 18.707 2019, CS 12.792 2019) a partir de la reforma de la Ley 19.585 el legislador hace primar en materia de filiación el principio de veracidad, cuyo criterio rector es el referido derecho a la identidad, sustentado en la noción de libre investigación de la paternidad o maternidad y en la de acceso de toda persona a una investigación judicial con una amplia admisibilidad probatoria, estatuye la imprescriptibilidad y la irrenunciabilidad de la acción de reclamación de filiación.

Pero en lo que concierne a la primacía de la probanza biológica que dicho estatuto consagra, ésta no es absoluta, pues se contempla expresamente la excepción de la posesión notoria del estado civil de hijo, la cual debidamente acreditada prefiere a las pruebas periciales de carácter biológico, según el mandato del artículo 201 del Código Civil, no existiendo en el Título VIII del Libro I de este estatuto precepto alguno que impida invocar esa posesión notoria del estado de hijo como fundamento de una acción de impugnación y reclamación, y no sólo como excepción.

Y tampoco existe en este ordenamiento común precepto alguno que haga jurídicamente inviable la invocación y el reconocimiento de la posesión notoria del estado de hijo respecto de determinada persona como único fundamento de la impugnación, aun cuando como ocurre en la especie no se controvierta la paternidad biológica del demandado y ésta sea reconocida por el menor demandante. Ello en virtud del mandato del precepto 201 del mismo cuerpo legal, según el cual "la posesión notoria del estado civil de hijo, debidamente acreditada, preferirá a las pruebas periciales de carácter biológico en caso de que haya contradicción entre una y otra".

Ello resulta ser así, además, en cuanto como esta corte ha declarado (CS 18.707 2018) de acuerdo con la doctrina de los tratadistas, hoy por hoy "la filiación ya ha dejado de ser considerada como una relación de sangre entre el padre, la madre y los hijos, sino más bien (como) una situación jurídica, relacionada con el lugar que ocupa una persona en una familia".

A mayor abundamiento, como también se ha dicho que el estatuto de filiación actual de los preceptos 179 a 273 del compendio civil se basa y recoge los principios de igualdad de todos los hijos, su interés superior y el derecho a la identidad, corresponde recordar que, al decir del tratadista Eduardo Zanolini, la noción jurídica de identidad no es unívoca y admite a lo menos tres acepciones: A) La primera, identidad personal referida a la realidad biológica, que abarca dos aspectos: la identidad genética y la identidad de filiación, esta última entendida como el emplazamiento de una persona en un determinado estado de familia, en relación a quienes aparecen jurídicamente como sus padres. Ambas realidades habitualmente serán coincidentes o concordantes, pero dada la diversidad de las realidades fácticas que el derecho está llamado a regular ello no siempre será así como ocurre precisamente en el caso sub lite. B) La segunda, identidad personal en referencia a los caracteres físicos de cada persona, esto es, los rasgos externos que la identifican e individualizan. Y C) La identidad personal referida a la realidad existencial de cada uno como persona, entendida como realización de un proyecto existencial.

Pues bien, los planteamientos doctrinarios antedichos permiten afirmar que el derecho a la identidad, derecho que no se limita a considerar el aspecto físico o biológico de la persona, sino que comprende su bagaje espiritual, intelectual, político y profesional entre otras peculiaridades de cada uno, se proyecta socialmente merced a la exteriorización de éstas, y encuentra su fundamento axiológico en la dignidad del ser humano por el hecho de ser tal: se trata entonces de un derecho autónomo, personalísimo y por sobre todo inalienable, siendo por ende merecedor de la tutela jurídica que el derecho debe proporcionarle.

Y esta tutela, en lo que atañe al recurso de nulidad esencial de autos, le está dada por los mencionados preceptos 200 y 201 del Código Civil, refrendados por el artículo 7° de la Convención sobre los Derechos del Niño y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

SEXTO: Que establecidos los hechos del juicio en el considerando cuarto del presente fallo, y apreciados a la luz de los parámetros doctrinarios y jurídicos atinentes a la caracterización actual de la filiación como situación jurídica que trasunta el derecho inalienable a la identidad personal del niño, del menor y del adolescente, tutelado por los preceptos 200 y 201, esta corte necesariamente deberá concluir que la sentencia impugnada, al restringir el ámbito de aplicación de la dicha tutela y denegar las demandas del menor A.F.Z.M. tendientes a establecer la esencia de su identidad personal como es su filiación paterna, cercenando el derecho inalienable que le asiste, ha infringido ambas normas legales, tal como sostiene la recurrente.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por doña María Roxana M. C. contra la sentencia de trece de mayo de dos mil diecinueve, la que es nula, debiendo dictarse a continuación la sentencia de reemplazo que en derecho corresponda, conforme al mérito de lo obrado.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Blanco y del Ministro Suplente señor Zepeda, quienes fueron de opinión de rechazar el recurso, por estimar que al encontrarse determinada legalmente la paternidad del menor la demanda conjunta de impugnación y reclamación de la misma es improcedente, conforme lo previsto en los artículos 195 y siguientes del Código Civil, en cuanto el marco legal establecido por el legislador para dichas acciones tiene como principio rector la búsqueda y el establecimiento de la verdad biológica, por sobre consideraciones de orden social. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de contemplarse la institución de la posesión notoria como medio de prueba, y no como una acción especial, según se desprende de la interpretación armónica del artículo 200, ubicado en el Párrafo de las Reglas Generales del Título VIII que regula las acciones de filiación, con los preceptos 201 y 309 inciso segundo, todos del mismo cuerpo legal. De esta manera, las cuestiones señaladas determinan que la demandante carezca de legitimación activa para accionar en el presente juicio, de conformidad con lo normado en su artículo 216 inciso final, lo que hace inviable el recurso de autos.

Redacción del abogado integrante señor Antonio Barra Rojas.

Regístrese.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., ministro suplente señor Jorge Zepeda A., y los abogados integrantes señora Leonor Etcheberry C., y señor Antonio Barra R.

Sentencia de reemplazo

Santiago, veinte de agosto de dos mil veinte.

Dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo, reproduciendo la sentencia en alzada, a excepción de su Considerando Séptimo.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que habiéndose acreditado en autos la concurrencia de todos y cada uno de los

requisitos exigidos por el artículo 200 del Código Civil, se ha establecido que el menor A.F.Z.M. ha ostentado y gozado por más de cinco años la posesión notoria de su estado civil de hijo de don César Erwinson A. B., demandado en autos de reclamación de paternidad.

SEGUNDO: Que tal como se expresó latamente en los considerandos cuarto y quinto de la sentencia de casación que antecede, que se dan aquí por reproducidos, la posesión notoria del estado de filiación no puede estimarse restringida a ser meramente un medio probatorio y sólo a modo de excepción en juicio, sino que legitima la pretensión del menor que debidamente representado insta en estrados por su reconocimiento, no sólo porque ello no se encuentra prohibido ni limitado por el legislador del artículo 201 del ordenamiento sustantivo civil, sino porque permite al juzgador preferirla por sobre la constatación de la paternidad o maternidad biológicas en caso de contradicción, no existiendo en la especie ninguna grave razón que demuestre la inconveniencia de tal proceder en cuanto ello resulta más que conveniente considerando especialmente el interés superior del menor A.F.Z.M., manifestado y acreditado en el proceso.

TERCERO: Que la antedicha posesión notoria del estado civil de hijo del demandado señor A. B., ostentada por el menor e invocada por éste como fundamento de sus demandas, corresponde al ejercicio del derecho personalísimo e inalienable para construir su propia identidad, que le corresponde como persona humana, cuya tutela jurídica se encuentra establecida, entre otras disposiciones, en los artículos 200 y 201 del Código Civil, y por los preceptos 7° de la Convención sobre Derechos del Niño y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

CUARTO: Que, en consecuencia y a la luz del mandato del citado artículo 200 del Código Civil, corresponde en la especie tener por acreditada la filiación del menor como hijo del demandado señor A. B., para todos los efectos legales, sin que la circunstancia de no haberse controvertido la paternidad biológica del demandado Felipe Ignacio Z. M. pueda coartar el legítimo ejercicio de su derecho a establecer su propia filiación, como elemento básico y esencial de su identidad personal.

Y ello debe ser así, además, porque ninguna de las normas citadas ni de las demás del estatuto de filiación del referido código contiene, ni expresa ni tácitamente, tal limitación. Por el contrario, el propio legislador del citado artículo 201 del mismo cuerpo legal se pone en el caso de la contradicción entre la verdad biológica y la verdad social de la filiación, y concede preferencia legal a la posesión notoria del estado civil de hijo, debidamente acreditada, por sobre la verdad biológica establecida.

Por estas consideraciones, y conforme lo previsto por los artículos 195, 198, 200, 201 y 208 del Código Civil; 32 y 66 de la Ley 19.968, se revoca la sentencia en alzada de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, y se declara en su reemplazo que se acoge la demanda interpuesta por doña María Roxana M. C. en representación de su hijo menor A.F.Z.M., y se resuelve que éste no es hijo de don Felipe Ignacio Z. M., sino que es hijo de don César Erwinson A. B., y se ordena: 1°) Cancelar la Inscripción N° 1.239 del año 2008 del Registro 5 de Nacimientos del mismo año de la Circunscripción Rancagua del Servicio de Registro Civil; y 2°) Que dicho servicio deberá practicar una nueva inscripción de nacimiento en el sentido ya resuelto.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Blanco y del Ministro Suplente señor Zepeda, por las razones señaladas en su disidencia del fallo de casación.

Redacción del Abogado Integrante señor Antonio Barra Rojas.

Regístrese y devuélvase.

4. Corte Suprema, 5 de abril de 2021, rol N° 18.213-2019

Sentencia de casación

Santiago, cinco de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En estos autos RIT C 8989 -2017 del Segundo Juzgado de Familia de Santiago sobre impugnación y reclamación de filiación de paternidad, doña Nicole Jacqueline S. H., en representación de su hijo de iniciales D.A.S.S. demanda de impugnación de paternidad en contra de don R.S.S.C. y conjuntamente en contra de don Cristian Edgardo R. G. como demandado de reclamación. Por sentencia de doce de octubre de dos mil dieciocho, fueron rechazadas tales pretensiones. Apelada por la actora, una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por fallo de tres de junio de dos mil diecinueve, la confirmó.

En contra de esta última decisión, la demandante dedujo recurso de casación en el fondo. Se trajeron los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en su libelo de invalidación esencial la recurrente reclama que el fallo infringe lo previsto en los artículos 195, 200 inciso primero y 201 del Código Civil y el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño.

Al efecto expresa que los sentenciadores restringen la interpretación del artículo 195 del Código Civil, en cuanto tendría por objetivo la investigación de la paternidad o maternidad, sólo en cuanto ella está constituida por el dato biológico, más, conforme a su tenor literal, no existe tal limitación, posibilitando éste la investigación de la filiación, no definiéndola, sin limitaciones de ninguna especie, estableciendo el principio de la libre investigación. Así, la paternidad o maternidad biológica corresponden sólo a un tipo de filiación, noción que ha sido superada con el surgimiento de la paternidad afectiva, la cual está íntimamente ligada al concepto de identidad. Manifiesta que el concepto de identidad filiatoria como pura referencia a su presupuesto biológico, no es suficiente para definir, por sí mismo, la proyección dinámica de la identidad, lo que es reconocido en el fallo, como también reconoce la calidad social de hijo, como fuente de filiación, por lo que la posesión notoria del estado civil de hijo, constituye una herramienta jurídica para hacer efectivo el derecho a la identidad, entendida como la proyección dinámica y, de esta forma, dar concreción a la idea de paternidad afectiva.

Refiriéndose al artículo 200 y 201 del Código Civil, considera que han sido interpretados erróneamente, ya que se les da un alcance diverso, restringiendo su aplicación sólo para aquellos casos en que la institución de la posesión notoria del estado civil de hijo opera como excepción a la acción de impugnación, en circunstancias que las normas referidas no hacen distinción. Esta

interpretación limita la aplicación de la posesión notoria como regla general para el establecimiento de la filiación, particularmente como fundamento de la acción de impugnación y reclamación de la paternidad y maternidad.

Finalmente, considera infringido el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República en relación con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, por cuanto la reflexión que hacen los sentenciadores vulnera el interés superior del niño, ya que lo expresado en la sentencia da cuenta de una opción preferente por un supuesto interés general por sobre el del niño, lo que implica una vulneración a la supremacía de la consideración primordial del interés superior del niño en cualquiera decisión que se adopte y que le pudiera afectar, incluidas las decisiones judiciales.

Afirma que no existe en la especie realmente un interés general o de orden público que deba respetarse, toda vez que las infracciones de ley señaladas han determinado una interpretación errónea de los artículos aplicables al Código Civil y en el caso, si existiera una controversia normativa, es el interés superior del niño el que acude no sólo como principio informador de todo lo concerniente a los niños y adolescentes, sino que presta utilidad específica como regla interpretativa. El interés superior del niño es una regla legal que infunde todo el ordenamiento jurídico y en este caso se prescinde de su aplicación.

SEGUNDO: Que los supuestos fácticos establecidos por la magistratura del fondo, son los siguientes:

A) El niño D.A.S.S., nació el 4 de mayo de 2009 y tiene filiación paterna ya determinada, siendo hijo de R.S.S.C y de la demandante.

B) En septiembre de 2012 se determinó una pensión alimenticia en favor del niño de autos, ascendente a un ingreso mínimo remuneracional y conforme liquidación de pensiones de 20 de abril de 2018, se adeuda la suma de \$6.372.800, de lo que infiere que el padre biológico no ha depositado en la libreta de ahorro a la vista de la actora el monto correspondiente a las mesadas establecidas en favor del hijo.

C) El niño mantiene una fuerte vinculación con el demandado Cristian R. G., a quien identifica como figura parental. Tanto en el ámbito familiar como educacional el señor R. juega un rol parental significativo para el niño.

D) El trato de padre e hijo se viene gestando desde una época, que si bien no es precisa, a lo menos se prolonga desde hace más de cinco años.

E) Existe una vinculación afectiva entre el niño y el demandado Cristian R., sobre todo considerando la entrevista sostenida con el menor.

F) El padre biológico ha estado ausente.

TERCERO: Que, tal como esta Corte ya señaló en los autos Rol 10.219-2019, el concepto de filiación es entendido por la doctrina como el vínculo jurídico existente entre el padre o la madre y el hijo, y por ello referido tanto a la relación de paternidad y a la de maternidad, caracterizado como fenómeno jurídico que se fundamenta en el hecho fisiológico de la procreación, con la salvedad de la

filiación adoptiva creada por el legislador, ésta última artificial en cuanto no supone vínculo de sangre (Troncoso L. Hernán, Derecho de Familia Actualizado con la ley 19.585.EN: Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de Derecho Privado Año 2000 pág. 219 220), lo que ocurre asimismo en el caso de la posesión notoria del estado de filiación. Así, el denominado estado de filiación, como hecho o situación jurídica constatada, se entiende como la "posición que una persona ocupa dentro de una familia en calidad de hijo" (Del Arco Torres Miguel Ángel, Diccionario Básico Jurídico, Granada 2009). Dicha situación o estado se encuentra regulado en el estatuto de filiación de los artículos 179 a 273 del Código Civil, cimentado en los principios de igualdad de todos los hijos, primacía del interés superior de éstos y su derecho a la propia identidad, entendido este último como derecho personalísimo e irrenunciable. Así pues, puede decirse que la filiación se entiende ahora más que como una relación de sangre como una situación jurídica relacionada con el lugar que ocupa una persona en una familia.

CUARTO: Que como esta Corte ya ha establecido reiteradamente (CS 18.707 2019, CS 12.792 2019) a partir de la reforma de la Ley 19.585 el legislador hace primar en materia de filiación el principio de veracidad, cuyo criterio rector es el referido derecho a la identidad, sustentado en la noción de libre investigación de la paternidad o maternidad y en la de acceso de toda persona a una investigación judicial con una amplia admisibilidad probatoria, estatuye la imprescriptibilidad y la irrenunciabilidad de la acción de reclamación de filiación.

Pero en lo que concierne a la primacía de la probanza biológica que dicho estatuto consagra, ésta no es absoluta, pues se contempla expresamente la excepción de la posesión notoria del estado civil de hijo, la cual debidamente acreditada prefiere a las pruebas periciales de carácter biológico, según el mandato del artículo 201 del Código Civil, no existiendo en el Título VIII del Libro I de este estatuto precepto alguno que impida invocar esa posesión notoria del estado de hijo como fundamento de una acción de impugnación y reclamación, y no sólo como excepción.

Y tampoco existe en este ordenamiento común precepto alguno que haga jurídicamente inviable la invocación y el reconocimiento de la posesión notoria del estado de hijo respecto de determinada persona como único fundamento de la impugnación, aun cuando como ocurre en la especie no se controvierta la paternidad biológica del demandado y ésta sea reconocida por el menor demandante. Ello en virtud del mandato del precepto 201 del mismo cuerpo legal, según el cual "la posesión notoria del estado civil de hijo, debidamente acreditada, preferirá a las pruebas periciales de carácter biológico en caso de que haya contradicción entre una y otra". Ello resulta ser así, además, en cuanto como esta Corte ha declarado (CS 18.707 2018) de acuerdo con la doctrina de los tratadistas, hoy por hoy "la filiación ya ha dejado de ser considerada como una relación de sangre entre el padre, la madre y los hijos, sino más bien (como) una situación jurídica, relacionada con el lugar que ocupa una persona en una familia".

A mayor abundamiento, como también se ha dicho que el estatuto de filiación actual de los preceptos 179 a 273 del compendio civil se basa y recoge los principios de igualdad de todos los hijos, su interés superior y el derecho a la identidad, corresponde recordar que, al decir del tratadista

Eduardo Zanoní, la noción jurídica de identidad no es unívoca y admite a lo menos tres acepciones: A) La primera, identidad personal referida a la realidad biológica, que abarca dos aspectos: la identidad genética y la identidad de filiación, esta última entendida como el emplazamiento de una persona en un determinado estado de familia, en relación a quienes aparecen jurídicamente como sus padres. Ambas realidades habitualmente serán coincidentes o concordantes, pero dada la diversidad de las realidades fácticas que el derecho está llamado a regular ello no siempre será así como ocurre precisamente en el caso sub lite. B) La segunda, identidad personal en referencia a los caracteres físicos de cada persona, esto es, los rasgos externos que la identifican e individualizan. Y C) La identidad personal referida a la realidad existencial de cada uno como persona, entendida como realización de un proyecto existencial.

Pues bien, los planteamientos doctrinarios antedichos permiten afirmar que el derecho a la identidad, derecho que no se limita a considerar el aspecto físico o biológico de la persona, sino que comprende su bagaje espiritual, intelectual, político y profesional entre otras peculiaridades de cada uno, se proyecta socialmente merced a la exteriorización de éstas, y encuentra su fundamento axiológico en la dignidad del ser humano por el hecho de ser tal: se trata entonces de un derecho autónomo, personalísimo y por sobre todo inalienable, siendo por ende merecedor de la tutela jurídica que el derecho debe proporcionarle.

Y esta tutela, en lo que atañe al recurso de nulidad esencial de autos, le está dada por los mencionados preceptos 200 y 201 del Código Civil, refrendados por el artículo 7° de la Convención sobre los Derechos del Niño y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

QUINTO: Que establecidos los hechos del juicio en el considerando segundo del presente fallo, y apreciados a la luz de los parámetros doctrinarios y jurídicos atinentes a la caracterización actual de la filiación como situación jurídica que trasunta el derecho inalienable a la identidad personal del niño, del menor y del adolescente, tutelado por los preceptos 200 y 201, esta Corte necesariamente deberá concluir que la sentencia impugnada, al restringir el ámbito de aplicación de la dicha tutela y denegar las demandas del menor D.A.S.S. tendientes a establecer la esencia de su identidad personal como es su filiación paterna, cercenando el derecho inalienable que le asiste, ha infringido ambas normas legales, tal como sostiene la recurrente.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por la abogada doña Heydi Román Palacios, en representación de la demandante, contra la sentencia de tres de junio de dos mil diecinueve, la que es nula, debiendo dictarse a continuación la sentencia de reemplazo que en derecho corresponda, conforme al mérito de lo obrado.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Blanco y de la Ministra señora Repetto, quienes fueron de opinión de rechazar el recurso, por estimar que al encontrarse determinada legalmente la paternidad del menor la demanda conjunta de impugnación y reclamación de la misma es improcedente, conforme lo previsto en los artículos 195 y siguientes del Código Civil, en cuanto el

marco legal establecido por el legislador para dichas acciones tiene como principio rector la búsqueda y el establecimiento de la verdad biológica, por sobre consideraciones de orden social.

Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de contemplarse la institución de la posesión notoria como medio de prueba, y no como una acción especial, según se desprende de la interpretación armónica del artículo 200, ubicado en el Párrafo de las Reglas Generales del Título VIII que regula las acciones de filiación, con los preceptos 201 y 309 inciso segundo, todos del mismo cuerpo legal. De esta manera, las cuestiones señaladas determinan que la demandante carezca de legitimación activa para accionar en el presente juicio, de conformidad con lo normado en su artículo 216 inciso final, lo que hace inviable el recurso de autos.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Cecilia Repetto G., y la abogada integrante señora Leonor Etcheberry C.

Sentencia de reemplazo

Santiago, cinco de marzo de dos mil veintiuno.

Dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo, reproduciendo la sentencia en alzada, a excepción de sus considerandos octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo, que se eliminan.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que habiéndose acreditado en autos la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 200 del Código Civil, se ha establecido que el menor D.A.S.S. ha ostentado y gozado por más de cinco años la posesión notoria de su estado civil de hijo de don Cristian Edgardo R. G., demandado en autos de reclamación de paternidad.

SEGUNDO: Que tal como se expresó latamente en los considerandos tercero y cuarto de la sentencia de casación que antecede, que se dan aquí por reproducidos, la posesión notoria del estado de filiación no puede estimarse restringida a ser meramente un medio probatorio y sólo a modo de excepción en juicio, sino que legitima la pretensión del menor que debidamente representado insta en estrados por su reconocimiento, no sólo porque ello no se encuentra prohibido ni limitado por el legislador del artículo 201 del ordenamiento sustantivo civil, sino porque permite al juzgador preferirla por sobre la constatación de la paternidad o maternidad biológicas en caso de contradicción, no existiendo en la especie ninguna grave razón que demuestre la inconveniencia de tal proceder en cuanto ello resulta más que conveniente considerando especialmente el interés superior del menor D.A.S.S., manifestado y acreditado en el proceso.

TERCERO: Que la antedicha posesión notoria del estado civil de hijo del demandado señor R. G., ostentada por el menor e invocada por éste como fundamento de sus demandas, corresponde al

ejercicio del derecho personalísimo e inalienable para construir su propia identidad, que le asiste como persona humana, cuya tutela jurídica se encuentra establecida, entre otras disposiciones, en los artículos 200 y 201 del Código Civil, y por los preceptos 7° de la Convención sobre Derechos del Niño y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

CUARTO: Que, en consecuencia y a la luz del mandato del citado artículo 200 del Código Civil, corresponde en la especie tener por acreditada la filiación del menor como hijo de Cristián Edgardo Ríos Gallardo, para todos los efectos legales, sin que la circunstancia de no haberse controvertido la paternidad biológica del demandado R.S.S.C pueda coartar el legítimo ejercicio de su derecho a establecer su propia filiación, como elemento básico y esencial de su identidad personal. Y ello debe ser así, además, porque ninguna de las normas citadas ni de las demás del estatuto de filiación del referido código contiene, ni expresa ni tácitamente, tal limitación. Por el contrario, el propio legislador del citado artículo 201 del mismo cuerpo legal se pone en el caso de la contradicción entre la verdad biológica y la verdad social de la filiación, y concede preferencia legal a la posesión notoria del estado civil de hijo, debidamente acreditada, por sobre la verdad biológica establecida.

Por estas consideraciones, y conforme lo previsto por los artículos 195, 198, 200, 201 y 208 del Código Civil; 32 y 66 de la Ley 19.968, se revoca la sentencia en alzada de doce de octubre de dos mil dieciocho, y se declara en su reemplazo que se acoge la demanda interpuesta por doña Nicole Jacqueline S. H. en representación de su hijo menor D.A.S.S., y se resuelve que éste no es hijo de don R.S.S.C, sino que es hijo de don Cristian Edgardo R. G., y se ordena:

1°) Cancelar la Inscripción N° 2.522 del año 2009 del Registro de Nacimientos del mismo año de la Circunscripción Recoleta del Servicio de Registro Civil; y

2°) Que dicho servicio deberá practicar una nueva inscripción de nacimiento en el sentido ya resuelto.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Blanco y de la Ministra señora Repetto, por las razones señaladas en su disidencia del fallo de casación.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Cecilia Repetto G., y la abogada integrante señora Leonor Etcheberry C.

5. Corte Suprema, 23 de enero de 2025, rol N°153.485-2024.

Sentencia de casación

Santiago, veintitrés de enero de dos mil veinticinco

Vistos:

En estos autos RIT C-110-2021, del Juzgado de Familia de Puerto Varas, caratulados “P. con M.”, por sentencia de quince de octubre de dos mil veintidós, se acogió la demanda de impugnación y reclamación de filiación basada en la posesión notoria.

Se alzó la parte demandada y una sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por sentencia de seis de junio de dos mil veintitrés, la revocó, desestimando las acciones de impugnación y reclamación.

En contra de dicha decisión la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo, en el que solicita su invalidación y se dicte la de reemplazo que indica.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, conforme lo prescribe el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa e indicar a los mismos los posibles vicios sobre los cuales deberán formular sus planteamientos, lo cual no se pudo verificar en la especie, puesto que el vicio se constató cuando la causa estaba en estado de acuerdo.

Segundo: Que, con arreglo al artículo 768 número 5° del Código de Procedimiento Civil, es causal de nulidad formal la circunstancia que la sentencia haya sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 de ese estatuto, cuyo literal cuarto preceptúa que deben contener las consideraciones de hecho o de derecho que sirvan para fundarlo. En materia de familia, el artículo 66 número 4 de la Ley N°19.968 señala que la sentencia debe contener “el análisis de la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión”.

Dicha exigencia formal puede ser cabalmente entendida con el desarrollo que efectúa al respecto el Auto Acordado sobre la forma de las sentencias, dictado por esta Corte en septiembre de 1920, de cuyos numerales 5° al 7° se desprende que la referida norma, en cuanto a las “consideraciones de hecho”, obliga al contenido de la expresión concreta de los hechos establecidos en el proceso justificados con arreglo a la ley, pues a partir de su concatenación lógica es posible realizar el examen de las consideraciones de derecho aplicables al caso, lo que llevará al tribunal a adoptar una decisión coherente sobre la base de dichos razonamientos.

Por lo tanto, dicho vicio de nulidad formal se configura cuando la sentencia, en el aspecto que se destaca, carece de los fundamentos fácticos que deben servir de sustento a la decisión que se adopta,

también cuando son discordantes, contradictorios o incompatibles entre sí, de manera que se anulan y no permiten su subsistencia dejando, en consecuencia, sin consideración al fallo.

Tercero: Que el fallo impugnado reprodujo la sentencia en alzada, con excepción del considerando décimo segundo y desde el décimo cuarto al vigésimo octavo, ambos inclusive, los que eliminó; dejando establecido como hecho, al reproducir en su considerando tercero aquella parte en que la sentencia de primera instancia tiene presente el certificado de nacimiento de la niña y la prueba pericial de ADN rendida, únicamente, que la niña tiene como padre y madre registrales a los demandados de autos y que aquél es su progenitor biológico.

Sobre la base de estos presupuestos fácticos, la judicatura revocó la sentencia de primera instancia y rechazó las acciones de impugnación y de reclamación, indicando en su considerando octavo *“que en criterio de estos sentenciadores cabe entender a la posesión notoria del estado civil de hijo como medio de prueba y no como una acción autónoma de filiación. Esto se debe a que las acciones de reclamación e impugnación de paternidad se fundamentan en la premisa de la verdad biológica. Es decir, lo que se busca a través de estas acciones es, en el primer caso, la declaración de la existencia de una determinada filiación y, en el segundo, la declaración de que la filiación que se ostenta no se alinea con la realidad biológica.”*; agregando, enseguida, que *“como se mencionó anteriormente, este supuesto no es aplicable en el caso en análisis, puesto que la filiación legal que mantiene la adolescente con quien la reconoció como hija, recurrente de autos, se encuentra en consonancia con la realidad biológica. Para satisfacer la pretensión de la parte demandante existen otras vías jurídicas, como la denominada adopción por integración”*.

Cuarto: Que, como se indicó, el fallo impugnado eliminó los hechos que se tuvieron por acreditados en el de primera instancia, salvo en lo relativo a que la niña tiene como padre y madre registrales a los demandados de autos y que aquél es su progenitor biológico, dejando con ello sin sustrato fáctico la posesión notoria sostenida en la demanda, y se limitó a realizar consideraciones de derecho que le condujeron a rechazar las acciones de impugnación y reclamación.

Quinto: Que, en tales circunstancias, no puede sino concluirse que la sentencia impugnada no cumple con las exigencias que impone el artículo 66 número 4 de la Ley N°19.968, configurándose de esta manera el vicio de nulidad formal previsto en el artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación al 67 número 6 letra b) de la Ley 19.968, lo que autoriza a hacer uso de la facultad que el artículo 775 del Código del ramo otorga a este tribunal para invalidar de oficio la sentencia impugnada y dictar la correspondiente de reemplazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se invalida de oficio la sentencia de seis de junio de dos mil veintitrés y se la reemplaza por la que, sin nueva vista, pero separadamente, se dicta a continuación.

Atendida la vía procesal escogida y lo precedentemente resuelto, se omite pronunciamiento en relación con el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante.

Se previene que el ministro Sr. Matus concurre a la anulación de oficio de la sentencia recurrida, pero no por la vía decidida, sino por entender que ella adolece de un vicio que habilita su casación en el fondo de oficio, al haber infringido lo dispuesto en los artículos 200 y 201 del Código Civil, alterando con ello el valor probatorio que dichas disposiciones otorgan a la acreditación de la paternidad por uso notorio sobre aquella determinable por exámenes genéticos.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R. y Andrea Muñoz S., el Ministro señor Jean Pierre Matus A., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C. y Fabiola Lathrop G. No firma la Ministra señora Gloria Ana Chevesich R., no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios. Santiago, veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

Redactó la abogada integrante señora Fabiola Lathrop G.

Sentencia de Reemplazo

Santiago, veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada y se tiene, además, presente:

1º Que la prueba documental y testimonial rendida en autos permite establecer irrefragablemente los elementos de la posesión notoria, esto es, el nombre, trato y fama, a la luz de lo dispuesto en el artículo 200 del Código Civil, teniéndose por establecido que el actor, de manera reiterada, continua y pública, por más de cinco años, ha reconocido a la niña BELÉN como su hija, formando una familia con la madre de la misma, a la cual la niña se encuentra vinculada por un fuerte sentido de pertenencia.

2º Que el vínculo, sin base biológica, que une a BELÉN con el actor, a quien reconoce e identifica como su padre, tiene un sustento socioafectivo, al cual tanto la jurisprudencia como el legislador nacional han ido reconociendo progresivamente relevancia jurídica, consolidando así, en el plano de las relaciones familiares, los principios constitucionales de igualdad y de respeto por el libre desarrollo de la personalidad.

3º Que la parentalidad socioafectiva, definida como un hecho jurídico compuesto de elementos sociales y afectivos y no exclusivamente genéticos (cfr. Dias, M., “Filiación socioafectiva: nuevo paradigma de los vínculos parentales”, UCES, N° 13, 2009, p. 85), sustenta, en ciertos casos, como el de estos autos, relaciones parentales desbiologizadas, en las que el ejercicio fáctico de las funciones parentales por otras personas que no son el padre o la madre, basado en una relación afectiva sostenida en el tiempo, incide directamente en la conformación de la faz dinámica de la identidad personal del hijo o hija, con especial alcance si se trata de niños, niñas o adolescentes (cfr. Álvarez Escudero, R., “La socio-afectividad como sustrato de relaciones parentales sin base biológica. Panorama en el

ámbito jurídico iberoamericano”, en Sole, J. (coord.), *Persona, Familia y Género*, Atelier, Barcelona, 2022, p. 163).

4° Que es criterio asentado en esta Corte, expresado en las sentencias de Roles N°s 18.707-2018, 12.792-2019, 16.219-2019 y 18.213-2019, que la posesión notoria debidamente acreditada es fundamento suficiente de las acciones de impugnación y de reclamación de estado civil, razón por la cual se comparte la decisión que se revisa en alzada.

5° Que la denominada “adopción por integración” es una medida que desborda la vocación inicial de la adopción, cual es restituir el derecho a vivir en familia a niños, niñas o adolescentes privados de un medio familiar, constituyendo más bien un instrumento jurídico que formaliza una relación parental; y que el modo en que la regula la legislación nacional en los artículos 8 letra b) y 11 de la Ley N° 19.620, implicaría indagar en los vínculos biológicos de origen paterno de BELÉN, los que desde muy temprana edad no se desarrollaron al punto de generarle relaciones afectivas significativas, así como determinar la existencia de habilidades parentales del actor y de la madre de BELÉN, las cuales ciertamente concurren conforme al mérito de autos; con lo cual resulta justificado, necesario y proporcional obtener la sustitución parental reclamada por el actor por la vía de la posesión notoria, descartando la aplicación de las disposiciones antes mencionadas.

6° Que la niña BELÉN fue oída en audiencia reservada presencial dando a conocer su interés manifiesto, y tanto su curadora ad litem como el consejero técnico fueron de la opinión de acoger las acciones. Por otra parte, es importante destacar que el interés superior de BELÉN ha sido determinado expresamente conforme a todas y cada una de las circunstancias específicas establecidas en el inciso quinto del artículo 7 de la Ley N°21.430, Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley N°19.968, se confirma la sentencia apelada de quince de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Familia de Puerto Varas en causa RIT C-110- 2021, caratulada “S. con H.”.

Regístrese y devuélvase.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señoras Gloria Ana Chevesich R. y Andrea Muñoz S., el Ministro señor Jean Pierre Matus A., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C. y Fabiola Lathrop G. No firma la Ministra señora Gloria Ana Chevesich R., no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios. Santiago, veintitrés de enero de dos mil veinticinco.

Redactó la abogada integrante señora Fabiola Lathrop G.

6. Corte Suprema, 17 de febrero de 2025, rol N° 234.885-2023.

Sentencia de casación

Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos RIT C 1940 2021, Ruc 21 2 2302259 3, del Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, caratulados "Rojas/Rojas", por sentencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se rechazó las demandas de impugnación y de reclamación de paternidad deducidas por don Alejandro Patricio Rojas Undurraga en contra de don Richard Alberto Toro López y don Freddy Antonio Rojas Cea, respectivamente.

Se alzaron el demandante y el demandado de reclamación de paternidad y una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por sentencia de once de septiembre de dos mil veintitrés, la confirmó.

En contra de esta última decisión, las mismas partes interpusieron sendos recursos de casación en el fondo, solicitando se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo que acoja la demanda de impugnación y reclamación de paternidad.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, en el ejercicio de la facultad contemplada en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, esta Corte estima del caso examinar si la sentencia en análisis adolece de vicios o defectos adjetivos.

Segundo: Que del estudio de los antecedentes del juicio se constata lo siguiente:

- a) El demandante, de 30 años de edad a la fecha de interposición de la demanda, indica que nació producto de una relación sentimental entre su madre y el demandado de impugnación de paternidad, en abril del año 1990, quien luego de reconocerlo no ha tenido ningún contacto con él, no se hizo cargo de su crianza ni manutención, y no tuvo ningún interés de tener algún vínculo afectivo propio de una relación entre padre e hijo. Agrega que su madre rehízo su vida casándose en 1994 con quien, en definitiva, ha sido su verdadero padre, ya que se hizo cargo de su crianza y manutención en su calidad de hijo, hasta la actualidad; en el ámbito social ha sido siempre considerado el hijo mayor del matrimonio, ya que tiene un hermano nacido de éste y los lazos afectivos y psicológicos creados en la vida diaria en razón de la constitución de una familia a la que pertenece lo llevan a deducir acción de reclamación de paternidad en contra de quien ha ejercido como tal, a fin de establecer la verdadera filiación a través de la prueba de la posesión notoria del estado civil;
- b) El demandado de reclamación de paternidad contestó la demanda oponiendo como excepción la posesión notoria de la calidad de hijo, sobre la base de los mismos hechos expuestos por el demandante, y solicitando, en definitiva, se tenga por reconocida su paternidad respecto de éste;
- c) El demandado de impugnación de paternidad no contestó la demanda deducida en su contra, por lo que se la tuvo por contestada en su rebeldía, no obstante, en audiencia preparatoria manifestó su conformidad con la demanda interpuesta;

d) En la audiencia preparatoria se fijaron como hechos a probar: 1. efectividad de contar el demandante con legitimación activa para accionar de impugnación y reclamación de paternidad, fundado en la posesión notoria de estado civil; 2. efectividad de ser el demandado de impugnación, padre biológico y legal del actor; 3. en la afirmativa del punto anterior, efectividad de concurrir en la especie los presupuestos fácticos de la posesión notoria en la forma alegada, que hagan procedente preferirla a otros medios de prueba que establezcan la verdad biológica del demandado de impugnación en relación al demandante;

e) El demandante incorporó en la audiencia de juicio, que tuvo lugar en tres sesiones, diversa prueba consistente, entre otras en: documental (certificado de nacimiento del demandante, sentencia de cambio de nombre en juicio seguido ante el 4° Juzgado Civil de San Miguel del año 1999, set fotográfico, certificado de nacimiento de hermano del demandante); testimonial y declaración del demandado de reclamación de paternidad. A su turno, el demandado de paternidad rindió prueba documental (certificado de matrimonio con la madre del demandante, carta del demandado al actor, captura de pantalla de Facebook); testimonial y declaración del actor;

f) El tribunal tuvo por acreditado que el actor tiene su filiación paterna determinada respecto del demandado de impugnación y que su madre es la cónyuge del demandado de reclamación.

Tercero: Que la sentencia impugnada, una vez que da cuenta enuncia la prueba rendida y establece el hecho indicado en la letra f) del motivo anterior, hace algunas disquisiciones doctrinarias acerca del significado de las acciones de filiación y, en particular, de la investigación de la paternidad, a la que le atribuye como objetivo buscar la verdadera filiación cuando ésta se desconoce o resulta dudosa, razona en el sentido que, en la especie, al no poner en duda el actor que el demandado de impugnación es su padre biológico, por lo que el demandado de reclamación no lo es, sino que refiere que ha estado presente en todos los aspectos de su vida y desarrollo personal, luego de casarse con su madre, no se trata de investigar una filiación paterna oculta o dudosa sino que se pretende modificar la paternidad del demandado. Destaca, a continuación, que la identidad biológica es fundamental en la actual legislación, lo que implica la prevalencia de la verdad real sobre la formal y se aprecia en el valor probatorio otorgado a las pruebas periciales de carácter biológico y que, excepcionalmente, esas pruebas no prevalecen ante la posesión notoria de la calidad de hijo de determinada persona, siempre que se pruebe los presupuestos contenidos en el artículo 200 del Código Civil. Sostiene que una interpretación armónica de los artículos 200, 201 (que prevé que la posesión notoria del estado civil de hijo debidamente acreditada preferirá a las pruebas periciales de carácter biológico en caso que haya contradicción entre una y otras) y 309 del Código Civil, permite aseverar que la posesión notoria no es una acción especial, sino un medio de prueba en un juicio de filiación, por lo que realizadas tales consideraciones de derecho, estima que el sustento de las acciones deducidas no se condice con las normas sustantivas del estatuto filiativo actual, resultando por ello improcedentes, ya que no se pretende impugnar una filiación legal que carece de fundamento biológico, sino generar una nueva filiación a través de la posesión notoria, que no es correlato de una verdad biológica ni legal. En razón de lo anterior y luego de citar alguna jurisprudencia, rechaza la demanda por no ser factible lo pedido por la vía del ejercicio de las acciones de filiación.

Cuarto: Que el artículo 66 de la ley 19.968, que crea los Tribunales de Familia, establece que la sentencia definitiva deberá contener, N°4) "el análisis de la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión."

Quinto: Que el requisito aludido obedece a la necesidad de fundamentación de las sentencias, que ya en el Auto Acordado dictado por esta Corte en el año 1920, se regulaba pormenorizadamente. La importancia de este requisito, que obliga al juzgador a exponer y desarrollar los racionales de orden fáctico y jurídico que motivan cada una de sus conclusiones, no sólo dice relación con el hecho que aquello constituye, en definitiva, el sustento de la decisión mediante la cual se dirime el conflicto sometido a su conocimiento, sino también con la necesidad de que tales razonamientos sean conocidos por las partes, de manera que éstas puedan hacer uso de su derecho a impugnar el fallo que se apoya en tales argumentos.

La falta de justificación de las sentencias se encuentra, asimismo, en estrecha vinculación con la garantía prevista en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Carta Fundamental, de acuerdo a la cual, toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo y legalmente tramitado, imperativo constitucional que permite dimensionar la envergadura de los requisitos previstos en el citado numeral 4° del artículo 66 de la ley 19.968, plenamente concordante con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y comprender la razón de que el legislador hubiere sancionado con la invalidación, el fallo que carezca del mismo, según preceptúa el artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 67 N°6, letra b) de la ley 19.968.

Sexto: Que, en la especie, de los antecedentes del proceso antes descritos, es posible advertir que no obstante haberse incorporado una serie de elementos probatorios en la audiencia de juicio, destinados a acreditar los hechos a probar fijados en la audiencia preparatoria, entre ellos y de manera especial, dadas las acciones deducidas, el sustrato fáctico de la posesión notoria alegada, la sentencia omite toda ponderación de aquella prueba y luego de consignar la relación filiativa del actor con el demandado de impugnación no discutida por las partes realiza las consideraciones de derecho esbozadas previamente, que conducen al rechazo de la demanda.

Así las cosas, la sentencia impugnada, que hace enteramente suya la de primera instancia, no pondera la prueba (de hecho ni siquiera la desarrolla, sólo la lista), por lo que no contiene hechos, sino solo consideraciones de derecho que fundamentan el rechazo de la demanda.

Séptimo: Que, en tales circunstancias, no puede sino concluirse que la sentencia impugnada no cumple con las exigencias que impone el artículo 66 N°4 de la ley 19.968, configurándose de esta manera el vicio de nulidad formal previsto en el artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil, en relación al 67 N°6 letra b) de la ley 19.968, lo que autoriza a hacer uso de la facultad que el artículo 775 del Código del ramo otorga a este tribunal para invalidar de oficio la sentencia impugnada y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 764 y 765 del Código de Procedimiento Civil, se anula de oficio la sentencia de once de septiembre de dos mil veintitrés y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista y en forma separada.

De conformidad a lo anterior, se omite pronunciamiento sobre los recursos de casación en el fondo intentados por el demandante y el demandado de reclamación de paternidad.

Redactó la ministra Andrea Muñoz S. Regístrese.

Rol N°234.885 2023

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señora Andrea Muñoz S., Ministros Suplentes señor Juan Manuel Muñoz P., señora Dobra Lusic N., y los abogados integrantes señora Fabiola Lathrop G., y señor Raúl Patricio Fuentes M. No firma el abogado integrante señor Fuentes, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veinticinco.

Sentencia de reemplazo

Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veinticinco.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los motivos octavo a décimo quinto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que en estos autos se pretende establecer la filiación paterna del demandante, don Bernardo, a través del ejercicio de una acción de reclamación de filiación basada en la posesión notoria del estado civil de hijo respecto de don Ulises, conjuntamente con una acción de impugnación de la filiación que se encuentra actualmente establecida por el acto de reconocimiento efectuado por don Saúl, sobre la base de esa misma posesión notoria de estado civil, que se estima, ha de primar sobre la realidad biológica.

Segundo: Que, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha considerado que la posesión notoria del estado de hijo o hija constituye una especie de reconocimiento de hecho, o social, de la paternidad o maternidad, así como también que ella refleja la “voluntad de acogida” –presente asimismo en otras instituciones, como la adopción - de una persona respecto a otra a la que trata como hijo o hija, aunque biológica o genéticamente no lo sea.

La posesión notoria es una institución de larga data en el Código Civil, que fue mantenida en su estructura y concepción básicas, con sólo algunas modificaciones, por la ley 19.585, que estableció el nuevo estatuto filiativo, siendo consagrada en el artículo 200 del Código Civil, actualmente vigente, en los siguientes términos: *“La posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona servirá para que el juez tenga por suficientemente acreditada la filiación, siempre que haya durado a lo menos cinco años continuos y se pruebe por un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos que la establezcan de un modo irrefragable. La posesión notoria consiste en que su padre, madre o ambos le hayan tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos; y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general le hayan reputado y reconocido como tal.”*

A su turno, el artículo 201 del mismo cuerpo legal, introducido por la ley 19.585, establece que *“La posesión notoria del estado civil de hijo, debidamente acreditada, preferirá a las pruebas periciales de carácter biológico, en caso de que haya contradicción entre unas y otras.*

Sin embargo, si hubiese graves razones que demuestren la inconveniencia para el hijo, de acreditar la regla anterior, prevalecerán las pruebas de carácter biológico”.

Tercero: Que, como se sabe, la reforma introducida por la ley 19.585 en materia de filiación, impulsó un cambio de paradigma en cuanto a abrir la posibilidad de investigar la paternidad, mediante toda clase de pruebas, con el objeto de hacer prevalecer la verdad biológica. Lo hizo, precisamente, porque el sistema vigente dejaba prácticamente atada la determinación de la filiación a un acto gracioso del padre o madre que decidía reconocer al hijo (a), y que –por eso mismo- condicionaba la determinación judicial a la voluntad del supuesto padre o madre, exigiendo que estuviera consignada en algún instrumento público del que pudiera desprenderse, o fuera confesada en citación judicial hecha para tal efecto (artículo 271 del Código Civil previo a la reforma), cuestión que la reforma modificó, consagrando la posibilidad de valerse de las pruebas biológicas y de la fuerza probatoria especial que se les otorgó, cuando el emplazado se negara injustificadamente a someterse a ellas.

No obstante, el nuevo estatuto filiativo no reconoce como único fundamento de la filiación, la verdad biológica, desde que en diversas ocasiones opta por una solución distinta, como ocurre cuando esa realidad biológica colisiona con la posesión notoria, en que se prefiere *prima facie* a esta última (artículo 201 del Código Civil), o en el caso de la filiación que tiene su origen en las técnicas de reproducción asistida, en que se prohíben las acciones de reclamación e impugnación (artículo 182 del Código Civil) que pudieran develar el origen biológico del hijo(a), e incluso al admitirse la institución de la repudiación, que procede independiente de que el “repudiado” por el hijo o hija, sea o no su padre o madre biológico.

Cuarto: Que, es menester tener presente que la regla establecida en el artículo 201 del Código Civil fue producto del debate que tuvo lugar en el Parlamento, durante la discusión del proyecto de ley que dio origen a la ley 19.585, al observarse que éste otorgaba prevalencia absoluta a la verdad biológica, lo que llevó a introducir ajustes tendientes a otorgar un mayor equilibrio entre el origen biológico, como antecedente de una determinada filiación, y la posesión notoria, considerando que en ciertas circunstancias se debía dejar paso a valores socialmente más importantes, atendida la importancia de los lazos afectivos y sociales presentes en el contexto de la posesión notoria (BCN, Historia de la Ley N° 19.585).

Quinto: Que, en ese marco legal, puede concluirse, como ya lo ha venido haciendo la Corte Suprema (roles N°s 18.707-2018, 12.792-2019, 16.219-2019 y 18.213-2019, entre otras), que así como una acción de filiación puede basarse en una premisa biológica, es perfectamente posible que lo haga también sobre la base de la posesión notoria. Como bien se ha precisado desde la academia, esto no significa que pase a ser una “acción de posesión notoria”, puesto que sigue siendo una acción de filiación ordinaria, en que lo reclamado es la paternidad o maternidad de una persona, no la posesión notoria. Y si bien la mayoría de las acciones de filiación que se ventilan en tribunales se basan en una premisa biológica, no hay motivo alguno para pensar que dicha premisa sea más real o de alguna manera más seria que la posesión notoria. (Verdugo Toro, Javiera, “Aplicación judicial de la posesión

notoria del estado civil de hijo como forma de determinar la filiación: cuatro ideas”, en Estudios de Derecho Civil XI, Thomson Reuters, año 2016, págs. 254-255).

En tal sentido, el tenor literal del artículo 200 del Código Civil, que, como se dijo, mantiene el criterio del Código Civil previo a la reforma, resulta claro al establecer que “La posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona servirá también para que el juez tenga por suficientemente acreditada la filiación, siempre que haya durado al menos cinco años continuos ...”, vale decir, le da el valor de fuente de la filiación, no existiendo entonces ningún fundamento legal que relegue dicha institución a un mero “medio de prueba”, o que impida que se ejerza como fundamento de una acción de filiación, como ya podía hacerse, según se dirá, en el sistema antiguo.

En efecto, ya bajo el antiguo régimen de filiación la posesión notoria constituía una fuente para determinar la filiación, como emanaba del artículo 271 del Código Civil antes mencionado, que otorgaba la calidad de “hijo natural”: N°1) a quienes el padre o madre hubiere reconocido como suyo; N°2) al que hubiera obtenido reconocimiento por sentencia judicial, supeditado, como se dijo, a la existencia de un instrumento público en que constara una “confesión manifiesta” de maternidad o paternidad; N°3) *“los que hubieren poseído notoriamente, a lo menos durante diez años consecutivos, la calidad de hijo respecto de una determinada persona”*; y N°4°) aquellos reconocidos por el supuesto padre, que citado a presencia judicial, confesare bajo juramento la paternidad.

Sexto: Que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, “la posesión notoria invocada como fundamento de ambas demandas corresponde al ejercicio del derecho personalísimo e inalienable para construir su propia identidad, que le asiste como persona humana, cuya tutela jurídica se encuentra establecida entre otras disposiciones, en los artículos 200 y 201 del Código Civil y por los preceptos 7° de la Convención sobre los Derechos del Niño y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.” Y explayándose sobre el derecho a la identidad, ha señalado que éste “no se limita a considerar el aspecto físico o biológico de la persona, sino que comprende su bagaje espiritual, intelectual, político y profesional, entre otras peculiaridades de cada uno, se proyecta socialmente merced a la exteriorización de éstas y encuentra su fundamento axiológico en la dignidad del ser humano por el hecho de ser tal, se trata entonces de un derecho autónomo, personalísimo y sobre todo inalienable, siendo por ende merecedor de la tutela jurídica que el derecho debe proporcionarle.” (C.S., rol N°18.213- 2019).

Séptimo: Que del análisis de la prueba rendida, documental, testimonial y declaración de parte, tanto por el demandante como por el demandado de reclamación de paternidad, y de la declaración ficta del demandado de impugnación, es posible establecer los siguientes hechos:

1.- El demandante nació el NUM000 de 1990 fruto de la relación habida entre su madre, Matilde, siendo adolescente, y don Saúl, quien lo reconoció voluntariamente.

Así se acredita con el certificado de nacimiento del demandante, el testimonio de Matilde y la declaración de parte de Saúl, respecto del que, ante su incomparecencia en la audiencia de juicio, se hizo efectivo el apercibimiento del artículo 52 de la ley 19.968.

2.- El padre biológico no tiene ninguna vinculación con el demandante, nunca tuvo interés en relacionarse con él.

En tal sentido declararon la madre del demandante y la tía, doña Telma, quienes resultan testigos creíbles y con pleno conocimiento de los hechos, por el contacto familiar estrecho con el demandante. Es lo que manifiesta también el demandante, en su declaración de parte, quien señala que si bien lo reconoce como su padre biológico, no tuvo ni tiene ninguna relación con él.

Una demostración que corrobora este hecho es el que don Saúl haya concurrido o dado su autorización para el cambio de apellido del demandante, como que tampoco se hubiera opuesto a la demanda de autos en la audiencia preparatoria.

3.- La madre del demandante contrajo matrimonio con don Ulises en el año 1994; lo que se prueba con el respectivo certificado de matrimonio.

4.- El demandante fue incorporado a la familia formada por su madre, el marido de su madre y el hermano que años más tarde nació del matrimonio, Kenneth,

5.- Don Ulises crió al demandante como su hijo, le otorgó su manutención, y ha estado presente en todos los eventos de su vida, de niño lo llevaba al colegio, fue su apoderado en el establecimiento educacional, participó en sus cumpleaños y demás celebraciones familiares, en su primera comunión, graduación, en sus eventos de salud, vacaciones, entre otros.

Sobre los hechos consignados en este punto como en el anterior, se recibió prueba consistente en testimonial de doña Matilde y de doña Telma, narrando ambas, con claridad y precisión, cómo don Ulises ha estado presente permanentemente en la vida del demandante, describiendo las situaciones específicas señaladas, que el demandante y su hermano Kenneth eran ambos los hijos de la familia y compartían por igual, que el demandante contribuyó a su manutención, se hizo cargo de darle educación y lo acompañó en su desarrollo personal, con su ejemplo y sus consejos. Doña Telma mantenía una relación estrecha con la familia de su hermana y se veían con mucha frecuencia, por lo que su testimonio corrobora lo que dice la madre. Esta última explica que esa relación de don Ulises con el demandante comenzó a tejerse aún antes de que ellos contrajeran matrimonio, desde que lo conoció, cuando éste tenía uno o dos años de vida.

Estos testimonios resultan consistentes con lo que declara el propio demandado de reclamación, quien ratifica los hechos y señala que desde hace 25 años, a lo menos, ha convivido con el demandante como su hijo, haciéndose cargo de su manutención, llevándolo al colegio, donde era su apoderado, acompañándolo en múltiples eventos importantes como su graduación, saliendo de vacaciones con él y con su hermano Kenneth, y participando en cada aspecto de su vida. De ello también dan cuenta las fotos acompañadas por el demandante, en que aparecen en diferentes momentos de la vida del grupo familiar. Él, junto a su padre y otros familiares en celebraciones de cumpleaños, navidad y vacaciones; destaca un pantallazo de Facebook del año 2016, en que aparecen don Ulises, el demandante y su hermano Kenneth, en que reza como comentario “En Reñaca, con mis bebés”.

Contribuye a formarse convicción sobre los hechos objeto de análisis, los esfuerzos por completar esa relación de familia del demandante con su padre a través de la adopción judicial de su apellido, y las gestiones para que todos sus documentos oficiales en su trayectoria educacional se ajustaran a esa verdad.

6.- Don Ulises presentó al demandante en su círculo social y familiar como su hijo, así fue y es conocido por vecinos, compañeros de trabajo, amigos y parientes en general.

La declaración del testigo don Abraham, presentado por don Ulises, resulta creíble, ilustrativa y coherente con la visión que surge del relato de las testigos Palma y la declaración de don Ulises, porque lo conoce hace más de 40 años, son amigos y fueron vecinos, juntos hacían bastante vida social, compartiendo incluso vacaciones de ambas familias, circunstancias en que don Ulises presentaba al demandante como su hijo, y a través de las cuales percibió siempre el trato que el señor Bernardo daba al demandante como su hijo, agregando que tan incorporada tenía él la condición de hijo del demandante, que le tomó de sorpresa cuando el demandado le solicitó fuera a declarar como testigo en el presente juicio, porque ya había olvidado el origen del joven. En la actualidad se ven con menos frecuencia, pero al menos una vez al mes. La presentación del demandante como hijo de don Ulises es un hecho del que da cuenta también la testigo Telma, quien señala, además, que éste demuestra sentirse orgulloso de “su hijo” y con frecuencia destaca sus cualidades.

7.- Entre don Ulises y el demandante existe una relación afectuosa y cercana.

Es un hecho que se constata no sólo de las testimoniales antes analizadas sino de las declaraciones de parte de los directamente involucrados.

Un elemento probatorio demostrativo de este hecho es la carta de 8 de noviembre de 2009, escrita por don Ulises para el demandante, en que le hace reflexiones acerca del momento vital que está viviendo, al egresar del colegio y entrar a otra etapa de su vida, en la que se percibe un trato cariñoso, y manifiesta el orgullo que siente como padre respecto del demandante. Es un trato que, además, lo perciben desde afuera, tanto la testigo Telma con el testigo Abraham.

8.- El Cuarto Juzgado Civil de San Miguel autorizó el cambio de nombre del demandante, quien tomó el apellido de don Ulises, realizándose los trámites correspondientes para rectificar la partida de nacimiento ante el Servicio de Registro Civil e Identificación; en la gestión judicial el padre biológico dio su consentimiento.

Lo anterior se acredita con la sentencia dictada por el tribunal, constituyendo una gestión judicial iniciada por doña Matilde, habiéndose ordenado la rectificación por encontrarse configurada la causal del artículo 1º letra b) de la ley 17.344, que se refiere a “cuando el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años, por motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos, diferentes de los propios.”

9.- A consecuencia de lo anterior, en el año 2000 se tramitaron las rectificaciones del nombre del demandante ante la Subsecretaría de Educación, en la documentación oficial pertinente, sometida al control de dicho organismo, lo que se prueba con el certificado emitido por la Subsecretaría antes mencionada.

Octavo: Que, con el mérito de la prueba rendida es posible concluir que se configuran los presupuestos fácticos de la posesión notoria, que la doctrina tradicionalmente ha establecido que son nombre, trato y fama, a la luz de lo dispuesto en el artículo 200 del Código Civil, que señala: “*La posesión notoria consiste en que su padre, madre o ambos le hayan tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos; y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general le hayan reputado y reconocido como tal.*”

En efecto, la prueba analizada precedentemente da cuenta con largueza de la concurrencia de los mencionados requisitos, al demostrar que el demandante ha recibido el trato de hijo de quien contrajo matrimonio con su madre cuando era recién un niño y lo crió como tal, haciéndolo parte de la familia, proveyendo a su educación y participando en su trayectoria vital, presentándolo como su hijo en todos los ámbitos, sociales y familiares, lo que incluyó su cambio de nombre y la rectificación de sus credenciales oficiales en su desempeño escolar, y se tradujo, coherentemente, en que todos quienes lo conocieran, amigos, familiares y vecindario en general, lo reputaran como su hijo. Tal situación de hecho se ha mantenido por más de 25 años continuos, por lo que cumple con el requisito de haber durado a los menos cinco años continuos.

La prueba de tales hechos satisface, asimismo, los estándares exigidos por el citado artículo 200 del Código Civil, al estar constituida por un conjunto de testimonios y otros antecedentes, que, en opinión del tribunal, permiten establecer la posesión notoria “de un modo irrefragable”.

Noveno: Que, previo a resolver sobre la procedencia de las acciones de filiación deducidas en autos, es menester dejar establecido que el demandante, de 30 años de edad a la fecha de interposición de la demanda, dedujo en forma conjunta las acciones de impugnación y reclamación de filiación, dado que, estando determinada su filiación por el reconocimiento efectuado por su padre biológico, para reclamar una nueva filiación, que es lo que el demandante pretende, el artículo 208 del Código Civil exige que ambas acciones se ejerzan simultáneamente.

La aplicación de esta norma tiene una consecuencia importante, cual es que en esa hipótesis, se levantan –no rigen– los plazos de caducidad señalados en el párrafo 3° del Título VIII del Libro I del Código Civil. Se trata de una regla fundamental que permite hacer efectiva la imprescriptibilidad de la acción de reclamación, la que, de otro modo, podría quedar en una mera declaración de principios, de encontrarse los plazos de impugnación vencidos.

Décimo: Que, en consecuencia, entendiendo que se encuentra plenamente acreditada la posesión notoria de la calidad de hijo del demandante respecto de don Ulises, y que producto de aquello se produce una contradicción entre la verdad biológica y la posesión notoria, debe aplicarse la regla contenida en el artículo 201 del Código Civil para resolverla, que establece que en ese caso ha de preferirse la posesión notoria, a menos que hubiese graves razones que demuestren la inconveniencia para el hijo de aplicar dicha regla, lo que ciertamente y conforme al mérito del proceso no ocurre en la especie. Valga aclarar que si bien en estos autos no se rindió prueba pericial para establecer el vínculo biológico entre el padre legal (demandado de impugnación) y el demandante, puesto que ninguno de ellos lo controvertió, debe presumirse que el reconocimiento de paternidad efectuado por el demandado en su oportunidad obedece a su conocimiento de que concurre tal circunstancia y, bajo ese supuesto, es posible aplicar la regla contenida en el artículo 201 del Código Civil antes transcrita, según la cual se preferirá la posesión notoria del estado civil de hijo debidamente acreditada, por sobre la prueba biológica, en caso de contradicción entre una y otra.

Undécimo: Que, como se aprecia, en la especie, las acciones de impugnación y de reclamación de filiación descansan sobre un supuesto común, cual es la existencia de la posesión notoria de la calidad de hijo del demandante respecto de quien ha ejercido como su padre, aunque sin serlo genéticamente, durante más de 25 años, por lo que al haberse comprobado que se dan los supuestos de la posesión

notoria respecto del demandado de reclamación, corresponde hacer lugar a ambas demandas, sin que sea necesario desvirtuar el vínculo biológico con el padre legal.

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 67 N°s 2 y 4 de la ley 19.968, se revoca la sentencia de nueve de marzo de dos mil veintitrés en cuanto rechaza las demandas de impugnación y reclamación de filiación deducidas por don Bernardo en contra de don Saúl y de don Ulises, respectivamente y, en su lugar, se declara que:

I. Se acoge la demanda de impugnación de paternidad interpuesta por don Bernardo en contra de don Saúl, debiendo, en consecuencia, cancelarse la inscripción N° NUM001 del año 1990 del Registro de Nacimientos del mismo año, de la Circunscripción Providencia, del Servicio de Registro Civil e Identificación, que lo consigna como hijo de filiación no matrimonial de éste;

II. Se acoge la demanda de reclamación de paternidad deducida por don Bernardo en contra de don Ulises, debiendo, en consecuencia, practicarse las inscripciones correspondientes en el Registro Civil que establezcan la filiación paterna del demandante con respecto al demandado.

No se condena en costas al demandado de impugnación, por haber tenido motivo plausible para litigar. Redactó la ministra Andrea Muñoz S.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las Ministras señora Andrea Muñoz S., Ministros Suplentes señor Juan Manuel Muñoz P., señora Dobra Lusic N., y los abogados integrantes señora Fabiola Lathrop G., y señor Raúl Patricio Fuentes M. No firma el abogado integrante señor Fuentes, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, diecisiete de febrero de dos mil veinticinco.

7. Corte Suprema, 26 de marzo de 2025, rol N° 6.530-2024.

Anulación de oficio

Santiago, veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

Vistos:

En estos autos RIT C 6530 2024, del Juzgado de Familia de Buin, caratulados "Catalina Townsend Romero con Rodrigo Castillo Godoy y Otro", por sentencia de siete de julio de dos mil veintitrés, se rechazó la demanda de impugnación y reclamación de filiación basada en la posesión notoria.

Se alzó la parte demandante y el demandado don Fernando Townsend y una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, la confirmó.

En contra de dicha decisión la parte demandante y el demandado don Fernando Townsend dedujeron recursos de casación en el fondo, en el que solicitan su invalidación y se dicte la de reemplazo que indican.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, conforme lo prescribe el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, pueden los tribunales, conociendo por vía de apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma, debiendo oír sobre este punto a los abogados que concurran a alegar en la vista de la causa e indicar a los mismos los posibles vicios sobre los cuales deberán formular sus planteamientos, lo cual no se pudo verificar en la especie, puesto que el vicio se constató cuando la causa estaba en estado de acuerdo.

Segundo: Que, con arreglo al artículo 768 número 5° del Código de Procedimiento Civil, es causal de nulidad formal la circunstancia que la sentencia haya sido pronunciada con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 de ese estatuto, cuyo literal cuarto preceptúa que deben contener las consideraciones de hecho o de derecho que sirvan para fundarlo. En materia de familia, el artículo 66 número 4 de la Ley N°19.968 señala que la sentencia debe contener "el análisis de la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión". Dicha exigencia formal puede ser cabalmente entendida con el desarrollo que efectúa al respecto el Auto Acordado sobre la forma de las sentencias, dictado por esta Corte en septiembre de 1920, de cuyos numerales 5° al 7° se desprende que la referida norma, en cuanto a las "consideraciones de hecho", obliga al contenido de la expresión concreta de los hechos establecidos en el proceso justificados con arreglo a la ley, pues a partir de su concatenación lógica es posible realizar el examen de las consideraciones de derecho aplicables al caso, lo que llevará al tribunal a adoptar una decisión coherente sobre la base de dichos razonamientos.

Por lo tanto, dicho vicio de nulidad formal se configura cuando la sentencia, en el aspecto que se destaca, carece de los fundamentos fácticos que deben servir de sustento a la decisión que se adopta,

también cuando son discordantes, contradictorios o incompatibles entre sí, de manera que se anulan y no permiten su subsistencia dejando, en consecuencia, sin consideración al fallo.

Tercero: Que el fallo impugnado reprodujo la sentencia en alzada, dejando establecido como hechos que la acción ha sido deducida por la propia interesada doña Catalina, mayor de edad; que el nombre del demandado de impugnación don Rodrigo Castillo aparece en la partida de nacimiento de la demandante por reconocimiento voluntario efectuado en el acto de nacimiento; que a la demandante se le vencieron los plazos para repudiar su verdadera filiación a la época de interposición de la demanda; que en la causa judicial Rol V 2 2021, del Cuarto Juzgado Civil de Santiago sobre cambio de apellido de la demandante, aceptó tácitamente su filiación respecto del demandado Rodrigo Castillo, y que, en atención a que la totalidad de la prueba rendida por la actora como por el demandado Fernando Townsend iba orientada a establecer la posesión notoria de hija respecto de dicho demandado, no procederá a efectuar análisis respecto de ella.

Sobre la base de estos presupuestos fácticos, la judicatura confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de impugnación y reclamación de paternidad por posesión notoria, citando los artículos 186 y 195 del Código Civil, y luego de definir el término filiación, sostuvo: "Que, por lo mismo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce como criterio relevante y preferente de atribución de paternidad lo que se denomina verdad biológica, la cual, una vez determinada legalmente, conforme el reconocimiento a que se refiere el artículo 186, no es posible modificar alegando la posesión notoria del estado civil de hijo. En efecto, no encontrándose discutido por los recurrentes la circunstancia anterior, no es posible atribuirle al demandado de reclamación la paternidad que se solicita a su respecto, desde que la demandante tiene el estado civil de hija en relación con el demandado de impugnación, y ello, principalmente, porque la institución de la posesión notoria del estado civil, no corresponde en caso alguno a una acción autónoma de reclamación de filiación, sino estrictamente a un medio probatorio cuya procedencia se sujeta a los requisitos establecidos por el legislador, y, como lo ha señalado la Corte Suprema "Otra cosa es que nuestro legislador reconozca la posibilidad de que desacreditado por medio de un examen pericial biológico el vínculo sanguíneo que configura la filiación, una determinada situación social, como lo es la posesión notoria del estado de hijo, pueda hacer al juez preferir dicha última circunstancia por sobre la evidencia científica, pero ello sólo procede en el ámbito del ejercicio del derecho de la investigación de la paternidad, en cuanto se indaga una verdad desconocida, oculta o dudosa, de modo que no parece como plausible ni procedente su ejercicio en el caso de autos, ya que quienes tienen el vínculo biológico son a quienes la ley les reconoce su carácter de padre y madre, entonces en estricto rigor, no hay vínculo de filiación dudoso que deba ser investigado". (Ingreso N.º 15.210 15 de dicho tribunal)".

Y concluyó que, encontrándose determinada legalmente la paternidad de la actora, la demanda conjunta de impugnación y reclamación de paternidad es improcedente, conforme a lo dispuesto en los artículos 195 y siguientes del Código Civil, careciendo de legitimación activa para ello.

Cuarto: Que, como se indicó, la sentencia impugnada no cuenta con el sustrato fáctico que dice relación con la posesión notoria invocada en la demanda, no obstante haberse rendido prueba al efecto, y se limitó a realizar consideraciones de derecho que le condujeron a rechazar las acciones de impugnación y reclamación.

Quinto: Que, en tales circunstancias, no puede sino concluirse que la sentencia impugnada no cumple con las exigencias que impone el artículo 66 número 4 de la Ley N°19.968, configurándose de esta manera el vicio de nulidad formal previsto en el artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación al 67 número 6 letra b) de la Ley 19.968, lo que autoriza a hacer uso de la facultad que el artículo 775 del Código del ramo otorga a este tribunal para invalidar de oficio la sentencia impugnada y dictar la correspondiente de reemplazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se invalida de oficio la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro y se la reemplaza por la que, sin nueva vista, pero separadamente, se dicta a continuación.

Atendida la vía procesal escogida y lo precedentemente resuelto, se omite pronunciamiento en relación con los recursos de casación en el fondo deducidos por las partes demandante y demandada don Fernando Townsend.

Acordada con el voto en contra de la ministra Mireya López, quien fue de opinión de no invalidar de oficio la sentencia impugnada, y resolver el fondo del recurso de casación sobre la base de las siguientes consideraciones:

1. La sentencia atacada da cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley N° 19.968, en especial a su numeral cuarto en cuanto exige "El análisis de la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esa conclusión".

2. En efecto, el fallo estableció los hechos relevantes que le permiten arribar a su conclusión jurídica, así conforme a la prueba rendida concluyó que la acción la dedujo la propia interesada doña Catalina Townsend, mayor de edad, que el nombre del demandado de impugnación Rodrigo Castillo aparece en la partida de nacimiento de la demandante por reconocimiento voluntario efectuado en el acto del nacimiento; que a la demandante se le vencieron los plazos para repudiar su verdadera filiación, que en la causa voluntaria sobre cambio de apellido rol V 2 2021 del Cuarto Juzgado Civil de Santiago la demandante aceptó tácitamente su filiación respecto del señor Castillo y que la prueba rendida estaba orientada a establecer la posesión notoria de hija respecto del demandado Fernando Townsend.

3. Sobre la base de tales hechos, el tribunal hizo aplicación del derecho que, en su concepto permitía resolver el pleito y consideró que habiéndose determinado legalmente la paternidad respecto de la demandante conforme lo prescribe el artículo 186 del Código Civil no era posible modificar tal determinación por medio de una acción de posesión notoria por cuanto ésta no es una acción autónoma de reclamación de filiación sino un medio probatorio.

consecuencia, en armonía con tal predicamento no era necesario ponderar una prueba que iba en contra con las normas que el fallo citó.

Regístrese.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señora Andrea Muñoz S., Mireya López M., ministro suplente señor Juan Manuel Muñoz P., y los abogados integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y señor José Miguel Valdivia O.

No firma el ministro suplente señor Muñoz Pardo y el abogado integrante señor Valdivia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber cesado en sus funciones el primero y por estar ausente el segundo.

Sentencia de Reemplazo

Santiago, veintiséis de marzo de dos mil veinticinco.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Vistos:

De la sentencia apelada se reproducen sus motivos primero a séptimo, decimosexto a vigésimo.

Y se tiene, en su lugar, y además, presente:

Primero: Que la filiación, según la doctrina sobre la materia, “es el vínculo jurídico existente entre el padre o la madre y el hijo; se refiere tanto a la relación de paternidad o maternidad, respectivamente,” y se la caracteriza como un “fenómeno jurídico que se fundamenta en el hecho fisiológico de la procreación, con la salvedad de la filiación adoptiva creada por el legislador y artificial, en el sentido que no supone un vínculo de sangre” (Troncoso L., Hernán, Derecho de Familia, Actualizado con la Ley 19.585, Concepción: Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de Derecho Privado, Año 2000, Págs. 219220). También, que es la “Relación, con el alcance jurídico, entre padres e hijos. Como hecho natural, se da siempre pues constituye una consecuencia de la procreación. Como hecho jurídico, estado de filiación, es decir, situación jurídica constatada, es la posición que una persona ocupa dentro de una familia en su calidad de hijo”. (Del Arco Torres, Miguel Ángel, Diccionario Básico Jurídico, 7ª edición, Año 2009, Granada: Comares, Pág. 255), lo anterior establece que la filiación ya ha dejado de ser considerada como una relación de sangre entre el padre, la madre y los hijos, sino más bien una situación jurídica, relacionada con el lugar que ocupa una persona en una familia.

Pues bien, la relación o estado que origina se conecta o influye en otros efectos jurídicos, v. gr., algunos atributos de la personalidad (estado civil, nombre, nacionalidad y domicilio del hijo), y se encuentra reglada en el Libro I del Código Civil, artículos 179 a 273, que conforma el estatuto de filiación, que se basa en los siguientes principios: la igualdad de todos los hijos, su interés superior y el derecho a la identidad.

Segundo: Que, en lo que concierne al derecho a la identidad, la doctrina señala que no se limita a considerar el aspecto físico o biológico de la persona, pues comprende el bagaje espiritual, intelectual, político, profesional, etc., a través del cual se proyecta socialmente al exteriorizar de alguna manera los aspectos propios de la personalidad; y que la identidad personal encuentra su fundamento axiológico en la dignidad del ser humano, que es un derecho personalísimo merecedor, por sí, de tutela jurídica, y autónomo.

En este sentido, Eduardo Zanoni señala que la noción jurídica de identidad no es unívoca, admitiendo, por lo menos, tres acepciones: a) la identidad personal en referencia a la realidad biológica, relativa

al derecho a conocer el origen biológico y, consiguientemente, a obtener el emplazamiento en el estado de familia que de acuerdo con tal origen le corresponda; aspecto que abarca: la identidad genética, que se refiere al patrimonio genético heredado de los progenitores biológicos, o sea, el genoma, y la identidad filiatoria, que resulta del emplazamiento de una persona en un determinado estado de familia, en relación a quienes aparecen jurídicamente como sus padres, la que está habitualmente en concordancia con la identidad genética, pero puede no estarlo; b) la identidad personal en referencia a los caracteres físicos de la persona, relacionada con los rasgos externos que la identifican e individualizan; y c) la identidad personal en referencia a la realidad existencial de la persona, entendida como la realización del proyecto existencial propio. (Famá, María Victoria, La filiación, régimen constitucional, civil y procesal, 2º Edición, Editorial Abeledo Perrot, Págs. 20-21). Asimismo, se ha sostenido que es “...el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. La identidad personal está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social...” (sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de abril de 2012), y “que es el conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad, por lo que es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro; por lo tanto, se despliega en el tiempo y se forja en el pasado desde el instante mismo de la concepción donde están las raíces y los condicionamientos pero traspasando el presente existencial, se proyecta al futuro”. (Fernández Sessarego, C., Derecho a la identidad personal, Buenos Aires, Editorial Astrea, Año 1992, Págs. 113 y 114).

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha relacionado el derecho a la identidad con la dignidad humana, noción esta última que considera como la “piedra angular de todo el edificio de los derechos fundamentales”, concluyendo que, no obstante que la Carta Fundamental carece de una referencia o reconocimiento expreso de la identidad como prerrogativa humana básica, ello no obstaculiza su protección constitucional, debido justamente a la estrecha vinculación entre ambos conceptos. Del mismo modo, que goza de un estatuto similar al derecho de la nacionalidad del que no puede carecer una persona y que se justifica incluir el derecho a la identidad personal entre aquellos esenciales a la naturaleza humana a que alude al artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental. (sentencias de 13 de mayo de 2008 y 29 de septiembre de 2009, dictadas en antecedentes roles 834-07 y 1340-09, que inciden en N° C-680-2007 del Cuarto Juzgado de Familia de Santiago y N° C-111-2009 del Juzgado de Familia de Pudahuel, respectivamente).

Con todo, se debe tener presente que el artículo 19 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre reconoce a toda persona el derecho a la nacionalidad, y el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a todo ser humano, en todas partes, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Dicho contexto autoriza colegir que, si bien la normativa interna no eleva a la categoría de fundamental el derecho a la identidad, en la medida que el artículo 1 de la Constitución Política de la República establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y el de identidad

es uno personalísimo, inherente a toda persona, independiente de su edad, sexo o condición social, por lo tanto, está íntimamente vinculado a la dignidad humana, debe ser considerado entre aquellos derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana a que se refiere el inciso 2° del artículo 5 de la misma, que, conforme a su tenor, se erigen como límite al ejercicio de la soberanía, imponiendo a los órganos del Estado respetarlos y promoverlos.

Tercero: Que la reforma introducida por la Ley N° 19.585 hacer primar la verdad real o biológica por sobre la formal, por lo tanto, es presidido por el denominado principio de veracidad cuyo criterio rector es el derecho a la identidad; se sustenta en la noción de la libre investigación de la paternidad o maternidad y en la de acceso de toda persona a una investigación judicial con una amplia admisibilidad probatoria; y consagra la imprescriptibilidad e irrenunciabilidad de la acción de reclamación de filiación. Sin embargo, en lo que concierne a la primacía que consagra, contempla excepciones, en lo que interesa, la institución de la posesión notoria del estado civil de hijo, que, debidamente acreditada, prefiere a las pruebas periciales de carácter biológico, de acuerdo lo señala el artículo 201 del Código Civil.

Cuarto: Que dicha institución está definida en el inciso 2° del artículo 200 del Código Civil, en los siguientes términos: “Consiste en que su padre, madre o ambos le hayan tratado como hijo, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos; y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como tal”. Conforme lo disponen los incisos primero y segundo del mismo, se compone de tres elementos: el nombre, el trato y la fama, que deben haberse configurado, a lo menos, durante cinco años continuos; y debe ser acreditada mediante un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignas que la establezcan en forma irrefragable; hecho que sirve a la judicatura para tener por suficientemente acreditada la filiación, que podría catalogarse como una de tipo social, cuyo fundamento, según se advierte, está dado por los lazos de afecto, dado que “ejercer de padre, querer serlo y haberlo sido por más de 5 años puede ser más relevante que la verdad genética. Además, el padre social ha desarrollado lazos afectivos con el menor, que le dan a éste estabilidad psicológica”. (Gómez de la Torre V., Maricruz, El sistema filiativo chileno, 1° Edición, Año 2007, Editorial Jurídica de Chile, Pág. 88)

Considerando los términos de la mencionada norma y los de los artículos 201 y 309 del Código Civil, tanto la doctrina como la jurisprudencia afirman que la posesión notoria del estado civil conforma una prueba que permite establecer la filiación. Sin embargo, las probanzas que debe rendir el litigante que la invoca deben estar dirigidas a acreditar los elementos que la componen, esto es, sus circunstancias fácticas, a saber, nombre, trato y fama; y demostradas, la consecuencia jurídica ineludible es que se está en presencia de dicha institución;

Quinto: Que la acción de reclamación de la filiación se puede definir como “aquella en cuya virtud quien no tiene determinada su filiación, demanda que sea declarada judicialmente”, esto es, se solicita que se declare que es hijo de su padre o madre, o viceversa, y la de impugnación del vínculo de filiación como “aquella que persigue dejar sin efecto la filiación que ha quedado determinada respecto del padre, madre o hijo” (René Abeliuk M., La filiación y sus efectos, 1° Edición, Año 2003, Editorial Jurídica de Chile, Págs. 157 y 172); y se caracterizan porque no son cedibles ni pueden ser objeto de

conciliación o transacción, ni someterse a compromiso, siendo la primera imprescriptible e irrenunciable, la segunda solo irrenunciable; y están regladas en los artículos 204 a 221 del Código Civil, en cuanto precisan quienes pueden deducirlas y contra quienes y, según sea el caso, cómo y en la oportunidad en que deben ser interpuestas. Pero, tratándose del hijo como legitimado activo, según se advierte de la lectura de dichas disposiciones, no indican cuál o cuáles deben ser sus fundamentos, por lo tanto, no se divisa razón por la que solo podrían basarse en la realidad biológica y no en la social, esto es, en la posesión notoria del estado civil de hijo, tampoco en que ésta únicamente se puede invocar como excepción para enervar una acción de impugnación de la filiación, más aun considerando lo ya expuesto a propósito del derecho a la identidad, que constituye uno de los fundamentos del estatuto de filiación.

En estas condiciones, las normas que rigen la filiación no solo conducen a la realidad biológica de los involucrados, sino que permiten considerar la realidad social que le concede a un hijo tal como lo establece la definición de filiación, una posición dentro de la familia, que le permite asimismo determinar su identidad y proteger su dignidad.

Sexto: Que, en ese marco legal, puede concluirse, como ya lo ha venido haciendo la Corte Suprema (roles N°s 18.707-2018, 12.792-2019, 16.219-2019 y 18.213-2019, entre otras), que así como una acción de filiación puede basarse en una premisa biológica, es perfectamente posible que lo haga también sobre la base de la posesión notoria. Como bien se ha precisado desde la academia, esto no significa que pase a ser una “acción de posesión notoria”, puesto que sigue siendo una acción de filiación ordinaria, en que lo reclamado es la paternidad o maternidad de una persona, no la posesión notoria. Y si bien la mayoría de las acciones de filiación que se ventilan en tribunales se basan en una premisa biológica, no hay motivo alguno para pensar que dicha premisa sea más real o de alguna manera más seria que la posesión notoria. (Verdugo Toro, Javiera, “Aplicación judicial de la posesión notoria del estado civil de hijo como forma de determinar la filiación: cuatro ideas”, en Estudios de Derecho Civil XI, Thomson Reuters, año 2016, págs. 254-255). En tal sentido, el tenor literal del artículo 200 del Código Civil, que mantiene el criterio del Código Civil previo a la reforma, resulta claro al establecer que “La posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona servirá también para que el juez tenga por suficientemente acreditada la filiación, siempre que haya durado al menos cinco años continuos ...”, vale decir, le da el valor de fuente de la filiación, no existiendo entonces ningún fundamento legal que relegue dicha institución a un mero “medio de prueba”, o que impida que se ejerza como fundamento de una acción de filiación, como ya podía hacerse en el sistema antiguo.

En efecto, ya bajo el antiguo régimen de filiación la posesión notoria constituía una fuente para determinar la filiación, como emanaba del artículo 271 del Código Civil antes mencionado, que otorgaba la calidad de “hijo natural”: N°1) a quienes el padre o madre hubiere reconocido como suyo; N°2) al que hubiera obtenido reconocimiento por sentencia judicial, supeditado, como se dijo, a la existencia de un instrumento público en que constara una “confesión manifiesta” de maternidad o paternidad; N°3) “los que hubieren poseído notoriamente, a lo menos durante diez años consecutivos, la calidad de hijo respecto de una determinada persona”; y N°4°) aquellos reconocidos por el supuesto padre, que citado a presencia judicial, confesare bajo juramento la paternidad.

Séptimo: Que los medios de prueba rendidos en autos permiten establecer que 'la actora tiene la posesión notoria de la calidad de hija de don Fernando Townsend, y éste a su vez, de padre de la demandante, lo anterior se desprende que la actora nació el 20 de noviembre de 2001; que la madre de Catalina contrajo matrimonio con don Fernando Townsend el 13 de octubre de 2012, cuando la actora tenía 11 años de edad; que don Fernando al 6 de marzo de 2023 mantiene en su plan de salud como beneficiaria a la demandante.

Se incorporaron set de fotografías entre la demandante y el demandado de reclamación de filiación que dan cuenta de actividades familiares entre el año 2004 fecha de inicio de la relación afectiva de la madre de Catalina con don Fernando Townsend a la fecha de la audiencia de juicio; las declaraciones de los testigos doña Paola Romero Mesa, doña Esperanza Vásquez Labra y doña Victoria Vilches Negrete, todas ellas contesten en que don Rodrigo Castillo ha sido y es una persona ausente en la vida de Catalina desde su infancia, que ha generado un vínculo paterno filial con el demandado don Fernando Townsend, quien se ha hecho cargo junto a su madre, de la crianza y su manutención desde pequeña, y a quien reconoce y presenta socialmente como padre.

De la prueba documental, se acreditó que Catalina solicitó en el año 2021 ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago rectificación de su partida de nacimiento mediante el cambio de su primer apellido, justificando su solicitud "en el honor que quiere hacer al hombre que la crió y se preocupó por ella como una hija sin serlo, cubriendo todas sus necesidades económicas y afectivas, en virtud de los esfuerzos que tanto su madre y él hicieron por ella, luchando por su educación y vida, debido a la completa ausencia de su padre biológico, sintiéndose perjudicada y menoscabada en su integridad psicológica al llevar el apellido de su progenitor", formulada al tenor de la Ley N° 17.344, solicitud que fue acogida por sentencia de fecha 7 de enero de 2021, la que ordenó la rectificación de la partida de nacimiento.

Por último, en audiencia preparatoria celebrada el 28 de septiembre de 2022 compareció el demandado don Rodrigo Castillo, quien se allanó a la demanda de impugnación de paternidad.

La prueba de tales hechos satisface, asimismo, los estándares exigidos por el citado artículo 200 del Código Civil, al estar constituida por un conjunto de testimonios y otros antecedentes, que, en opinión del tribunal, permiten establecer la posesión notoria "de un modo irrefragable".

Octavo: Que, en consecuencia, entendiendo que se encuentra plenamente acreditada la posesión notoria de la calidad de hija de doña Catalina Townsend Romero respecto de don Fernando Townsend Sotomayor y que producto de aquello se produce una contradicción entre la verdad biológica y la posesión notoria, debe aplicarse la regla contenida en el artículo 201 del Código Civil para resolverla, que establece que en ese caso ha de preferirse la posesión notoria, a menos que hubiese graves razones que demuestren la inconveniencia para el hijo de aplicar dicha regla, lo que ciertamente y conforme al mérito del proceso no ocurre en la especie.

Valga aclarar que si bien en estos autos no se rindió prueba pericial para establecer el vínculo biológico entre el padre legal (demandado de impugnación) y la demandante, puesto que ninguno de ellos lo controvertió, debe presumirse que el reconocimiento de paternidad efectuado por el demandado en su oportunidad obedece a su conocimiento de que concurre tal circunstancia y, bajo

ese supuesto, es posible aplicar la regla contenida en el artículo 201 del Código Civil antes transcrita, según la cual se preferirá la posesión notoria del estado civil de hijo debidamente acreditada, por sobre la prueba biológica, en caso de contradicción entre una y otra.

Noveno: Que, como se aprecia, en la especie, las acciones de impugnación y de reclamación de filiación descansan sobre un supuesto común, cual es la existencia de la posesión notoria de la calidad de hija de la demandante respecto de quien ha ejercido como su padre, aunque sin serlo genéticamente, durante más de 10 años, por lo que al haberse comprobado que se dan los supuestos de la posesión notoria respecto del demandado de reclamación, corresponde hacer lugar a ambas demandas, sin que sea necesario desvirtuar el vínculo biológico con el padre legal.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 67 N° 19.968 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara que se revoca la sentencia apelada, en cuanto rechaza las demandas de impugnación y reclamación de filiación deducidas por doña Catalina Antonia Townsend Romero en contra de don Rodrigo Enrique Castillo Godoy y de don Fernando Townsend Sotomayor, respectivamente y, en su lugar, se declara que:

I. Se acoge la demanda de impugnación de paternidad interpuesta por doña Catalina Antonia Townsend Romero en contra de don Rodrigo Enrique Castillo Godoy, debiendo, en consecuencia, cancelarse la inscripción correspondiente en el Servicio de Registro Civil que la consigna como hija de filiación no matrimonial de éste.

II. Se acoge la demanda de reclamación de paternidad deducida por doña Catalina Antonia Townsend Romero en contra de don Fernando Townsend Sotomayor, debiendo, en consecuencia, practicarse las inscripciones correspondientes en el Registro Civil que establezcan la filiación paterna de la demandante con respecto al demandado Townsend Sotomayor.

III. No se condena en costas al demandado de impugnación, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Acordada con el voto en contra de la Ministra señora Mireya López, quien fue de opinión de no dictar sentencia de reemplazo, en virtud de los fundamentos anotados en el voto disidente del fallo invalidatorio que precede.

Regístrese y devuélvanse.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señora Andrea Muñoz S., Mireya López M., ministro suplente señor Juan Manuel Muñoz P., y los abogados integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y señor José Miguel Valdivia O.

No firma el ministro suplente señor Muñoz Pardo y el abogado integrante señor Valdivia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber cesado en sus funciones el primero y por estar ausente el segundo.

8. Corte Suprema, 1 de septiembre de 2025, rol N° 60.884 2024.

Sentencia de casación

Santiago, uno de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

En esta causa RIT C 2164 2022, RUC 2223222278 K, caratulada “J. con G. y otro”, sobre acciones de impugnación y de reclamación de paternidad, el demandante don Juan Pablo Andrés J. R. las interpone contra don Jorge Javier R. T. y doña Morelia Fernanda G. P., padres biológicos de la niña D.P.R.G., de 10 años a esa fecha, solicitando se declare que es el padre de ésta por darse los presupuestos de la posesión notoria del estado civil que reclama. Por sentencia de primera instancia de seis de marzo de dos mil veinticuatro el Tribunal de Familia de Talca, las rechazó, sin costas.

Apelada por el actor, una de las salas de la Corte de Apelaciones de Talca mediante fallo emitido el veinticinco de noviembre de la misma anualidad, la confirmó.

En contra de esta decisión la misma parte dedujo recurso de casación en el fondo, solicitando se la invalide y que este tribunal dicte la de reemplazo en los términos que indica.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: El recurrente acusa infracción de los artículos 200 y 201 del Código Civil y 32 de la Ley N°19.968, fundado en que no interpone acción de posesión notoria de estado civil, sino de reclamación y de impugnación de filiación, basada o sustentada en esa institución, las que están expresamente reguladas en nuestra legislación. En este sentido, aduce que se confunden con su fundamento, en este caso en la institución mencionada, la que, aun considerada como un medio de prueba, nada obsta a que sirva también como base de las acciones interpuestas. Destaca que la posesión notoria se encuentra en el Título VIII del Código Civil, llamado “De las acciones de filiación”, por ende, dentro de las reglas generales aplicables a cada uno de sus párrafos, no siendo indiferente para las acciones de filiación. Agrega que se probaron todos y cada uno de los hechos ordenados acreditar por el tribunal, los que satisfacen los presupuestos de la posesión notoria y, pese a ello, se desestimó la demanda, siendo elocuente la deuda de alimentos que mantiene el demandado padre biológico y la falta total de comunicación de éste con la niña, estando probado en cambio que el actor desde los seis meses de vida de ésta la ha criado como su padre, entrando en la vida de la niña haciéndose cargo de ella como su hija y la misma lo reconoce como su padre ante la sociedad. El tribunal rechazó la demanda bajo el fundamento que la verdad biológica prevalece por sobre la posesión notoria, aun cuando el artículo 201 del Código Civil, que, si bien no lo señala expresamente, se infiere que una vez acreditada la posesión notoria esta sí prevalece por sobre la primera.

En un segundo capítulo de nulidad denuncia infracción a los artículos 16 y 32 de la Ley N°19.968. Argumenta que el interés superior del niño está regulado en diferentes instrumentos internacionales, el que debe ser considerado principalmente en la resolución del asunto sometido a su conocimiento. Así, toda interpretación de las instituciones en juego y que digan relación con los derechos de un niño,

niña o adolescente, debe considerar su interés superior, que se reconoce en nuestra legislación tanto en el artículo 16 de la Ley N°19.968, como en el artículo 7° de la Ley N°21.430, lo cual implica que en la toma de decisiones deba procurarse la máxima satisfacción de sus derechos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, y para su determinación se deberán considerar las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente, entre las cuales se encuentra la opinión que éstos expresen, cuando sea posible conforme su edad, grado de desarrollo y madurez, bienestar físico, mental, espiritual, moral, cultural y social, su identidad y sus necesidades, además de la necesidad de estabilidad de las decisiones que se adopten, para promover su desarrollo e integración.

Indica que en la causa se agregaron tres informes que dan cuenta del enorme aporte y participación del actor en la vida de la niña, a diferencia del padre biológico.

Reconociendo la sentencia impugnada en su motivo séptimo que se cumplen los requisitos de la posesión notoria y, pese a ello, desestima las acciones, señalando que existe otra acción en la ley de adopción para que la niña siga desarrollándose y que las intentadas no pueden prosperar.

Finalmente, explica cómo los errores de derechos denunciados influyen en lo dispositivo de la sentencia impugnada, solicitando se invalide y dicte la de reemplazo que acoja en todas sus partes la demanda.

Segundo: La sentencia estableció como hechos los siguientes:

- a) D.P.R.G. es hija biológica de don Jorge Javier R. T. y de doña Morelia Fernanda G. P.
- b) La niña nació el 28 de agosto de 2012 (a la fecha tiene 13 años) y desde los seis meses de vida vive con su madre doña Morelia G. y con don Juan Pablo Andrés J. R., siendo cuidada y criada por ambos.
- c) El día 17 de diciembre de 2022, don Juan Pablo Andrés J. R. y doña Morelia Fernanda G. P. contrajeron matrimonio.
- d) El demandado presentó demanda de rebaja de alimentos y de relación directa y regular para con su hija, la que se tramitó en causa RIT C1952 2020, seguida en el Tribunal de Familia de Talca, acordándose, a través de una conciliación, el pago de una pensión de alimentos y, luego, se desistió de la acción de relación directa y regular, a lo cual accedió el tribunal por resolución de veintisiete de julio de dos mil veintidós.
- e) Según última liquidación de alimentos realizada en causa RIT Z 13192018, el demandado R. T. adeudaba la suma de \$6.314.631 al 13 de febrero de 2023.

Tercero: En la sentencia impugnada se estableció que “no hay duda de que los requisitos de la posesión notoria, se presentan, a través de los testimonios que se han desplegado en el juicio, no es posible dar a este medio de prueba, el valor o la eficacia para modificar en la niña D.P., su estado civil de hija del demandado Jorge R. T. legalmente establecido, circunstancia ésta, que consta en el certificado de nacimiento de D.P., y reconocimiento que hacen todas las partes del juicio, en cuanto a que quien aparece en su certificado de nacimiento, es el padre biológico, así como con las copias de las causas C y Z tramitadas en el tribunal”.

Agrega que “La falta de eficacia probatoria señalada anteriormente, se produce, por cuanto, a la realidad de una filiación legalmente determinada (ya dijimos que era el caso) no se opone ni puede oponerse la posesión notoria del estado de hijo/a, pues como la acción de impugnación lo que busca es anular una filiación determinada, que no se condice con la real (que no es el caso actual, pues si

hay coincidencia), al ser el demandado Jorge R. T., el verdadero padre, no se puede establecer la filiación por vía de posesión notoria, ya que este es un medio de prueba y no una manera de crear un estado civil...” y que “...la posesión notoria, lo que pretende es indagar una verdad desconocida, oculta o dudosa, de modo que no procede su aplicación en el caso que se revisa, ya que quienes tienen vínculo biológico son aquellos que la ley les reconoce su carácter de padre y madre, entonces en estricto rigor, no hay vínculo de filiación dudoso que deba ser investigado, a saber, los padres biológicos de la demandante son doña Morelia Fernanda G. P. y don Jorge Javier Andrés R. T. “.

Añade que “el objetivo de los juicios de filiación y basándose en el principio del derecho a la identidad es la búsqueda de la verdad real o biológica, sin embargo, cierto es que, de manera excepcional, el legislador reconoce nexo social y afectivo, independiente de si es compatible con la verdad biológica, siendo incluso preferido por sobre el nexo biológico si son contradictorios en juicio, pero, por ser excepcional, su interpretación debe ser restrictiva y exigente. He aquí lo que establece el artículo 201 del Código Civil. Ésta es una regla de preferencia, que se usa para ponderar comparativamente dos medios de prueba, y permite al juez/a dar preferencia a la posesión notoria frente a una prueba pericial contradictoria, pero no sirva contra una filiación legalmente determinada”.

Cuarto: En el caso de la especie, la sentencia impugnada desestimó la posibilidad del ejercicio de acciones de filiación impugnación y reclamación de paternidad invocando la posesión notoria de hija, desconociendo que los artículos 200 y 201 del Código Civil lo permiten, en tanto no existe regla que lo prohíba o limite, pues “...no se divisa razón por la que solo podrían basarse en la realidad biológica y no en la social... y tampoco que ésta únicamente se puede invocar como excepción para enervar una acción de impugnación de filiación...” (Sentencia dictada por esta Corte en causa N°18.707 18). Además, esta Corte ha señalado en materias similares que “...de aceptarse dicho razonamiento, no podría prosperar ninguna demanda de reclamación de filiación no matrimonial sustentada en la posesión notoria de la calidad de hijo, consecuencia del todo ajena al espíritu del legislador al establecer el actual estatuto de filiación, en particular, del derecho a la identidad tantas veces referido, reconocido en la normativa nacional e internacional...”. (Sentencia de 5 de enero de 2017 dictada en los autos N°59.106 2016).

En jurisprudencia más reciente, en la misma tendencia interpretativa, este tribunal estableció que “...el vínculo, sin base biológica, que une a A.V.G.N. con el actor, a quien reconoce e identifica como su padre, tiene un sustento socioafectivo, al cual tanto la jurisprudencia como el legislador nacional han ido reconociendo progresivamente relevancia jurídica, consolidando así, en el plano de las relaciones familiares, los principios constitucionales de igualdad y de respeto por el libre desarrollo de la personalidad.”. (Sentencia dictada en la causa N°153.485 2024).

El citado fallo razona: “Que la parentalidad socioafectiva, definida como un hecho jurídico compuesto de elementos sociales y afectivos y no exclusivamente genéticos (cfr. Días, M., “Filiación socioafectiva: nuevo paradigma de los vínculos parentales”, UCES, N° 13, 2009, p. 85), sustenta, en ciertos casos, como el de estos autos, relaciones parentales desbiologizadas, en las que el ejercicio fáctico de las funciones parentales por otras personas que no son el padre o la madre, basado en una relación afectiva sostenida en el tiempo, incide directamente en la conformación de la faz dinámica

de la identidad personal del hijo o hija, con especial alcance si se trata de niños, niñas o adolescentes (cfr. Álvarez Escudero, R., “La socio afectividad como sustrato de relaciones parentales sin base biológica. Panorama en el ámbito jurídico iberoamericano”, en Sole, J. (Coord.), Persona, Familia y Género, Atelier, Barcelona, 2022, p. 163).”

Indicando además que “...es criterio asentado en esta Corte, expresado en las sentencias de Roles N°s 18.707 2018, 12.792 2019, 16.219 2019 y 18.213-2019, que la posesión notoria debidamente acreditada es fundamento suficiente de las acciones de impugnación y de reclamación de estado civil, razón por la cual se comparte la decisión que se revisa en alzada”.

Quinto: Que la denominada “adopción por integración” reconocida en la Ley N° 19.620, en vigor a la fecha de la demanda, no excluye ni limita el ejercicio de las acciones de filiación fundada en la posesión notoria, por cuanto aun tratándose de un instrumento jurídico que formaliza una relación parental, esa normativa, en los artículos 8 letra b) y 11 de la Ley N° 19.620, exige indagar en relación a otros vínculos biológicos de origen paterno del hijo o hija, así como determinar la existencia de habilidades parentales de quien la endereza, no siendo razonable ni ajustado a la legislación vigente proscribir el ejercicio de las acciones de filiación en los términos en que se han formulado, para dar preferencia a otra. Por consiguiente, resulta “justificado, necesario y proporcional obtener la sustitución parental reclamada por el actor por la vía de la posesión notoria, descartando la aplicación de las disposiciones antes mencionadas”. (sentencia citada).

Sexto: Que el interés superior del niño o niña, en tanto derecho, principio y norma de procedimiento, debe ser siempre considerado al tiempo de resolver asuntos que los involucran, y determinarse en conformidad a las circunstancias específicas establecidas en el inciso quinto del artículo 7 de la Ley N° 21.430, Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; cobrando relevancia particular en el caso que se revisa, las prescritas en sus letras b) y f) relativas a la opinión expresada por el niño, niña o adolescente y a su autonomía, respectivamente, pues, según lo manifestado por la propia niña y corroborado en los diversos informes acompañados a la causa, existe una estrecha relación afectiva entre ésta y el actor cónyuge de su madre desde sus primeros meses de vida, construida en concomitancia a la ausencia sostenida del demandado, quien según tales informes permaneció como una figura desconocida para la niña, que no se vinculó con su hija ni adoptó medidas concretas para un acercamiento saludable con miras al ejercicio de su paternidad; interés manifiesto que debe ser tenido en cuenta conforme a la edad, grado de desarrollo y madurez de quien lo emite, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la mencionada Ley, que en este caso corresponde al de una niña de 13 años que se muestra “resuelta y equilibrada emocionalmente” de acuerdo al informe psicológico que se le ha practicado.

Séptimo: Que conforme se viene razonado, la sentencia impugnada infringió lo que disponen los artículos 200 y 201 del Código Civil, así como lo previsto en el artículo 16 de la Ley N° 19.968, con influencia substancial en su parte dispositiva, pues la errada interpretación de tales preceptos condujo a que se desestimara la demanda interpuesta, entendiendo que las normas que rigen la filiación sólo deben conducir a la realidad biológica de los involucrados, dejando de lado la realidad social y afectiva que se acredita mediante la prueba de la posesión notoria, desconociendo la situación de la niña dentro de su familia, el amor y cuidado entregado por el actor y los derechos asociados al estado

civil de hija respecto de éste, lo cual garantiza el pleno ejercicio de sus derechos y, especialmente, su estabilidad emocional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por el demandante en contra de la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Talca, la que se invalida y reemplaza por la que, acto continuo y sin nueva vista, se dicta a continuación.

Acordada con el voto en contra de la ministra Mireya López, quien fue de opinión de rechazar el recurso de casación en el fondo sobre la base de las siguientes consideraciones:

1°. Que al encontrarse determinada legalmente la paternidad de la niña de autos, la demanda conjunta de impugnación y reclamación de paternidad es improcedente conforme a lo dispuesto en los artículos 195 y siguientes del Código Civil, por cuanto el marco legal establecido por el legislador para dichas acciones tiene como principio rector la búsqueda y establecimiento de la verdad biológica por sobre consideraciones de orden familiar o social; como lo razona correctamente la sentencia de primer grado, fundamentos que hizo suyos el fallo recurrido.

La conclusión anterior se ve reafirmada por el hecho de contemplarse la institución de la posesión notoria como un medio de prueba y no como una acción especial, según se desprende de la interpretación armónica del artículo 200 del Código Civil ubicado en el párrafo de las Reglas Generales del Título VIII que regula las acciones de filiación con los artículos 201 e inciso segundo del artículo 309 del mismo cuerpo legal.

2°. De esta manera, en opinión de la disidente, las normas sustantivas denunciadas fueron correctamente aplicadas en la sentencia impugnada por ser un hecho asentado que la hija de los demandados tiene filiación determinada por el reconocimiento de su padre biológico, calidad que no ha sido cuestionada, lo que conduce al rechazo del recurso.

Redacción a cargo de la ministra señora Jessica González T. Regístrese y comuníquese.

Sentencia de reemplazo

Santiago, uno de septiembre de dos mil veinticinco.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los motivos séptimo a noveno, que se eliminan. Asimismo, se reproducen los fundamentos sexto y séptimo del fallo de nulidad que antecede.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que en estos autos se pretende establecer la filiación paterna del demandante, don Juan Pablo J. R., a través del ejercicio de una acción de reclamación de filiación basada en la posesión notoria del estado civil de hija de D.P.R.G., conjuntamente con una acción de impugnación de la

filiación que se encuentra actualmente establecida por el acto de reconocimiento efectuado por don Jorge Javier R. T., sobre la base de esa misma posesión notoria de estado civil, que se estima, ha de primar sobre la realidad biológica.

Segundo: Que doctrinaria y jurisprudencialmente se ha considerado que la posesión notoria del estado de hijo o hija constituye un reconocimiento de la parentalidad socioafectiva. En el caso de autos, la realidad social y familiar mantenida en el tiempo respecto de D.P.R.G. debe primar por sobre la biológica, por cuanto es el actor quien ha ejercido en los hechos las funciones de padre de la niña, en virtud de un vínculo afectivo y de cuidado constante.

Tercero: Que este tribunal ha señalado que “...el nuevo estatuto filiativo no reconoce como único fundamento de la filiación, la verdad biológica, desde que en diversas ocasiones opta por una solución distinta, como ocurre cuando esa realidad biológica colisiona con la posesión notoria, en que se prefiere prima facie a esta última (artículo 201 del Código Civil), o en el caso de la filiación que tiene su origen en las técnicas de reproducción asistida, en que se prohíben las acciones de reclamación e impugnación (artículo 182 del Código Civil) que pudieran develar el origen biológico del hijo(a), e incluso al admitirse la institución de la repudiación, que procede independiente de que el “repudiado” por el hijo o hija, sea o no su padre o madre biológico.” (Sentencia dictada en la causa N°234.883 2023, de 17 de febrero de 2025).

Cuarto: Que una acción de filiación puede basarse, entonces, tanto en la verdad biológica como también en la posesión notoria, sin que ello importe aceptar que se trata de una acción independiente o diversa de las ordinarias de reclamación e impugnación reguladas expresamente en el Código Civil.

En tal sentido, “el tenor literal del artículo 200 del Código Civil, resulta claro al establecer que ‘La posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona servirá también para que el juez tenga por suficientemente acreditada la filiación,...’, vale decir, le da el valor de fuente de la filiación, no existiendo entonces ningún fundamento legal que relegue dicha institución a un mero “medio de prueba”, o que impida que se ejerza como fundamento de una acción de filiación, como ya podía hacerse, según se dirá, en el sistema antiguo”. (Sentencia N°23.883 2023).

Quinto: Del análisis de la prueba rendida, documental, testimonial y declaración de parte, además de los hechos asentados en el motivo segundo, tercero y quinto del fallo de primer grado, se tienen por establecidos los siguientes:

a) La niña de autos, desde antes del primer año de vida, se ha relacionado emocionalmente con el demandante y con sus parientes cercanos, quienes la reconocen como su hija, formando parte de una familia compuesta por el actor, su madre biológica y su hermana hija del actor y la demandada con estilos de apego seguro, siendo estos adultos quienes satisfacen sus necesidades emocionales, de salud, de protección y patrimoniales. La madre demandada se allanó a la demanda del actor.

b) El padre biológico no tiene ninguna vinculación con su hija, nunca tuvo un verdadero interés en relacionarse con ella, por cuanto permaneció absolutamente ausente los primeros seis años de vida de la niña y luego se contactó esporádicamente, para terminar, desistiéndose de la demanda de relación directa y regular que interpuso contra la madre, lo que fue aceptado por el Tribunal con fecha 27 de julio de 2022.

c) El actor es parte de la vida de D.P.R.G., asumiendo la responsabilidad de su crianza, educación y cuidados; la niña lo visualiza como su figura paterna, pues lo llama “papá” y lo presenta a sus amistades como tal.

d) D.P.R.G. manifestó a la profesional doña Andrea Meza González, perito de autos, que su papá es Juan Pablo, que él la cuida y que desea cambiarse el apellido; en audiencia de juicio, la curadora ad litem expresó lo dicho por la niña en la entrevista que tuvieron sobre lo discutido en esta causa.

Sexto: Que, en base a los hechos asentados, en conjunto con las imágenes fotográficas allegadas a la causa en las cuales se observa al actor con la niña en diversas actividades sociales y escolares, y el informe psicológico de la niña elaborado por la profesional Meza González, se tiene por acreditado que el actor, desde el año 2013, ha tratado a D.P.R.G. como su hija, otorgándose afecto y cuidados, integrando la familia que conforma con la demandada madre biológica D.P.R.G. y su hermana menor.

En tal sentido declararon el padre del demandante y los padres de la madre demandada, quienes resultan testigos creíbles y con pleno conocimiento de los hechos que narran, dando testimonio del contacto familiar estrecho entre el actor, Morelia G. P., las niñas y sus abuelos. Es lo que manifiesta también la demandada en su declaración de parte, quien señala que si bien el actor no es el padre biológico de su hija, él asumió el rol paterno desde los seis meses de vida de la niña y que el demandado no tuvo ni tiene ninguna relación con su hija. Una demostración que corrobora este hecho es que don Jorge R. T., demandado, mantiene deuda pendiente de alimentos y que se desistió de la acción de relación comunicacional con su hija, sin aportar prueba en esta causa en sentido diverso.

El actor ha criado a D.P.R.G. y ha estado presente en todos los eventos de su vida, tanto familiares como escolares; la lleva al colegio, es su apoderado en el establecimiento educacional, participa en sus cumpleaños y demás celebraciones familiares, se preocupa y cubre su salud y ha convivido con ella desde antes del año de vida; además, es el marido de la madre desde el año 2022, trato que perciben también los vecinos y amigas de la niña.

Séptimo: Por lo razonado es posible concluir que se configuran los presupuestos fácticos de la posesión notoria, que la doctrina tradicionalmente ha establecido que son nombre, trato y fama, a la luz de lo dispuesto en el artículo 200 del Código Civil, desde el año 2013 hasta la fecha.

En efecto, la prueba analizada demuestra que D.P.R.G. ha recibido el trato de hija del actor desde antes que contrajera matrimonio con su madre, éste la crio como tal, haciéndola parte de la familia, proveyendo a su educación y participando en su trayectoria vital, presentándola como su hija en todos los ámbitos, sociales y familiares, lo cual se traduce en que todos quienes conocen a la niña, amigos, familiares y vecindario en general, lo reputan como su padre. Tal situación de hecho se ha mantenido estable en el tiempo, por lo que cumple el requisito de haber durado por más de cinco años continuos.

La prueba de tales hechos satisface los estándares exigidos por el citado artículo 200 del Código Civil, al estar constituida por un conjunto de testimonios y otros antecedentes, que, en opinión del tribunal, permiten establecer la posesión notoria “de un modo irrefragable”.

Octavo: Que el actor dedujo en forma conjunta las acciones de impugnación y reclamación de filiación, dado que, estando determinada la filiación de D.P.R.G. por el reconocimiento efectuado por su padre biológico, para reclamar una nueva filiación, que es lo que el demandante pretende, el artículo 208 del Código Civil exige que ambas acciones se ejerzan simultáneamente.

Noveno: Que, acreditados los presupuestos de la posesión notoria de la calidad de hija de D.P.R.G. respecto al demandante, debe aplicarse la regla contenida en el artículo 201 del Código Civil, que establece que en ese caso ha de preferirse la posesión notoria por sobre la realidad biológica, a menos que hubiese graves razones que demuestren la inconveniencia para la hija de aplicar dicha regla, lo que conforme al mérito del proceso no ocurre en el caso de la especie.

Décimo: Que, como se aprecia, las acciones de impugnación y de reclamación de filiación descansan sobre un supuesto común, por lo que al haberse comprobado que se dan los supuestos de la posesión notoria respecto de la niña en perjuicio del demandado de reclamación, corresponde hacer lugar a ambas demandas, sin que sea necesario desvirtuar el vínculo biológico con el padre legal.

Undécimo: Que la decisión adoptada satisface de mejor manera el interés superior de la niña, por cuanto fue oída y expresó con claridad que su padre era el demandante, por lo cual el estado civil de hija respecto del demandante formaliza la relación socioafectiva entre ambos, contribuyendo el pleno ejercicio de sus derechos y a su desarrollo integral.

Por estas consideraciones y lo preceptuado en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 67 numerales 2 y 4 de la Ley N° 19.968, se revoca la sentencia de seis de marzo de dos mil veinticuatro en cuanto rechaza las acciones de impugnación y de reclamación de filiación deducidas por don Juan Andrés J. R. en contra de don Jorge Javier R. T. y de doña Morelia Fernanda G. P. y, en su lugar, se declara que:

I. Se acoge la demanda de impugnación de paternidad interpuesta por el actor en contra del demandado y, en consecuencia, se dispone cancelar en la inscripción de nacimiento N°3.303 del año 2012, de la Circunscripción de Talca, del Servicio de Registro Civil e Identificación de esa ciudad, el nombre del padre que la identifica como hija de filiación no matrimonial de éste.

II. Se acoge la demanda de reclamación de paternidad deducida por don Juan Andrés J. R. en contra de don Jorge Javier R. T. debiendo, en consecuencia, practicarse las inscripciones correspondientes en el Registro Civil que establezcan la filiación paterna del demandante con respecto a D. P.

No se condena en costas a la parte demandada.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la ministra señora Mireya López, quien fue de opinión de no dictar sentencia de reemplazo en virtud de los fundamentos anotados en el voto disidente del fallo invalidatorio que precede.

Redacción a cargo de la ministra señora Jessica González T. Regístrese, comuníquese y devuélvase. Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Andrea Muñoz S., Jessica González T., Mireya López M., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y Fabiola Lathrop G.

No firma la ministra señora López, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal.

EN CONTRA:

Corte Suprema, 7 de agosto de 2020, rol N° 2696-2020.

Sentencia de casación

Santiago, siete de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

En autos Rol C 160 2018, RUC 1820095110 7, sobre impugnación y reclamación de paternidad seguidos ante el Juzgado de Letras de Quellón, doña Milena Cecilia A. B., en representación de su hijo N.C.U.A., interpuso demanda de impugnación de la filiación en contra de doña Nuri del Carmen S. O., abuela paterna del adolescente, y de reclamación de la filiación en contra de don Carlos Omar O. T., actual cónyuge de la actora, solicitando que se declare que N.C.U.A. no es hijo de don Onofre Bernardino U. S., teniendo dicha calidad el señor O. T.. Contestando la demanda, la señora S. O., en calidad de única heredera de su hijo Onofre Bernardino U. S., solicitó su rechazo, deduciendo demanda reconvencional de relación directa y regular respecto de su nieto. Por su parte, el demandado de reclamación, cónyuge de la actora, se allanó. Por sentencia de cuatro de mayo de dos mil diecinueve, el tribunal de primera instancia desestimó ambas demandas, dando lugar a la reconvencional de relación directa y regular, fijando un régimen comunicacional entre la abuela paterna y su nieto, supeditado a la voluntad del adolescente, en los términos que indica. Apelada por la demandante, una sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por sentencia de dieciocho de diciembre último, la revocó y acogió las acciones de impugnación y reclamación de la filiación, declarando que N.C.U.A. no es hijo de don Onofre Bernardino U. S., teniendo dicha calidad el señor O. T., ordenando efectuar las subinscripciones pertinentes en la partida de nacimiento del adolescente.

En contra de esta última decisión la abuela paterna del adolescente, demandada de impugnación de la filiación, dedujo recurso de casación en el fondo, que pasa a analizarse. Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la parte recurrente denuncia la infracción de lo dispuesto en los artículos 195, 200, 201 y 320 del Código Civil y artículo 32 de la Ley N° 19.968, al acogerse la demanda de impugnación y reclamación de la filiación en circunstancias que existe una filiación biológica determinada y no controvertida, la que no puede ser modificada a través de la institución de la posesión notoria del estado civil de hijo que tendría el adolescente N.C. respecto del demandado de filiación. Agrega que la primera disposición en comento resultó infringida, pues se cuestionó una paternidad biológica real y no controvertida, dando por establecida una distinta bajo el argumento de la posesión notoria del estado civil, en circunstancias que esta no es la vía, medio o forma para establecer una filiación, pues se trata de un medio probatorio cuya procedencia se sujeta a las exigencias impuestas por el legislador, tal como se ha señalado por esta Corte en diversa jurisprudencia que cita y transcribe. En un segundo

capítulo denuncia vulneración de los artículos 200 y 201 del Código Civil, al dar por acreditada la posesión notoria del estado civil de hijo del adolescente respecto del demandado de reclamación de la filiación, cónyuge de su madre, en circunstancias que no concurre el requisito conocido por la doctrina como el "nombre", pues de los antecedentes de la causa fluye que N.C. ha sido siempre conocido por el apellido de su padre biológico en los ámbitos familiar, social y escolar, lo que no permitiría modificar una paternidad biológica determinada y no controvertida, que tuvo su origen en un reconocimiento voluntario realizado por su padre biológico, hoy fallecido, lo que fue reconocido por la actora. La ausencia de medios de prueba que permitan configurar este requisito hace que la sentencia impugnada, al acoger las acciones de impugnación y reclamación de paternidad, infrinja las reglas de la sana crítica, contempladas en el artículo 32 de la Ley N° 19.968. Señala, además, que la judicatura infringió lo dispuesto en el artículo 320 inciso primero del Código Civil, pues la actora carece de legitimidad para deducir las demandas, toda vez que la acción de impugnación de una filiación determinada por reconocimiento corresponde al propio hijo u otros por él, y el que demuestre un interés actual en ello. Por su parte, la de reclamación, sólo corresponde al verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros o como verdadero hijo del padre o madre que lo desconoce, hipótesis que no se configuran en el caso sublite. Luego de señalar la manera en que dichas infracciones influyen de manera sustancial en lo dispositivo del fallo, solicitó invalidar el impugnado, dictando el de reemplazo que desestime las acciones en todas sus partes.

Segundo: Que la judicatura del fondo tuvo por acreditado los siguientes hechos:

1. N.C.U.A., actualmente de 17 años de edad, nació el 19 de abril de 2003. Es hijo de doña Milena Cecilia A. B. y de don Onofre Bernardino U. S., quienes tuvieron una relación sentimental, la que terminó al nacer el hijo común.

2. Don Onofre Bernardino U. S. falleció el 1 de marzo de 2012, a consecuencia de un accidente aéreo en el sector de Melinka, Región de Los Lagos.

3. Doña Nuri del Carmen S. O., es abuela paterna del adolescente N.C.U.A.

4. Doña Milena Cecilia A. B. inició en el año 2005 una relación sentimental con don Carlos Omar O. T., contrayendo matrimonio en el año 2009. Actualmente, viven junto al adolescente N.C. y a otro hijo, A.A.O.A., de 1 año y 10 meses de edad.

5. El adolescente tiene conocimiento de que el señor O. T. no es su padre biológico, sin embargo, lo reconoce como su figura paterna desde su niñez, manteniendo un sentido de pertenencia con la familia de aquél, visualizando a los padres del señor O. T. como sus abuelos paternos. El trato entre N.C. y el señor O. T. es de hijo padre, asumiendo este último dicho rol desde que inició la relación sentimental con la actora, época en que el niño tenía un año de edad.

6. Los informes periciales concluyen que N.C. vive en un ambiente familiar caracterizado por el apego seguro, siendo el demandado de reclamación un soporte tanto en lo afectivo como en lo económico de la familia y quien participa en las actividades escolares y sociales del adolescente. Frente a la comunidad, ambos se comportan como padre e hijo, identificándolos como tales los miembros de su círculo de amigos, de la familia y la comunidad escolar.

7. N.C. manifestó durante el desarrollo del juicio que el demandado de reclamación constituye su figura paterna. Asimismo, manifestó interés por vincularse con su familia de origen, en particular,

con su abuela, doña Nuri del Carmen S. O. Sobre la base de dichos presupuestos fácticos, acogió las demandas de impugnación y reclamación de la filiación, razonando que, de los hechos que se tuvieron por acreditados, es posible configurar la posesión notoria de la calidad de hijo con el demandado de reclamación, en los términos del artículo 200 del Código Civil, siendo un hecho no discutido que el adolescente reconoce como su padre al demandado de reclamación de la filiación, quien se allanó a la demanda, lo que se refuerza con la prueba testifical. Asimismo, refirió que acoger la demanda tiene, en el caso concreto, un claro beneficio para el adolescente, al consolidar la posesión notoria del estado civil que se ha manifestado tanto en el medio familiar, educacional y social, resultando coherente con el principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 16 de la Ley N° 19.968 y en los respectivos Tratados Internacionales, no siendo óbice que el adolescente posea una capacidad de rescilencia en cuanto su conocimiento del vínculo paterno biológico y la relación de padre hijo que tiene con el señor O. T. Finalmente, agregó que no obsta lo anterior, la oposición de la abuela paterna biológica a la pretensión de la actora, desde que ha sido escaso el contacto entre ella y su nieto, sin que se ocasione un perjuicio para el desarrollo de la relación que aquella pretende fomentar, pues, dado el interés manifestado por N.C., el vínculo podrá desarrollarse en el tiempo, cuando exista voluntad para ello.

Tercero: Que la filiación ha sido definida como "el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre o con su madre y que consiste en la relación de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su inmediato descendiente, o sea, su descendiente en primer grado" (Ramos Pazos, René, en Derecho de Familia, Tomo II, Editorial Jurídica, año XX, p. 399, citando al profesor Rossel). Dicho en otros términos, es la relación que existe entre padres e hijos. Si bien el fundamento inmediato de toda filiación es el vínculo de sangre entre padres e hijos, hacen excepción a esa regla, la llamada filiación adoptiva, el caso del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción asistida cuando se emplea material genético de terceros y el estado civil que emana de la posesión notoria de la calidad de hijo de una determinada persona. En todas ellas, el elemento común es la voluntad de acogida de quienes, sin tener una vinculación sanguínea, están dispuestos a ejercer en los hechos ese rol, de padres.

Cuarto: Que las acciones de filiación tienen por objeto obtener el estado de hijo y correlativamente el de padre o madre o el de desvirtuarlo. Siguiendo a la doctrina nacional en la materia, las acciones que dan origen a los juicios de filiación son: las denominadas principales de reclamación e impugnación y las residuales de desconocimiento y nulidad. A través de ellas se persigue un pronunciamiento judicial que cree, modifique o extinga un estado de familia y se encuentran actualmente reglamentadas en el Libro I, Título VIII, en los artículos 195 a 221 del Código Civil, permitiendo determinar la paternidad y maternidad a través de un proceso judicial, mediante la investigación y la utilización de toda clase de pruebas. La filiación puede determinarse por sentencia firme, a través de la acción de reclamación de la filiación y, en caso de encontrarse previamente establecida, ha de ejercerse la acción de impugnación, para destruir la ya fijada. La primera, esto es, la de reclamación, es aquella que se ejercita con el objeto de resolver una pretensión muy concreta que es la atribución de un estado a quien carece de él, por no ostentar ninguno o por gozar de otro que no corresponde, definiéndoselas como aquellas que otorga la ley al hijo en contra de su padre o

madre o a éstos en contra de aquél para que se resuelva judicialmente que uno es hijo de otra persona. Tales acciones se encuentran reglamentadas en los artículos 204 a 210 del código sustantivo.

Quinto: Que las acciones de filiación suponen la investigación de la paternidad o maternidad, conforme lo establece el artículo 195 del Código Civil que prescribe: "La ley posibilita la investigación de la paternidad o maternidad, en la forma y con los medios previstos en los artículos que siguen", admitiéndose la más amplia investigación de estos hechos. Cabe destacar que esto no fue siempre así, pues el Código Civil en su texto original, no aceptaba la investigación de la paternidad, situación que se fue morigerando con la dictación de la Ley N° 5750 de 2 de diciembre de 1935, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, que aceptó la investigación para determinados casos, pero sólo para los efectos de reclamar alimentos y la Ley N° 10.271 que permitió la investigación de la paternidad para obtener la calidad de hijo natural, la que otorgaba derechos de alimentos y también de carácter hereditario.

Pero fue, sin lugar a dudas, la Ley N° 19.585 la que estableció sustanciales reformas al sistema filiativo en aras de lograr la plena igualdad de todos los hijos, para lo cual hubo de consagrar, también, como principio básico, el de la libre investigación de la paternidad o maternidad, el que conforme a lo previsto en el artículo 195 del Código Civil, está destinado a obtener la verdad real, biológica de una relación filiativa. En efecto, un principio fundamental que inspira a la actual legislación, como se desprende del mensaje del ejecutivo, también expresado en la ley, bajo el título "De las Acciones de Filiación", comprende el derecho de todo individuo a conocer su origen biológico, lo que se traduce en el derecho de acceder a una investigación judicial para determinar quiénes son sus padres y, consecuentemente, a tener la relación de padre o madre e hijo que surge del nexo biológico, lo que implica, a diferencia de la normativa hoy derogada, la prevalencia de la verdad real o biológica por sobre la verdad formal. Desde el punto de vista procedimental, eso llevó a reconocer la más amplia admisibilidad probatoria, como lógica consecuencia del principio anterior, consagrado en el artículo 198 del cuerpo legal citado.

Sexto: Que, de lo anterior se concluye, que las acciones de reclamación e impugnación de la paternidad, consagradas por el nuevo estatuto filiativo se sustentan en la premisa de la verdad biológica, en el sentido que lo que por ellas se pretende es la declaración de la existencia de una determinada filiación en el primer caso y, en el segundo, la declaración de que la filiación que se ostenta no es real. Tal supuesto, no se cumple, sin embargo, en el caso sub lite desde que la filiación legal que detenta el adolescente respecto de su padre fallecido, quien lo reconoció como tal, coincide con la realidad biológica, de modo que la pretensión de la actora excede los márgenes y contenidos de las acciones legales ejercidas, las que han sido previstas para aquellos casos en que no existe coincidencia entre la filiación legal y la innata.

Lo anterior, tomando en consideración que la filiación legal del hijo de la parte demandante respecto de quien lo reconoció como tal no ha sido controvertida por pruebas de tipo biológicas, por lo que es dable concluir que esta se encuentra correctamente determinada y vigente.

Séptimo: Que, por otra parte, tal como ha sido sostenido por esta Corte (en autos Roles N° 4311 - 2013, N° 15.210-2015 y 39.477-2016), la posesión notoria del estado civil de hijo es un medio de prueba y no constituye una acción autónoma de filiación, toda vez que las acciones de reclamación e

impugnación de la paternidad, consagradas por el nuevo estatuto filiativo se sustentan en la premisa de la verdad biológica, en el sentido que lo que por ellas se pretende es la declaración de la existencia de una determinada filiación en el primer caso y, en el segundo, la declaración de que la filiación que se ostenta no es real. Tal supuesto, como se dijo, no se cumple en el caso sub lite, desde que la filiación legal que tiene N.C. respecto de quien lo reconoció como hijo, coincide con la realidad biológica, existiendo otras vías jurídicas para satisfacer la pretensión de la parte demandante, como la llamada adopción por integración. En efecto, la preferencia que le otorga el artículo 201 del Código Civil a la posesión notoria, en caso alguno está prevista para una confrontación de esa circunstancia fáctica nombre, trato y fama con una filiación determinada conforme a derecho, como se desprende, por lo demás, del mismo tenor del precepto, que la enfrenta a las pruebas biológicas. Es de hacer notar, en este sentido, tal como se señaló en los autos Rol N° 33.778 2017, que el ámbito de aplicación del artículo 201 del Código Civil, es esencialmente procesal y no sustantivo, pues a la substantividad de una filiación legalmente determinada no se opone ni puede oponerse la notoria posesión en comento. Se trata, por tanto, de una regla de preferencia entre medios de prueba cuyo valor se presenta incompatible. La conclusión anterior se ve reafirmada por el hecho de contemplarse la institución de la posesión notoria como un medio de prueba y no como una acción especial, según se desprende de la interpretación armónica del artículo 200 del Código Civil ubicado en el párrafo de las Reglas Generales del Título VIII que regula las acciones de filiación con los artículos 201 e inciso segundo del artículo 309 del mismo cuerpo legal.

Si se examina la historia fidedigna de la ley, por otra parte, aparece que la motivación para incorporar la norma contenida en el artículo 201 del Código Civil, fue entregar una herramienta que pudiera contrarrestar tardías acciones de reclamación, a quienes en los hechos hubieren ejercido el rol social de padre o madre, privilegiando esa realidad por sobre la biológica al revés de lo que proponía el proyecto de ley originalmente en el supuesto de que se impugnare la filiación legalmente establecida a través del reconocimiento por dicho progenitor de hecho.

Octavo: Que, atendido lo razonado, se debe colegir que la sentencia impugnada, conculcó lo que disponen los artículos 200 y 201 del Código Civil, con influencia substancial en su parte dispositiva, porque condujo a acoger las demandas de impugnación y reclamación de la filiación, dando preeminencia a la posesión notoria del estado civil de hijo, a pesar de la existencia de una filiación biológica previamente determinada, y no controvertida por las partes, razón suficiente para acoger el recurso de casación en el fondo, dictando la respectiva sentencia de reemplazo conforme a la ley. En razón de lo anterior, se omitirá, por resultar innecesario, el pronunciamiento respecto de las demás infracciones denunciadas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada, contra la sentencia de dieciocho de diciembre último, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y anulándosela se la reemplaza por la que, acto continuo y sin nueva vista, se dicta a continuación.

Se previene que el Ministro Sr. Silva Cancino concurre a la decisión de acoger el recurso de casación en el fondo, teniendo especialmente presente que el padre biológico del adolescente se encuentra fallecido, circunstancia que, en su parecer, plantea un cuestionamiento a la posibilidad de establecer, por esta vía, una nueva filiación, sobre la base de su ausencia. En cuanto a lo expresado al inicio del considerando séptimo, previene igualmente que, en su concepto, la posesión notoria del estado civil no es puramente un medio de prueba, porque bajo ciertas circunstancias, que no son las del caso, podría convertirse en fundamento para accionar.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Muñoz y el Ministro Sr. Dahm, quienes estuvieron por rechazar el recurso de nulidad sustantivo, sobre la base de las siguientes razones justificativas:

1) Que si bien la reforma introducida por la Ley N° 19.585 en materia de filiación, impulsó un cambio de paradigma en cuando a abrir la posibilidad de investigar la paternidad, mediante toda clase de pruebas, con el objeto de hacer prevalecer la verdad biológica, lo hizo, precisamente, porque el sistema anterior dejaba prácticamente atada la determinación de la filiación a un acto gracioso del padre o madre que decidía reconocer al hijo o hija, condicionando la determinación judicial a que esa voluntad estuviera consignada en algún instrumento público del que pudiera desprenderse, o fuera confesada en citación judicial hecha para tal efecto (artículo 271 del Código Civil previo a la reforma). La reforma fue muy importante desde esa perspectiva, porque reconoció el derecho del hijo o hija a determinar judicialmente (forzadamente) quien es su padre o madre, aún en contra de la voluntad de quien lo concibió.

2) Que, con todo, como el fallo de casación advierte, la Ley N° 19.585, no reconoce como único fundamento de la filiación la verdad biológica, desde que en diversas ocasiones opta por una solución distinta, como ocurre en el caso de autos, cuando esa realidad biológica colisiona con la posesión notoria, en que se prefiere prima facie a esta última, o en el caso de la filiación que tiene su origen en técnicas de reproducción asistida, en que se prohíben las acciones de reclamación en impugnación (artículo 182 del Código Civil) que pudieran develar el origen biológico del hijo (a), e incluso al admitirse la institución de la repudiación, que procede independiente de que el "repudiado" por el hijo o hija, sea o no su padre o madre biológico. Dicho cuerpo legal reconoce, además, la regulación de una filiación que no está basada en la "naturaleza", aludiendo derechamente a la institución de la adopción (Artículo 179 del Código Civil).

3) Que tanto en el caso de la posesión notoria como en el de reproducción asistida, lo que se valora es la "voluntad de acogida" de personas que si bien carecen de un vínculo biológico, han manifestado, por hechos concretos, que ejercen o pretenden ejercer la paternidad o maternidad de un hijo o hija; elemento que también está presente y a la base de la adopción. En todas ellas, el lazo afectivo pasa a sustituir la vinculación biológica, marcando el desarrollo de ese niño o niña.

4) Que, el artículo 200 del Código Civil, introducido por la Ley N° 19.585, mantuvo, con mínimas modificaciones, la institución de la posesión notoria del estado civil, regulada en el sistema anterior, estableciendo que "la posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona servirá para que el juez tenga por suficientemente acreditada la filiación, siempre que haya durado al menos

cinco años continuos..." y para efectos de posibles contradicciones entre la verdad biológica y la posesión notoria, dio reglas (Artículo 201 del Código Civil) para resolver dicho conflicto, haciendo primar esta última sobre la primera, con lo que valoriza el significado de la paternidad o maternidad social, sin perjuicio de entregar la facultad a la judicatura que conoce del caso de modificar la regla si así lo exige el interés superior del niño. Es importante hacer notar que esta forma de resolver la disyuntiva surgió en el debate parlamentario, ya que el proyecto original, inspirado en las ideas expuestas en la motivación¹ de este voto, proponía que primase la verdad biológica, de lo que se puede colegir que se alcanzó un mayor equilibrio al decantar posibles situaciones que obligan a morigerar el paradigma.

5°) Que, cabe tener presente que el Código Civil previo a la reforma introducida por la Ley N° 19.585 ya asumía que la posesión notoria podía constituir una fuente de determinación de filiación. En efecto, si se examina con detención el antiguo artículo 271 del Código Civil, se verá que se otorgaba la calidad de "hijo natural", N° 1) a quienes el padre o madre hubiere reconocido como suyo; N° 2) al que hubiera obtenido reconocimiento por sentencia judicial, supeditado a la existencia de un instrumento público en que constara una "confesión manifiesta" de maternidad o paternidad; "N° 3) a los que hubieren poseído notoriamente a lo menos durante diez años consecutivos, la calidad de hijo respecto de una determinada persona"; y N° 4) aquellos reconocidos por el supuesto padre, que citado a presencia judicial, confesare bajo juramento la paternidad.

6°) Que, en tales condiciones, no resulta razonable sostener que la legislación actual, promotora de mayores derechos de los hijos, habría negado la opción que antes le fue reconocida, de ejercer una acción judicial para establecer un determinado estado civil, basado en la posesión notoria, restringiendo su uso a la posibilidad de ejercerla excepcionalmente ante la reclamación de una filiación biológica que no se encuentra determinada, sin que exista ningún fundamento legal que avale dicha postura.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señores Jorge Dahm O., Mauricio Silva C., y señora María Angélica Cecilia Repetto G.

Sentencia de reemplazo

Santiago, siete de agosto de dos mil veinte.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de sus motivaciones cuarta y quinta, que se eliminan.

Asimismo, se reproduce de la sentencia de casación los ratiocinios segundo a octavo.

Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 de la Ley N° 19.968 y 186 y siguientes del

Código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada, de cuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictada en los autos Rol C160 2018, RUC 1820095110 7, seguidos ante el Juzgado de Letras de Quellón.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Muñoz y del Ministro Sr. Dahm, quienes estuvieron por no dictar sentencia de reemplazo, en atención a lo expresado en la disidencia del fallo de casación que antecede.

Regístrese y devuélvanse.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señores Jorge Dahm O., Mauricio Silva C., y señora María Angélica Cecilia Repetto G. Rol N° 2696 2020.